**PODER JUDICIAL DE LA
NACIÓN**

***CÁMARA FEDERAL
DE LA SEGURIDAD
SOCIAL***

PROSECRETARÍA GENERAL

***DEPARTAMENTO
DE
JURISPRUDENCIA***

***BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA Nro.
59***

Año 2014

ÍNDICE

SEGURIDAD SOCIAL

DOCENTES	5
FINANCIACIÓN	
Cargos	5
Deudas con las cajas	10
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD	
Conscriptos	15
Militares	16
Policía Federal	20
Prefectura Naval	21
HABERES PREVISIONALES	
Bonificación	21
Reajuste	22
Retenciones	31
JUBILACIÓN ANTICIPADA	32
JUBILACIÓN EXTRANJERA	32
JUBILACIÓN Y RETIRO POR INVALIDEZ	33
LEGISLADORES	33
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES	36
PENSIÓN	
Concubina	37
Viuda/o	38
PRESCRIPCIÓN	40
REGÍMENES ESPECIALES	41
SERVICIOS	
Reconocimiento	44

PROCEDIMIENTO

APODERADOS Y GESTORES	45
CADUCIDAD DE INSTANCIA	46
COMPETENCIA	48
DEMANDA	48
EJECUCIÓN DE SENTENCIA	49
EXCEPCIONES	60
HECHO NUEVO	61
HONORARIOS	62
INHABILIDAD DE INSTANCIA	66
NULIDADES	66

RECURSOS	
Aclaratoria	67
Apelación	67
SANCIONES CONMINATORIAS	71

I- SEGURIDAD SOCIAL

DOCENTES

DOCENTES. Haberes previsionales. Reajuste. Ley 24.016. Suplemento docente. Dec. 137/05. Sentencia anterior.

Habiendo la interesada obtenido el reajuste de haberes con anterioridad al inicio de la presente acción, deviene improcedente la demanda posterior de reajuste, pues no se vislumbra la medida del interés de esa pretensión basada en la revisión del haber inicial por el régimen de la ley 24.016, al no existir perjuicio que afecte -o pueda afectar- su derecho previsional una vez logrado el recálculo del haber con arreglo al Dec. 137/05. En el mismo sentido vale afirmar que, acreditado como ha sido que en atención a su propio requerimiento, la actora percibe el mentado suplemento docente previsto por el decreto de referencia para alcanzar el 82% móvil, mediante el cual el Poder Ejecutivo reconoció la vigencia y aplicación del régimen de la ley 24.016, cuya movilidad específica se encuentra regida por la Res. S.S.S. 14/09, deviene abstracto el pedido posterior.

C.F.S.S., Sala III

sent. 160691

03.09.14

“CEPEDA, ENRIQUETA ARGENTINA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(F.-P.L.-L.)

FINANCIACIÓN

CARGOS

FINANCIACIÓN. Cargos. Impugnación de deuda. Dependientes. Prueba. Apelación. Monto.

Aunque el monto de la multa impuesta no exceda la suma actualizada del último párrafo del art. 242 del Código de rito, el recurso de apelación debe considerarse procedente. Ello así, pues la limitación referida está destinada a regir sobre decisiones tomadas dentro de un proceso judicial, con el objeto de convertirlo en uno de instancia única y así -vale precisar- agilizarlo, mejorarlo y, por tanto, convertirlo en más eficaz; pero de ningún modo puede llegarse al extremo de aplicar la inapelabilidad a una resolución que pone fin a un proceso tramitado ante un órgano administrativo. Una interpretación contraria vedaría la posibilidad de acceso a la justicia, circunstancia flagrantemente violatoria de la garantía constitucional de defensa en juicio, pues se privaría a la persona de la única instancia judicial, recaudo que el Alto Tribunal consideró esencial para salvaguardarla (Fallos 302:263). (Del dictamen Fiscal al que adhiere el Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 158208

28.04.14

“SOLLA, JOSÉ c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda”

(L.-P.L.-F.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Impugnación de deuda. Dependientes. Prueba. Apelación. Monto.

Debe hacerse lugar al planteo del recurrente cuando de las constancias de autos se desprende que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determinó la deuda sin otro sustento probatorio que la verificación efectuada por el inspector actuante, la que de ninguna forma logra acreditar los caracteres propios de la relación laboral, quedando la pretensión fiscal sin elementos que la respalden y determinándose la multa sin algún otro tipo de elemento probatorio que lo avale (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 05.04.11, “Guerrero, Ricardo”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere

el Dr. Laclau).
C.F.S.S., Sala III
sent. 158208
28.04.14
"SOLLA, JOSÉ c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda"
(L.-P.L.-F.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Impugnación de deuda. Dependientes. Prueba. Apelación. Monto.

En virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada. Aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo -cfr. Hutchinson, Tomás, "Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549", pág. 29 y ss- (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 19.08.09, "Mercopallet S.R.L."). (Del dictamen Fiscal al que adhiere el Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III
sent. 158208
28.04.14
"SOLLA, JOSÉ c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda"
(L.-P.L.-F.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Impugnación de deuda. Dependientes. Prueba. Apelación. Monto.

Respecto de la inapelabilidad de las causas de menor cuantía que establece el art. 242, segunda parte, del C.P.C.C. (hoy de \$ 20.000, conf. ley 26.536), la Corte Suprema ha dicho: "Cuando se trata de pronunciamientos jurisdiccionales emanados de órganos administrativos debe garantizarse su sujeción a un control judicial suficiente, a fin de impedir que aquellos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior" (cfr. "Casa Enrique Schuster S. A. I. C. c/ Administración Nacional de Aduanas", sent. del 27.10.87). Asimismo se ha sostenido que "cuando la índole, naturaleza y gravedad del pronunciamiento genera un gravamen irreparable, corresponde declarar admisible el recurso de apelación interpuesto, no obstante que el monto comprometido sea inferior al previsto por el art. 242 C.P.C.C., puesto que, de otra forma, se configuraría un supuesto de exceso ritual en detrimento de la calidad del servicio de justicia garantizado por la C.N." (cfr. C.N.A.Civ., Sala D, sent. del 27.02.96, "Radio Suipacha S. A. c/ Mosquera, Domingo E."). (Del voto del Dr. Poclava Lafuente al que adhiere el Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III
sent. 158208
28.04.14
"SOLLA, JOSÉ c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda"
(L.-P.L.-F.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Impugnación de deuda. Dependientes. Prueba. Apelación. Monto.

"La presunción del art. 23 de la L.C.T. no puede ser interpretada globalmente si se persigue el cobro de aportes omitidos basándose en una supuesta relación de dependencia, por lo cual el organismo actuante debe acreditar dicha relación en cada uno de los casos en que pretenda que la supuesta vinculación laboral genera obligaciones previsionales" (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 04.07.92, "Consortio Hidroservice Hidrenid"). Asimismo se ha sostenido que "Aun cuando la situación planteada sea dudosa, dicha circunstancia no podrá redundar en perjuicio del imputado, debiendo priorizarse el principio de inocencia, y en tanto no se logre demostrar plenamente la existencia de una relación laboral en la extensión y cuantía que presume el organismo, corresponderá dejar sin efecto el cargo formulado" (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 03.06.04. "Arzobispado de Mercedes"). (Del voto del Dr. Poclava Lafuente al que adhiere el Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III
sent. 158208
28.04.14
"SOLLA, JOSÉ c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda"

(L.-P.L.-F.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Impugnación de deuda. Multa. Relación de dependencia. Clave de alta temprana. Sistema informático. Error.

Surgiendo de las constancias acompañadas por la empleadora la registración de los supuestos trabajadores por los cuales se impone multa, el acuse de recibo oportunamente tramitado por la contribuyente -mediante internet- firmados por cada una de las personas relevadas, y observándose coincidencia entre la fecha en la cual se tramitó la Clave de Alta Temprana y la declarada por cada uno de ellos con motivo del referido relevamiento llevado a cabo por el organismo ministerial, ha de concluirse que fue por motivos ajenos a la empresa que el sistema de A.F.I.P. no vinculó el C.U.I.L. ingresado con el nombre y apellido de los trabajadores. Por ello, no se observa justificativo alguno para colocar en cabeza del contribuyente un error en el sistema informático -ya que excede su órbita-, debiéndose en consecuencia revocar la resolución que decidió la aplicación de la multa.

C.F.S.S., Sala I

sent. 160928

26.05.14

"LA BELLA S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda"

(Ch.-P.T.-M.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Profesionales. Relación laboral. Prueba. Presunción. Art. 23 L.C.T.

Cuando se trata de profesionales, si bien la vocación expansiva del derecho del trabajo (y la propia evolución social) hacen que gran parte de los profesionales universitarios (típicos trabajadores autónomos) se desempeñen bajo relación de dependencia -enajenando su relación de trabajo y tiempo libre a cambio de una retribución determinada o determinable en dinero- no puede partirse de dogmatismos científicos, y será la prueba concreta que se produzca en cada litigio lo que determinará y calificará las relaciones existentes.

C.F.S.S., Sala I

sent. 159390

21.04.14

"ROJAS, JORGE ARMANDO c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda."

(Ch.-M.-P.T.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Profesionales. Relación laboral. Prueba. Presunción. Art. 23 L.C.T.

Cuando uno de los sujetos de la relación es un profesional, no rige la presunción del art. 23 de la ley de contrato de trabajo, ya que el orden público no se encuentra comprometido en relación con la libre elección de las alternativas contractuales -contrato de trabajo, locación de obra o servicios profesionales (cfr. C.N.A.T., Sala VI, sent. del 18.02.91, "Pérsico, Liberato c/ Zubizarreta Ward, Pablo").

C.F.S.S., Sala I

sent. 159390

21.04.14

"ROJAS, JORGE ARMANDO c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda."

(Ch.-M.-P.T.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Relación de dependencia. Agencia de modelos.

Existe relación de dependencia cuando el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, recibiendo de este las decisiones e instrucciones respecto de las tareas a realizar, y obteniendo a cambio la remuneración acordada. De ahí que sea harto conocida la caracterización por la cual la relación de dependencia implica la subordinación del trabajador en relación al empleador en aspectos técnicos, económicos y jurídicos. Por el contrario, el trabajador autónomo asume los riesgos de su actividad sin incorporarse a la organización de un tercero para la obtención de su ganancia, es decir, él mismo asume la organización de sus tareas como del riesgo económico que la misma implica.

C.F.S.S., Sala II

sent. 163798

22.10.14

"SUBLIM MANAGEMENT S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"

(D.-H.-F.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Relación de dependencia. Agencia de modelos.

La actividad de modelaje se encuentra dentro de las denominadas zonas grises, escapando -en principio- a la forma clásica en que se tipifica la subordinación a los fines de tener por acreditada una relación de empleo. En consecuencia, no encuadrando el modelaje dentro los parámetros de subordinación, la única forma de poder considerar al mismo como dependiente de un empleador lo será en la medida en que pueda acreditarse la participación de la trabajadora modelo dentro la organización empresarial para la cual preste servicios, su relación con los fines que persigue la empresa en cuestión y la obtención a cambio de un beneficio económico, independientemente de cómo se lo denomine (remuneración u honorarios).

C.F.S.S., Sala II

sent. 163798

22.10.14

"SUBLIM MANAGEMENT S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(D.-H.-F.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Relación de dependencia. Agencia de modelos.

En la medida que de las declaraciones recabadas a las trabajadoras -modelos- como de los contratos analizados por el organismo fiscal, no se desprenda que se encontraban sujetas a órdenes o instrucciones de la agencia de modelos que las representa, la que -por otra parte- tampoco podía suplantar la voluntad de aquellas en lo que hace a la aceptación de las ofertas laborales, no puede tenerse por acreditada la relación de dependencia en los términos del art. 23 de la L.C.T.

C.F.S.S., Sala II

sent. 163798

22.10.14

"SUBLIM MANAGEMENT S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(D.-H.-F.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Relación de dependencia. Agencia de modelos.

No puede tenerse por acreditada la subordinación económica cuando las propias trabajadoras -modelos- son quienes deciden aceptar o rechazar las propuestas laborales que su representante les acerca, sumado a que el monto remuneratorio es variable y en función de cada cliente, así como del tiempo de duración de cada desfile (si es campaña para una marca, simple desfile, sesión de fotos, etc.). De ello se desprende que el riesgo económico lo asume la modelo al aceptar o rechazar una oferta laboral. No empece a este razonamiento el hecho de que sea el agente de las modelos quien facture a la empresa que las contrata, puesto que parece razonable que quien organiza un evento tenga una unidad de organización en el representante, quien factura los honorarios de las modelos, para posteriormente cobrarse de dicho importe su comisión y entregar el resto a aquellas a través de la facturación correspondiente.

C.F.S.S., Sala II

sent. 163798

22.10.14

"SUBLIM MANAGEMENT S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(D.-H.-F.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Relación de dependencia. Agencia de modelos.

No existe subordinación técnica, cuando tanto de las declaraciones testimoniales recabadas, como prueba documental acompañada, no surge acreditado que la agencia practicara la total planificación de las tareas a desarrollar sin la participación o consentimiento de las modelos, siendo estas -en definitiva- las que expresan su voluntad y consentimiento respecto al tipo de campaña o actividad para el que enfocan su carrera.

C.F.S.S., Sala II

sent. 163798

22.10.14

"SUBLIM MANAGEMENT S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"
(D.-H.-F.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T.

Pese a que las actas de inspección refieran a la existencia de personas trabajando en el lugar -en el caso, Mar del Plata-, prestando servicios que se entienden como propios del giro comercial de la imputada, la presunción que aplica el organismo administrativo respecto de la existencia del vínculo laboral se encuentra desvirtuada por la documental -o cuanto menos existen indicios que tornan verosímil la hipótesis contraria- si el sitio en el que se realizó la inspección no fue el domicilio de la contri-

buyente. En consecuencia, cabe concluir que el organismo no realizó la debida gestión para dar fundamento al cargo imputado.

C.F.S.S., Sala I

sent. 157476

11.11.13

“ROSBACO S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda”.

(M.-P.T.-Ch.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T.

La presunción del art. 23 de la L.C.T. entra a jugar cuando en la relación entre el dador de trabajo y el prestador del mismo se tipifican los elementos esenciales del contrato de trabajo. De lo contrario, toda transacción contractual en virtud de la cual una persona obtiene una ganancia por el trabajo de otra o encomienda la realización de un acto o la ejecución de una obra, o la prestación de un servicio, debería encuadrarse en los límites del Derecho del Trabajo, con lo que se produciría una invasión de esta rama del derecho en otra, con la consiguiente problemática económica y social.

C.F.S.S., Sala I

sent. 157476

11.11.13

“ROSBACO S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda”.

(M.-P.T.-Ch.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T.

El mecanismo indiciario-presuntivo en la materia ha dado lugar a una intensa actividad tribunalicia motivada por la naturaleza iuris tantum y por la consecuente inversión del onus probandi, llegándose a la conclusión de que la presunción se rompe si las circunstancias, relaciones o causas que motivan la prestación demuestran lo contrario, debiendo interpretarse la cuestión mediante la adecuación de los principios generales a las circunstancias de cada caso. A ello debe agregarse que la ley 26.063 ha traído al ámbito de la Seguridad Social un precepto similar, cuando en su art. 4 establece que “se presumirá, salvo prueba en contrario, que la prestación personal que se efectúa a través de un trabajo, se realiza en virtud de un contrato laboral pactado, sea expresa o tácitamente por las partes”, criterio este complementado recientemente por la Res. Gral. A.F.I.P. 2927/10).

C.F.S.S., Sala I

sent. 157476

11.11.13

“ROSBACO S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda”.

(M.-P.T.-Ch.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T.

Si bien el Tribunal comparte el criterio del valor probatorio relevante de las manifestaciones espontáneas y sorpresivas efectuadas por los empleados ante las autoridades administrativas, los datos así obtenidos no pueden tener por sí solos aptitud para formar convicción. Tanto más si dichas manifestaciones están controvertidas y no se ponderó o produjo debidamente la prueba. Ello así, en tanto por el principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada, pues aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (ver Hutchinson, Tomás; " Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549 ", pág. 29 y ss.).

C.F.S.S., Sala I

sent. 157476

11.11.13

“ROSBACO S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda”.

(M.-P.T.-Ch.)

FINANCIACIÓN. Cargos. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T.

La relación de dependencia no es definible en términos de características precisas y unívocas. Constituye un conglomerado de circunstancias que, en mayor o en me-

nor medida, contribuyen a crear un clima económico y social concreto, susceptible de encajar razonablemente en aquél encuadre jurídico, que depende de varios criterios y normas: contenido de la obligación, circunstancias especiales y temporales en que se desempeña la tarea, grado de asunción de riesgos, forma de pago, mayor o menor preeminencia de la prestación, solvencia del prestatario del trabajo y otras circunstancias, según el caso de que se trate. Es decir que el contrato de trabajo no es una institución de características definitorias precisas: la relación de dependencia se manifiesta en diversos elementos que, en su conjunto y valorados razonablemente según las circunstancias del caso, contribuyen a encuadrar el vínculo en el ámbito laboral (cfr. C.N.A.T., Sala III, sent. del 28.05.93, "Frías, Rosario del C. c/ Suárez, Ramón"; C.F.S.S., Sala I, sent. del 29.04.02, "Unisys Sudamericana S.A.>").

C.F.S.S., Sala I

sent. 157476

11.11.13

"ROSBACO S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda".

(M.-P.T.-Ch.)

DEUDAS CON LAS CAJAS

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Aportes y contribuciones. Declaraciones juradas. Error. Multas.

La Res. 1566/03 consagra una responsabilidad de tipo objetivo. Por tal razón, siendo la finalidad de la multa impuesta por la resolución cuestionada castigar el ingreso tardío de los aportes con que se necesitan contar en tiempo oportuno para la financiación del sistema, resulta innecesaria la atribución de culpa o dolo para la imposición de la sanción. En consecuencia, corresponde desestimar la argumentación de la recurrente que alega que la infracción cometida se debió a un error excusable debido a la equivocada información brindada por el nuevo personal contratado. En tal sentido, el Tribunal tiene dicho que "...en el caso de las multas previsionales, la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción al infractor. El elemento subjetivo no tiene cabida, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente considerada y no la intencionalidad de la parte; ello sin perjuicio de constatar la razonabilidad de la sanción. Esto no implica que el infractor invoque y demuestre la existencia de alguna causal exculpatoria válida (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 19.10.98, "Pilot Pen S.A."; íd. Sala I, sent. del 26.09.08, "Roca Argentina S.A."). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 163014

26.09.14

"ALPARGATAS CALZADOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"

(D.-F.-H.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Aportes y contribuciones. Declaraciones juradas. Error. Multas.

No puede prosperar el cuestionamiento del procedimiento llevado adelante en sede administrativa, toda vez que la jurisprudencia del fuero ha sostenido que las actas de inspección no constituyen un acto administrativo en sentido estricto (conforme lo regula el Título III de la ley 19.549), sino que deben considerarse como un acto preparatorio del mismo. En consecuencia, las diligencias que se cumplen con la intervención de los inspectores (con las facultades que les acuerda la normativa vigente -que en el caso de autos no fuera objeto de cuestionamiento legal alguno por la accionante-) y se instrumentan a través de las actas de verificación que se notifican al interpelado, no son más que constataciones de la situación del contribuyente frente al organismo administrativo, siempre sujetas a revisión. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 163014

26.09.14

"ALPARGATAS CALZADOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda"

(D.-F.-H.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Aportes y contribuciones. Declaraciones juradas. Error. Multas.

El otorgar facultades a la D.G.I. o a los diferentes organismos competentes en el

área para determinar el contenido de la sanción -en el caso, una multa- encuentra su fundamento en la facultad de contralor que tiene el organismo, de modo de asegurar el correcto funcionamiento de la administración tendiente a determinar la obligación previsional y a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella efectúen los contribuyentes. En este sentido, ha señalado la C.S.J.N. que la descripción del hecho punible por vía reglamentaria, no supone atribuir a la administración una facultad indelegable del poder legislativo, tratándose -por el contrario- del ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria prevista en el art. 86 inc. 2 de la C.N. (Fallos 300:443). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 163014

26.09.14

“ALPARGATAS CALZADOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(D.-F.-H.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Aportes y contribuciones. Declaraciones juradas. Error. Multas.

En general, respecto al tipo penal administrativo descripto como presupuesto de la aplicación de una multa, no se ha dado mayor relevancia a la intencionalidad del contribuyente, poniéndose siempre de resalto el carácter objetivo de la falta y subsiguiente sanción. Ello más allá de la puntual ponderación de las posibles causales exculporias según el caso. Es sobre ese soporte argumental que alega el ente recaudador, que en la temática de la seguridad social la conducta de quien incumple es punible por la sola circunstancia de verificarse el pago de la suma debida por ésta con posterioridad a la fecha límite legal. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 163014

26.09.14

“ALPARGATAS CALZADOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(D.-F.-H.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Aportes y contribuciones. Declaraciones juradas. Error. Multas.

Aparece como ambiguo en el aspecto sancionatorio el actuar de la administración. Pareciera que hubiera dos áreas diversas; una comprensiva de la materia de seguridad social en donde anida el principio de la responsabilidad objetiva, y otra de índole impositiva en donde la punición haya su fuente en el principio de la personalidad de la pena. Esa disociación en la gestión persecutoria, no es compatible con la finalidad que ha guiado el dictado por el Poder Ejecutivo Nacional del Dec. 507/93 y en cuya órbita se inserta el ente recaudador en cuanto postula la unificación de materias y procedimientos. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 163014

26.09.14

“ALPARGATAS CALZADOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(D.-F.-H.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Aportes y contribuciones. Declaraciones juradas. Error. Multas.

Mantener de modo absoluto el carácter objetivo de la sanción en el ámbito de la seguridad social, puede llevar a desigualdades respecto de otras áreas del derecho donde se analiza la conducta subjetiva del contribuyente, personalizando la pena y considerando cada supuesto según las alternativas que presente. Esa necesidad se hace más palpable en causas como la de autos, donde la sanción ha sido tipificada como “falsificación” y “adulteración”. Esas expresiones van más allá del mero error, omisión o diferencia hallada en las declaraciones juradas que dieron origen a la multa (incorrecta incorporación de trabajadores en el régimen capitalización cuando correspondían al régimen de reparto). La terminología empleada implica una actitud objetiva y subjetiva que necesariamente deben ir de la mano, para demostrar la antijuridicidad que se imputa. La utilización de expresiones con una connotación específica en el marco sancionatorio, no puede equipararse al dato incorrecto; falsedad y adulteración implican la presencia del falsificador, es decir, de quien manipule los datos o elementos para realizarla. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 163014

26.09.14

“ALPARGATAS CALZADOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(D.-F.-H.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Aportes y contribuciones. Declaraciones juradas. Error. Multas.

La ley 17.250, es amplia al describir las situaciones pasibles de multa. Se describen diversos supuestos como ser falta de inscripción, falta de denuncia de trabajadores y/o incumplimiento de la retención de aportes, mora, negativa a suministrar los informes referidos, y cuando se alude a la falsa declaración o adulteración de datos, añade la norma “sin perjuicio de la acción penal que correspondiere”. Ese agregado es por demás elocuente, pues implica ampliar el hecho en sí a la actitud del contribuyente para cometerlo y, por tanto, excede el carácter objetivo atribuido a la sanción previsional, en razón del encuadramiento normativo que se ha efectuado en el caso donde se incorpora otro ingrediente: la intencionalidad del sujeto en cometer la falsedad y/o adulteración que se le atribuye. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 163014

26.09.14

“ALPARGATAS CALZADOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(D.-F.-H.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Aportes y contribuciones. Declaraciones juradas. Error. Multas.

Sin perjuicio de la incorrecta tipificación de la sanción impuesta por el organismo, resulta procedente imponer un correctivo razonable y equitativo en relación con la falta cometida. Ello no implica reemplazar al órgano administrativo en sus atribuciones, sino verificar el correcto ejercicio de la misma dentro del marco legal y con arreglo a las circunstancias fácticas que se presentan en cada situación; teniendo en cuenta que el administrado goza de todos los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional, y entre ellos el debido control judicial de la imposición de una sanción. En consecuencia, descartado el tipo penal encuadrado por la administración, y ante la actitud del contribuyente que rectificó el error incurrido, corresponde asimilar la situación a una mora, por lo que se estima procedente ajustar la multa a este concepto; debiendo fijarse la sanción de acuerdo con el lapso transcurrido desde su devengamiento hasta la fecha en que se produce la rectificación y pago, calculada la misma sobre la base del total omitido, con la reducción pertinente de acuerdo a la regularización efectuada. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 163014

26.09.14

“ALPARGATAS CALZADOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(D.-F.-H.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Aportes y contribuciones. Declaraciones juradas. Error. Multas.

En cuanto a la personalidad de la pena y a la consecuente necesidad de poder atribuirse la conducta punible, tanto objetiva como subjetivamente, la C.S.J.N. en Fallos 271:297 consagra principios que constituyen esenciales tributos del derecho penal-fiscal, cuyo abandono no cabe inferir de una norma susceptible de interpretarse en armonía con aquéllos, en el sentido de conferir al juzgador un más extenso poder de apreciación en punto al elemento subjetivo, al despojar a éste de connotaciones específicamente penales (cfr. Consid. III, citado por C.N.A. Cont. Adm. Fed., Sala III, "CPC S.A. c/ D.G.I.", sent. del 17.08.07). A ello debe sumarse que al fin buscado con la imposición de la multa no puede adicionarse un enriquecimiento indebido del acreedor a costa del deudor, sobre todo si la deuda no aparece originada en una omisión negligente o dolosa, tema que habrá que demostrar en cada caso concreto. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 163014

26.09.14

“ALPARGATAS CALZADOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”

(D.-F.-H.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Aportes y contribuciones. Declaraciones juradas. Error. Multas.

La facultad de graduación de la multa entre el mínimo y el máximo previsto en la ley, no escapa al control de razonabilidad que corresponde al Poder Judicial con respecto a los actos de la Administración Pública, incluso cuando se trata de facultades discrecionales de la administración (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.11.98, “Demchenko, Iván c/ Prefectura Naval Argentina”). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 163014

26.09.14

“ALPARGATAS CALZADOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(D.-F.-H.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Impugnación de deuda. Depósito previo. Habilitación de la instancia judicial. Facultad de la A.F.I.P.

El órgano administrativo no se encuentra facultado para analizar si se han cumplido o no los requisitos que hacen a la habilitación de la instancia judicial, aspecto que debe resolver la Cámara Federal de la Seguridad Social, debiendo aquel limitar su actividad a remitir las actuaciones para su consideración por esta última. Ello así, ha de concluirse que la decisión de la A.F.I.P. de no elevar las actuaciones por no haberse dado cumplimiento al depósito previo previsto en el art. 15 de la ley 18.820 -y sus mod.-, y el punto 10.5 del Anexo I de la Res. Gral. 79 de A.F.I.P., constituye un exceso de actividad administrativa.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84405

03.09.14

“ADMINISTRACIÓN BAIGUN S.H. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(F.-H.-D.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Impugnación de deuda. Desistimiento. Régimen de Facilidades de Pago. Res. Gral. A.F.I.P. 3451/13.

Acreditado por la contribuyente que se acogió al “Régimen de Facilidades de Pago” dispuesto por la Res. Gral. 3451/13 de la A.F.I.P., y manifestada su voluntad de desistir tanto del proceso como del derecho -con el alcance previsto en los arts. 304 y 305 del C.P.C.C.- acorde con lo prescripto en el art. 14 de la resolución general citada, resulta de aplicación en autos el principio dispositivo por el cual a la parte le asiste el derecho de apelar, no apelar o desistir de la apelación deducida siempre antes del pronunciamiento del Tribunal. En consecuencia, corresponde tener a la accionante por desistida de la apelación interpuesta contra la resolución por la cual el organismo recaudador determinó una deuda con el S.U.S.S.

C.F.S.S., Sala III

sent. 159606

09.06.14

“AMBROGI, GUILLERMO CLAUDIO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(P.L.-F.-L.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Impugnación de deuda. Recursos. Apelación. Depósito previo.

Surgiendo de las constancias de autos que la recurrente, con posterioridad a la solicitud de la liquidación -la que fue practicada y notificada por parte del organismo- dio cumplimiento al requisito establecido por el art. 15 de la ley 18.820, como así tampoco probó de modo efectivo y concreto hallarse comprendido en las situaciones de salvedad previstas para supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación (conforme la doctrina del Alto Tribunal al respecto), corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto.

C.F.S.S., Sala I

sent. 160946

26.05.14

“AQUAD S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda”
(Ch.-P.T.-M.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Revisión judicial.

En virtud de lo expresado por la C.S.J.N. en la causa “Ruedas Cimetel S.A.I.C.I.M c/ DGI” (sent. del 03.10.97), donde se decidió que una impugnación denegada en sede administrativa debe recurrirse ante la Cámara Federal de Seguridad Social, por la vía de recurso de queja previsto en el art. 8 inc. f) de la ley 23.473 -luego art. 26 inc. b) de la ley 24.463-, y en el supuesto de entender que el requisito del depósito previo de la deuda resultante del acto administrativo (art. 15 de la ley 18.820) fuese lesivo de garantías constitucionales, le asistía el derecho de plantear las objeciones respectivas ante ese fuero (cfr. C.S.J.N., “Bonanno, Raúl Eduardo c/ D.G.I.”, sent. del 18.04.97), y en ese orden de ideas, agregó que: “cabe señalar que si la ley establece una determinada competencia recursiva respecto de las resoluciones que deniegan planteos de impugnación, no hay razón para suponer que

cuando tiene lugar un rechazo in limine por motivos formales, deba dejarse de lado la vía procesal prevista por el legislador”; corresponde declarar formalmente admisible el recurso de queja por apelación denegada, y entrar a considerar la cuestión planteada.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 94635

10.11.14

“LA DOÑA S.R.L. c/ A.F.I.P. s/Recurso de queja”

(Ch.-M.-P.T.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Revisión judicial.

Si bien el depósito previo constituye, en el sistema previsional, un requisito de admisibilidad del recurso deducido, es el Tribunal quien mediante una resolución fundada, declara cumplida -o no- dicha obligación legal, como así también la procedencia de la exención del mismo. A mayor abundamiento, además de considerar el cumplimiento o no de los recaudos formales que hacen a la habilitación de la instancia (depósito previo), debe verificarse si el procedimiento administrativo se ha desarrollado válidamente, respetándose todos los derechos y garantías del particular involucrado. Ello así porque el procedimiento, es decir la serie de trámites y formalidades exigidas para la realización de un acto administrativo, participa del doble carácter de garantía administrativa y de garantía jurídica, en cuanto a que, por un lado persigue la buena marcha de la administración, y por el otro, procura la tutela de los derechos e intereses particulares a que afecta -o puede afectar- el acto administrativo en cuestión.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 94635

10.11.14

“LA DOÑA S.R.L. c/ A.F.I.P. s/Recurso de queja”

(Ch.-M.-P.T.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Multas. Registración de trabajadores. Ley 11.683.

No habiéndose hecho cargo la recurrente de los fundamentos de la resolución en crisis, cabe concluir que la presunción de existencia del vínculo laboral en los términos del art. 23 de la L.C.T. que dimana del hecho de haberse encontrado a la persona por la que se impuso la multa por infracción a la ley 11.683 (artículo sin número agregado a continuación del art. 40) prestando servicios para la actora, no se halla desvirtuado, lo que concuerda con lo normado por el art. 4 de la ley 26.063 en el ámbito de la seguridad social en el que "se presumirá, salvo prueba en contrario, que la prestación personal que se efectúa a través de un trabajo se realiza en virtud de un contrato laboral pactado, sea expresa o tácitamente, por las partes". Ello así, máxime cuando dicha solución se condice con la declaración espontánea y sorpresiva efectuada por la persona referida ante la autoridad administrativa -y que se constata en el acta de relevamiento-, en la que dio cuenta de su remuneración mensual, jornada laboral y demás circunstancias de su relación con la encartada.

C.F.S.S., Sala III

sent. 158364

30.04.14

“LATIN AMÉRICA POSTAL S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda”

(F.-L.-P.L.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Recursos. Denegación. Depósito previo. Facultad del Tribunal.

Debe declararse mal denegado el recurso de apelación presentado por considerar el organismo que no se encuentra cumplimentado el requisito del pago previo dispuesto por el art. 15 de la ley 18.820. Ello así, porque la posibilidad de ejecutar el crédito que el referido organismo reclama queda supeditada al resultado que le depare la sentencia al recurso instaurado por ese motivo. En consecuencia, corresponde afirmar que si bien el depósito previo constituye -en el sistema previsional- un requisito de admisibilidad del recurso deducido, es el Tribunal quien mediante una resolución fundada declara cumplida -o no- dicha obligación legal, como así también la procedencia de la exención del mismo.

C.F.S.S., Sala I

sent. Int. 94187

22.09.14

“GRUPO AG S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Recurso de queja”

(P.T.-Ch.-M.)

FINANCIACIÓN. Deudas con las cajas. Recursos. Queja. Depósito previo. Análisis. Facultad del órgano administrativo.

El organismo no se encuentra facultado para analizar si los recursos de apelación han cumplido o no con los requisitos que hacen a la habilitación de la instancia judicial, aspecto éste reservado a esta Alzada, debiendo limitar -por el contrario- su actividad a remitir las actuaciones a los fines que correspondiesen (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 04.09.12, "Padeco S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social"). En consecuencia, lo actuado por el organismo fiscal al decidir no elevar las actuaciones por ante la Alzada, constituye un exceso de la función administrativa sin soporte legal válido que lo sustente, y que por lo tanto, debe ser revocado.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 83648

12.05.14

"LEE, JUNG DON c/ A.F.I.P. s/Recurso de queja"

(D.-F.-H.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

CONSCRIPTOS

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Conscriptos. Conflicto de Malvinas. Subsidio. Ley 22.674.

Estando debidamente acreditada en autos la participación del actor en el conflicto bélico del Atlántico Sur, y siendo la conclusión del dictamen producido por los facultativos intervinientes que, en lo concerniente al estado psíquico, ostenta una reacción vivencial anormal II-III, causalmente vinculada a su participación en el conflicto bélico, no hay razón que justifique un apartamiento de lo decidido por el magistrado de la instancia anterior, que hizo lugar a la pretensión del titular respecto a los haberes retroactivos del subsidio establecido por la ley 22.674. Al respecto, la Excm. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, en el plenario "González, Oscar Omar" (15.02.83), estableció la siguiente doctrina legal: "en el caso de una enfermedad que incapacite a un conscripto, basta la probabilidad en grado razonable de que las exigencias de la vida militar hayan influido en el agravamiento de la afección que padecía con anterioridad a la incorporación, para admitirlas como concausa".

C.F.S.S., Sala I

sent. 157842

04.12.13

"DECIMO, ROBERTO ENRIQUE Y OTRO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad"

(M.-P.T.-Ch.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Conscriptos. Conflicto de Malvinas. Subsidio. Ley 22.674.

Reconocido que los efectos perniciosos de las vivencias del titular guardan relación con los episodios bélicos del Atlántico Sur, y siendo que no se trata de meras obligaciones de carácter salarial, sino que se vinculan con una protección tuitiva del Estado en beneficio de los disminuidos psíquica y físicamente por intervenir en aquella contienda, corresponde disponer que las sumas a liquidarse en concepto de subsidio extraordinario instituido por la ley 22.674 se abonen desde que se produjo el hecho generador en el que tuviera participación (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 20.10.05, "Gramajo, Héctor Horacio").

C.F.S.S., Sala I

sent. 157842

04.12.13

"DECIMO, ROBERTO ENRIQUE Y OTRO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad"

(M.-P.T.-Ch.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Conscriptos. Conflicto de Malvinas. Ley 19.101, art. 76. Indemnización.

Surgiendo del dictamen pericial -que cumple con los requisitos del art. 472 del

C.P.C.C. y tiene plena eficacia probatoria en los términos del art. 477 del mismo código- que el actor padece una reacción vivencial anormal II-III, causalmente vinculada a su participación en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que le genera una incapacidad en forma parcial y permanente, corresponde otorgarle la indemnización única que prevé el art. 76, inc. 3º, apartado, c) de la ley 19.101, en atención a su carácter de ex conscripto, el que deberá serle liquidado desde la fecha de su baja, tal como lo prevé la ley militar.

C.F.S.S., Sala I

sent. 157842

04.12.13

“DECIMO, ROBERTO ENRIQUE Y OTRO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(M.-P.T.-Ch.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Conscriptos. Conflicto de Malvinas. Pensión graciable. Ley 24.310. Subsidio extraordinario. Ley 22.674. Compatibilidad.

La pensión graciable de la ley 24.310 resulta compatible con el subsidio extraordinario previsto por la ley 22.674. En tal sentido, en el caso "Meza, Pedro Pablo c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa" (sent. del 15.02.07), la Sala III de la C.N.A.Cont.Adm.Fed. se expidió respecto de la ausencia de incompatibilidad entre ambas prestaciones, como asimismo sobre la ausencia de incompatibilidad con la indemnización prevista por el art. 76 inc. 3º c) de la ley 19.101, al determinar que cuando la ley 24.310 prescribe en su art. 2 la incompatibilidad del beneficio que confiere con aquellos que en el orden nacional le hubieran sido otorgados al beneficiario por su participación en las acciones referidas en el art. 1 y con motivo de su incapacidad, no es dudoso que se refiere a beneficios, en las condiciones fijadas, de carácter permanente.

C.F.S.S., Sala I

sent. 157842

04.12.13

“DECIMO, ROBERTO ENRIQUE Y OTRO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(M.-P.T.-Ch.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Conscriptos. Conflicto de Malvinas. Incapacidad. Atención médica. Ley 23.109. arts. 1 y 4.

Conforme lo dispuesto por los arts. 1 y 4 de la ley 23.109, y surgiendo del informe obrante en autos que el actor padece una reacción vivencial anormal II-III, causalmente vinculada a su participación en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que le genera un grado de incapacidad en forma parcial y permanente, por lo que se sugiere la realización de un tratamiento a los fines de poder intentar elaborar los aspectos psicológicos y psiquiátricos no resueltos y minimizar la sintomatología presentada, corresponde ordenar a la demandada hacerse cargo de la atención médica del peticionante, conforme lo dispone la ley referida.

C.F.S.S., Sala I

sent. 157842

04.12.13

“DECIMO, ROBERTO ENRIQUE Y OTRO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(M.-P.T.-Ch.)

MILITARES

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Ex combatiente de Malvinas. Ley 19.101, art. 76, ap. 3, inc. c). Indemnización. Inconstitucionalidad.

La doctrina sostenida por el Máximo Tribunal el 27.11.12 en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c /Ejército Argentino”, que declaró “la invalidez constitucional del régimen indemnizatorio militar... pues cercena de modo intolerable derechos de raigambre constitucional...” (ratificada por el Superior el 09.04.13 in re “Augusto, César Alejandro c/Ejército Argentino y/o Ministerio de Defensa y/o Estado Nacional”), es igualmente válida para el caso de autos, por lo que ha de hacerse lugar al planteo de inconstitucionalidad de la reparación tarifada dispuesta por el art. 76, inc. 3 ap. c) de la ley 19.101 -modificada por la ley 22.511 y su decreto reglamentario 829/92-, y siguiendo el criterio sentado por el Címero Tribunal, condenar a la demandada al pago de una indemnización por daño material que signifique una “indemnización adecuada con la finalidad reparatoria que provee las normas de derecho común, en consonancia con los principios de orden superior implicados” (cfr.

“Rodríguez Pereyra”) en sustitución de la tarifada legalmente.

C.F.S.S., Sala III

sent. 161447

01.10.14

“MOYA, OMAR ALFREDO c/ Estado Nacional – Estado Mayor General del Ejército s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(F.-L.-P.L.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Ex combatientes de Malvinas. Pensión honorífica. Ley 23.848. Competencia.

Si bien el fin último perseguido por los accionantes -la obtención de un beneficio de pensión honorífica- es de naturaleza previsional, y se circunscribiría tanto por su contenido cuanto por su destinatario al ámbito de la Seguridad Social, la presente acción (incorporación en los listados de ex combatientes de Malvinas para poder tramitar los beneficios conforme lo normado por la ley 23.848 y sus modificatorias) gira en torno al reconocimiento de los actores como ex combatientes del conflicto bélico; esto es, se trata de resolver si la actividad desplegada por los mismos en la Base de Río Gallegos durante el tiempo en que se desarrollaron las acciones contra el Reino Unido en el año 1982, encuadran dentro de los presupuestos que exige aquella normativa, categorización que no encuadraría dentro de la competencia de la C.F.S.S. No obstante ello, la C.S.J.N. en una causa sustancialmente análoga, ha resuelto que “resulta competente para entender en estos obrados el fuero federal de la Seguridad Social, especializado en la materia y al cual la ley 24.655 (art. 2, inc. c) le atribuye competencia exclusiva para todos aquellos planteos que atañen al haber de retiro de las fuerzas armadas y de seguridad (cfr. sent. del 23.06.11, “Aguirre, Ramón Cecilio y otros c/ E.N. – Ministerio de Defensa”). En consecuencia, corresponde declarar la competencia de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social para entender en las presentes actuaciones. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 127934

26.05.14

“QUIROGA, ELIO JOAQUÍN Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(P.L.-L.-F.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Haberes previsionales. Suplementos. Decretos 1104/05 y 1095/06. Carácter remunerativo y bonificable.

Con referencia al carácter que revisten los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07 y 1053/08, el Tribunal sentó criterio acerca de dicha temática en autos “Enriquez, Florentino y otros c/ Estado Nacional – M°. de Defensa” (sent. del 14.04.11), en el que se aplicó el precedente de Fallos 334:275 (“Salas, Pedro Ángel”), a cuyos fundamentos cabe aquí remitirse por razones de brevedad, donde -en síntesis- se resolvió que los “adicionales transitorios” previstos en los arts. 5 de los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, poseen carácter remunerativo y bonificable.

C.F.S.S., Sala I

sent. 164155

20.10.14

“BJELICA, TOMÁS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-P.T.-M.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Haberes previsionales. Suplementos. Decreto 1104/05. Asignaciones posteriores. Liquidación.

Reconocido el carácter remunerativo y bonificable de los adicionales previstos en los arts. 5 de los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, la liquidación a practicarse de las sumas que arroje su aplicación deberá adecuarse a los términos de los precedentes del Máximo Tribunal de la República los casos “Zanotti, Oscar Alberto” (sent. del 17.04.12) e “Ibáñez Cejas, José Benedicto y otros” (sent. del 04.06.13).

C.F.S.S., Sala I

sent. 164155

20.10.14

“BJELICA, TOMÁS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-P.T.-M.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Haberes previsionales. Haber mensual. Nueva conformación. Dec. 1081/05.

El Dec. 1081/05 dispuso la nueva conformación del haber mensual del Personal Militar en actividad y retirado. A partir de allí, el mismo quedó integrado exclusivamente por el rubro sueldo, razón por la cual el concepto “sueldo” y el concepto “haber mensual” de la reglamentación de la ley 19.101, coinciden como un único elemento. Todo ello de acuerdo con la doctrina del precedente de Fallos 334:275 (“Salas, Pedro Ángel”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 164155

20.10.14

“BJELICA, TOMÁS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-P.T.-M.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Haberes previsionales. Adicionales. Decs. 682/04 y 1993/04.

El planteo referido a los decretos 682/04 y 1993/04 encuentra suficiente respuesta en el precedente de la C.S.J.N. “Juárez, Walter Hernán c/ E. N. – M°. Justicia” (sent. del 08.10.13), en el que con remisión al caso de Fallos 333:1109 (“Oriolo, Jorge H. y otros”) decidió que el incremento dispuesto por ellos debe considerársele “incluido en el haber mensual como remunerativo y bonificable”. Cabe dejar sentado, que si bien la Dra. Victoria Pérez Tognola hasta el presente, y porque así lo ha considerado pertinente, ha venido pronunciándose acerca de éstos ítems aplicando la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Bovari de Díaz, Aída y otros” (Fallos 323:1049) y “Villegas, Osiris y otros” (Fallos 323:1061) -que estableció el carácter particular de estos suplementos- el advenimiento de la aludida nueva doctrina sentada ha determinado un nuevo enfoque que conduce a que estime, en adelante, procedente su aplicación a esta línea de casos del modo antes expresado.

C.F.S.S., Sala I

sent. 164155

20.10.14

“BJELICA, TOMÁS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-P.T.-M.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Haberes previsionales. Suplementos. Decretos 1053/08 y 751/09. Carácter.

Sin perjuicio que el Tribunal tiene sentado criterio acerca del carácter que revisten los Decretos 1053/08 y 751/09 (cfr. autos “Enríquez, Florentino y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa”, sent. del 14.04.11), en el que se aplicó el precedente de la C.S.J.N. “Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa” (sent. del 15.03.11), donde en síntesis se resolvió que los “adicionales transitorios” previstos en los arts. 5 de los decretos 1104/05 y 1095/06 poseen carácter remunerativo y bonificable, ello sujeto a la doctrina emanada del caso “Zanotti, Oscar Alberto c/ Ministerio de Defensa” (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.04.12), en el caso de autos, al no haber sido objeto de cuestionamiento alguno por los actores el carácter no bonificable decidido por el a quo, determina que la sentencia apelada deba ser confirmada.

C.F.S.S., Sala I

sent. 160291

28.04.14

“SANTILLI, JORGE LUIS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(M.-Ch.-P.T.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2769/93. Acción de amparo. Improcedencia.

El art. 43 de la C. N. -conforme la reforma del año 1994- introdujo una modificación trascendente en lo que hace a la acción de amparo, destinada a darle un dinamismo propio y despojarla de aristas formales que fueran obstáculo al acceso inmediato a la jurisdicción cuando están en tela de juicio garantías constitucionales (conf. Palacio, Lino “La pretensión de amparo en la Reforma Constitucional de 1994”, L.L. del 07.09.95). A partir de dicha reforma, el límite impuesto para la procedencia de la acción no está dado por la mayor o menor regulación legal, sino que la justificación de su rechazo debe hallarse en la existencia de una acción que mejor tutele la integridad del derecho lesionado.

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 84000
04.06.14

“KARDULIS, ALICIA ELENA c/ Ejército Argentino s/Amparos y sumarísimos”
(F.-D.-H.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2769/93. Acción de amparo. Improcedencia.

El procedimiento que mejor tutela el derecho del peticionante (en el caso, la obtención de la incorporación de los suplementos contemplados en el Dec. 2769/93, posteriormente reemplazados por los previstos en el Dec. 1305/12), es el dispuesto por el art. 15 de la ley 24.463. En consecuencia, corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que rechazó la acción incoada en razón de existir otra vía legal más idónea para obtener la protección del derecho invocado y por requerir la causa mayor debate y prueba. Ello así, por cuanto el amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carecer de otras vías aptas, peligre la salvaguarda de derechos fundamentales, y es por esa razón que su apertura exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, frente a las cuales los procedimientos ordinarios resultan ineficaces, es decir, que debe estar probado un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva.

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 84000
04.06.14

“KARDULIS, ALICIA ELENA c/ Ejército Argentino s/Amparos y sumarísimos”
(F.-D.-H.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Inutilización producida por actos de servicio. Cuadro de reserva. Ley 19.101, arts. 76, inc. 2, ap. b) y 77.

Se ajusta a derecho la decisión del a quo ordenó adecuar el haber que percibe el titular a lo dispuesto por el art. 78, inc. 3) de la ley 19.101, con el incremento previsto por el art. 76, ap. 2, inc. b) y art. 77 de dicho cuerpo normativo, si de las constancias de autos se desprende que el accionante, con posterioridad a ser dado de baja como conscripto, fue convocado como integrante del cuadro de reserva.

C.F.S.S., Sala III
sent. 158301
30.04.14

“RUGGIERO, JULIO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(L.-P.L.-F.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Militares. Veteranos de guerra. Pensión honorífica. Dec. 886/05.

La cuestión planteada en torno a la sentencia que desestimo la pretensión del actor de que se le extendiera el certificado previsto en el Dec. 886/05 para tramitar ante la A.N.Se.S. la “Pensión Honorífica de Veterano de la Guerra del Atlántico Sur”, encuentra suficiente respuesta en la doctrina sentada -en caso análogo- por el Alto Tribunal (cfr. Fallos 333:214, “Gerez, Carmelo Antonio”, sent. del 09.11.10), en el cual dejo sentado que: “... la cámara resolvió denegar el beneficio solicitado por el recurrente con base en una interpretación normativa desprovista de razones concretas que permitiesen concluir que el destino asignado al actor estaba excluido del área geográfica prevista en la norma como requisito para ser considerado ex combatiente... Tal exclusión no es sino el resultado de una interpretación dogmática de la norma, en la medida en que el a quo no aportó mayores precisiones respecto de la delimitación del territorio comprendido en la referida área geográfica... Con ello, pareció exigir el cumplimiento de un requisito no excluyente conforme la normativa vigente, en donde, además de ‘haber intervenido en efectivas acciones bélicas de combate’ también prevé el ‘haber operado en áreas consideradas de riesgo de combate’ (conf. art 2º Res. 426/04) ...” (cons 7ª). Agregó además que “... la referencia al listado de beneficiarios previsto en la ley 23.848 y reglamentado por Dec. 2634/90 tampoco es un argumento válido para el rechazo de la pretensión... En efecto, la falta de inscripción en tal listado no puede constituir un escollo para el reconocimiento de la condición de ‘veterano de guerra’ ...” (cons. 8ª). En consecuencia, corresponde revocar la sentencia de la anterior instancia.

C.F.S.S., Sala I
sent. 158165
19.12.13

“MORENO, RAÚL MARCELO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa

s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(M.-Ch.-P.T.)

POLICÍA FEDERAL

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Accidentes o enfermedades producidas “en y por actos del servicio” y “en servicio”. Distingo. Ley 21.965, art. 98, incs. a) y b).

Es preciso distinguir entre accidentes o enfermedades sufridas por el personal policial “en y por actos de servicio”, que son aquellos actos propios e inherentes al servicio exclusivo de las funciones policiales y que entrañan un riesgo propio y específico de ellas -situación contemplada por el art. 98, inc. a) de la ley 21.965-; y los accidentes y enfermedades sufridas “en servicio”, esto es, durante el horarios de trabajo, pero no en circunstancias que sean consecuencia directa e inmediata del ejercicio de funciones policiales -situación contemplada por el art. 98, inc. b), de la referida ley-. El caso de autos ha de ser encuadrado en la situación contemplada por esta última norma, atento que la pericia psicológica puso de resalto que el actor presenta una incapacidad determinada por el temor que le provocaba el que lo pudiesen a custodiar un lugar muy grande donde se guardaban autos abandonados.

C.F.S.S., Sala III

sent. 158891

05.05.14

“LEYES, LÁZARO MIGUEL c/ Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(L.-P.L.-F.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Personal policial en actividad. Fallecimiento. Subsidio. Ley 16.973, art. 1.

El criterio legislativo para distinguir entre accidentes o enfermedades sufridas por el personal policial “en y por actos de servicio” y “en servicio”, se sustenta en los riesgos directos y propios de la profesión de policía. Es en base a ello, y surgiendo del relato de los hechos acontecidos en autos que en ocasión de estar regresando el causante a su domicilio particular, mantuvo un intercambio de disparos con malvivientes resultando herido de muerte por impacto de bala, no cabe más que concluir que el accidente sufrido ha sido consecuencia directa de la profesión de policía.

C.F.S.S., Sala I

sent. 159700

01.04.14

“SARTIRANA DE SALAZAR, MÓNICA CRISTINA c/ Policía Federal Argentina s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-P.T.-M.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Personal policial en actividad. Fallecimiento. Subsidio. Ley 16.973, art. 1.

La parte 1° del art. 1 de la ley 16.973, texto de acuerdo al art. 1 de la ley 19.835, se refiere al fallecimiento producido “como consecuencia del cumplimiento de los deberes esenciales de defender contra las vías de hecho, o en actos de arrojo...”, texto que se ha mantenido en las sucesivas modificaciones de la ley 16.973. Es decir, dicha conjunción “o” no es copulativa, sino disyuntiva y además, está puesta entre comas, lo que señala que es un párrafo separable del texto principal, que se introduce para hacer extensivo el beneficio también para dichos casos de arrojo (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., sent. del 18.05.06, “González de Orellano, Aurelia I. c/ Estado Nacional”, voto del juez Coviello). En análogo sentido ha resuelto la C.F.S.S. (cfr. Sala II, sent. del 30.12.03 “Cáceres de Gómez, Juan Elisa c/ Estado Nacional-Ministerio del Interior”), donde concluyó que si bien en dicho caso no se había determinado la existencia de un acto de arrojo, los hecho acaecidos reunían las condiciones exigidas por la norma, o sea, el fallecimiento del agente policial como consecuencia del cumplimiento de sus deberes esenciales de defender, contra las vías de hecho, la propiedad y la vida de las personas, preservando así la seguridad pública al prevenir y reprimir una acción delictiva.

C.F.S.S., Sala I

sent. 159700

01.04.14

“SARTIRANA DE SALAZAR, MÓNICA CRISTINA c/ Policía Federal Argentina s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-P.T.-M.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Policía Federal. Personal policial en actividad. Fallecimiento. Subsidio. Ley 16.973, art. 1.

El Alto Tribunal ha sostenido que “resulta suficiente que el fallecimiento del personal policial sea consecuencia de una conducta que revele el cumplimiento de sus deberes esenciales, sin que sea necesario que guarde una relación de causalidad con un acto de arrojo”, para continuar diciendo que “esta exégesis de la norma se compadece con los propósitos que dieron origen al dictado del Dec. 1441/04, de cuyos considerandos surge que, advirtiendo la interpretación restrictiva de la norma, ha suprimido del texto del art. 1º de la ley 16.973 la expresión “o en actos de arrojo”, por entender que dicha exigencia para la obtención del subsidio especial resulta desproporcionado en los tiempos actuales” (cfr. C.S.J.N., “Leguizamón, Heriberta c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 159700

01.04.14

“SARTIRANA DE SALAZAR, MÓNICA CRISTINA c/ Policía Federal Argentina s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-P.T.-M.)

PREFECTURA NAVAL

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Prefectura Naval. Haberes previsionales. Suplemento por título universitario. Ley 26.660. Carácter general.

Sin perjuicio de lo decidido por el Máximo Tribunal en autos “Filgueira, Carlos Roberto” (sent. del 22.09.09), estableciendo el carácter particular del suplemento reglado por el Dec. 2254/02, cabe recordar que los pronunciamientos judiciales deben reparar en las modificaciones introducidas por nuevas normas que se dicten durante el proceso, en tanto configuran circunstancias sobrevinientes a la decisión a adoptar (Fallos 304:1716; 320:1653; 331:2628). Ello así, y toda vez que el mencionado Dec. 2254/02 fue derogado por la ley 26.660 -que en su exposición de motivos puntualizó: “... una de las consecuencias de encuadrar el suplemento como particular o general, está dada por su cómputo a los efectos del cálculo del haber de retiro. Así, los agentes lo perciben a lo largo de toda su carrera profesional, no obstante dicho suplemento no es computado al momento del retiro, implicando una sensible e injustificada disminución del haber a percibir por el agente que abandona el servicio activo...”-, ha de concluirse que a partir de la entrada en vigor de dicha ley, debe considerarse que el suplemento por título universitario reviste carácter general. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 159784

25.06.14

“OLIVA, AGUSTÍN EDUARDO c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(L.-P.L.-F.)

HABERES PREVISIONALES

BONIFICACIÓN

HABERES PREVISIONALES. Bonificación. Zona austral. Topes. Ley 24.463, art. 9, inc. 2).

No se ajusta a derecho la decisión del a quo que declaró la inaplicabilidad de las deducciones instituidas por el art. 9, inc 2 de la ley 24.463, sobre lo percibido en concepto de bonificación por “zona austral”. Ello así, por cuanto el referido adicional, al incorporarse al beneficio jubilatorio, lo incrementa, y por ello mismo son aplicables los topes legales vigentes en la medida que no superen el porcentaje de confiscatoriedad (conf. dictamen 33.786 del 28.06.13, Fiscalía N° 2). Asimismo, debe tenerse en consideración lo expresamente dispuesto por en el art. 2 de la Res. 1709/72 del Ministerio de Bienestar Social -norma reglamentaria de la ley 19.485 conforme a las atribuciones conferidas por el art. 2 inc. c) de la ley 17.575- que dice “... la bonificación establecida por la ley 19.485 integra el haber de la prestación y por lo tanto, está sujeta a las mismas quitas y deducciones que éste, entre otras, las destinadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensio-

nados...”.

C.F.S.S., Sala I

sent. 15995

07.04.14

“MENGHI, JULIANA ANTONIA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias”

(Ch.-M.-P.T.)

REAJUSTE

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Administración Pública. Incentivos. Leyes 23.283 y 23.412. Naturaleza remunerativa.

Respecto a la incorporación al haber de pasividad de la titular los rubros percibidos como "no remunerativos", conforme lo establecido por el art. 6 de la ley 24.241 y los pronunciamientos del Superior Tribunal en autos "Arguello Varela" y por la Sala en autos "Ariano, Alicia Cristina", sent. del 20.11.06, y en "Márquez, Amalia Inés", sent. del 29.12.10, corresponde estarse a lo allí resuelto. En consecuencia corresponde confirmar la sentencia en cuanto dispuso a los efectos del cálculo del haber de pasividad y su posterior movilidad la inclusión de los rubros no remunerativos y efectivamente percibidos en forma regular y habitual que integran la remuneración de la actora de conformidad con la ley 24.241, sin perjuicio del del cargo por aportes omitidos y de las contribuciones que deban realizarse con destino a la seguridad social (cfr. C.S.J.N, "Rainone de Ruffo, Juana Teresa Berta", sent. del 02.03.11).

C.F.S.S., Sala I

sent. 163235

12.09.14

“DEL PERCIO, HAYDEE SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(M.-P.T.-Ch.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Administración Pública. Incentivos. Leyes 23.283 y 23.412. Naturaleza remunerativa.

En cuanto al incentivo abonado en el marco del art 4º, inc. e) de la ley 23.283, cabe tener en cuenta lo manifestado por la Sala III de la C.F.S.S. en autos "D'Onofrio, Héctor Orlando" (sent. del 28.04.10), que en base a lo dispuesto en los arts. 103 bis de la ley 20.744 y 6 y 7 de la ley 24.241, concluyó que el incentivo previsto en las leyes 23.283 y 23.412, abonados bajo las denominaciones "estímulo", "contracción al trabajo" y "presentismo", son de naturaleza remunerativa”.

C.F.S.S., Sala I

sent. 163235

12.09.14

“DEL PERCIO, HAYDEE SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(M.-P.T.-Ch.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Administración Pública. Incentivos. Leyes 23.283 y 23.412. Naturaleza remunerativa.

El carácter remunerativo del incentivo abonado bajo denominaciones tales como "estímulo", "contracción al trabajo" y "presentismo" encuadra en el Art. 6 de la ley 24.241, que asigna esa naturaleza a ciertas sumas que son abonadas a agentes de la Administración Pública, entre las que menciona al "premio estímulo, gratificaciones u otros conceptos de análogas características", con la modalidad de poner a cargo del agente, además de su aporte personal, la contribución que corresponde al empleador -ver. Pedro. J. M. Taddei, Arelos J. Mongiardino y Reinaldo Naccarato, "Manual de la Seguridad Social", pág. 135- (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 28.04.10, "D' Onofrio, Héctor Orlando").

C.F.S.S., Sala I

sent. 163235

12.09.14

“DEL PERCIO, HAYDEE SUSANA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(M.-P.T.-Ch.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Aplicación del caso “Badaro”. Medida cautelar. Sentencia. Notificación. Carta documento. Improcedencia.

El art. 135 inc. 6) del C.P.C.C. ordena la notificación por cédula de las resoluciones que hacen saber medidas cautelares, y el art. 136 -que autoriza la notificación por acta notarial, telegrama con copia certificada y aviso de entrega o carta documento con aviso de entrega- establece que la notificación que deba hacerse con entrega de copias se va a efectuar únicamente por cédula o acta notarial. En consecuencia, el método elegido por el representante de la parte actora -carta documento- a fin de

notificar la sentencia que concedió la medida cautelar (en el caso, ordenando a la A.N.Se.S. que dentro del mes siguiente adecuara el haber jubilatorio del peticionante hasta alcanzar el incremento establecido en el fallo “Badaro”), no solo no fue hecha de conformidad con lo expresamente ordenado por el a quo (que ordenó que la obligada fuera notificada mediante oficio), sino que vulneró lo dispuesto por la normativa de aplicación; y en razón de ello, corresponde declarar la nulidad de la notificación practicada y de todo lo actuado en su consecuencia.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93300

06.05.14

“RINGELMANN, VALENTÍN EVARISTO c/ A.N.Se.S. s/Incidente”
(Ch.-P.T.-M.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Caso “Badaro”. Inaplicabilidad.

Habida cuenta que el derecho a la prestación fue adquirido con posterioridad, resulta inaplicable en autos la doctrina sentada por el Superior Tribunal in re “Badaro Adolfo Valentín” (fallos del 08.08.06 y 26.11.07) a propósito de la movilidad de las jubilaciones y pensiones para el período que va del 01.01.02 al 31.12.06, por cuanto aquella aún no había sido acordada; correspondiendo a tal fin el empleo del índice combinado de la ley 26.417.

C.F.S.S., Sala III

sent. 159654

16.06.14

“DALIA, MIGUEL ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Determinación del haber inicial. PBU. AMPO.

En tanto la PBU inicial fue determinada con arreglo a la ley 26.417 y su reglamentación, y no en el equivalente a 2,5 veces el AMPO como preveía la ley 24.241 en su texto originario, no corresponde hacer lugar al pedido de recálculo de la misma por falta de actualización del citado AMPO.

C.F.S.S., Sala III

sent. 159654

16.06.14

“DALIA, MIGUEL ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Caso “Badaro”. Medida cautelar. Improcedencia.

La viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.08.93, “Bulacio Malmierca, Juan Carlos c/ Bco. de la Nac. Argentina”; íd. sent. del 02.09.94, “Eco Service S.A. c/ Bs. As., Pcia. de”; íd. sent. del 25.06.96, “Pérez Cuesta S.A.C.I. c/ Estado Nacional”). Ello así, corresponde al juzgador actuar con especial prudencia dado que la alteración del estado de derecho del peticionante resulta un anticipo del fallo formal de la causa.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 94618

10.11.14

“MARMO, RAQUEL AMELIA c/ A.N.Se.S. s/Incidente”
(P.T.-Ch.-M.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Caso “Badaro”. Medida cautelar. Improcedencia.

Una medida cautelar innovativa como la solicitada en autos (en el caso, solicitada por la titular a fin de que se le actualicen los haberes jubilatorios mediante la aplicación de precedente “Badaro” hasta tanto se le abone la retroactividad adeudada, invocando a tal efecto el pronunciamiento de la Sala II de la C.F.S.S. en el caso “Capa, Néstor Fernando”) reviste carácter excepcional, y su admisión ha de juzgarse con criterio restrictivo. Por ello, corresponde desestimarla si de las actuaciones se desprende que no se configura el recaudo de irreparabilidad del perjuicio -propio del tipo de la medida solicitada-, máxime si se tiene en cuenta que durante la tramitación del proceso el accionante no está desprovisto de cobertura previsional.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 94618

10.11.14

“MARMO, RAQUEL AMELIA c/ A.N.Se.S. s/Incidente”

(P.T.-Ch.-M.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Caso "Badaro". Medida cautelar. Improcedencia.

El Tribunal, siguiendo los lineamientos establecidos por la C.S.J.N., ha sostenido reiteradamente que dentro de las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (Fallos 316:1833).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 94618

10.11.14

"MARMO, RAQUEL AMELIA c/ A.N.Se.S. s/Incidente"

(P.T.-Ch.-M.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Condena. Plazo. Haberes y deuda retroactiva.

Por aplicación del art. 22 de la ley 24.463 -modificado por el art. 2 de la ley 26.153- corresponde ordenar al organismo que en el plazo de 120 días de quedar firme la condena, no sólo le liquide el haber reajustado, sino que también cancele la deuda retroactiva.

C.F.S.S., Sala III

sent. 160542

28.08.14

"SOIFFER, ELSA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(F.-PL.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Fallecimiento del titular. Declaratoria de herederos. Cesión gratuita. Improcedencia.

Una cesión a título gratuito debe ser juzgada por las disposiciones del contrato de donación (art. 1437 Código Civil). Por tal razón, habiéndose acreditado el fallecimiento de la actora, la pretensión de cobro de las acreencias que le fueron reconocidas por parte de quien se presenta acompañando copia certificada de la cesión del crédito a su favor, no resulta procedente. Ello así, habida cuenta que para hacer efectivo el pago del crédito correspondiente en favor de los cesionarios deberá estarse a las disposiciones que regulan la donación entre vivos hecha a herederos forzosos (arts. 3476 y conc. Código Civil), y las que imponen el resguardo de su legítima (arts. 3591 y subsiguientes del mismo código), circunstancias que deberán ser evaluadas en el proceso sucesorio. En consecuencia, corresponde confirmar el auto del a quo que ordenó la presentación de todos los herederos con la correspondiente declaratoria.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 92330

20.02.14

"MOURE, LUCÍA CELSA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(Ch.-M.-P.T.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Indemnización por daños y perjuicios. Incompetencia del fuero de la Seguridad Social.

Si bien la disposición normativa del art. 2 de la ley 24.655 ha sido morigerada tanto doctrinal como jurisprudencialmente, admitiéndose supuestos competenciales que no fueron específicamente considerados por el legislador, no encuadra dentro del marco genérico de competencia del fuero de la Seguridad Social la pretensión del pago de una indemnización por daños y perjuicios derivada del accionar de la A.F.I.P. sustentada en normas de derecho civil, ya que aun reconociendo su causa en una obligación previsional, escapa a la competencia del fuero en tanto no se funda en normas de seguridad social (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.09.03, "Zicarelli, Noemí Nora"; íd. Sala III, sent. del 26.12.06, "Luzzi, Juan Antonio"; íd. Sala II, sent. del 23.10.09, "Cerraduras y Laminación S.A.I.C.>").

C.F.S.S., Sala II

sent. 159632

16.06.14

"STUTZ, JORGE ARNOLDO c/ A.N.Se.S. s/Cobro de pesos"

(D.-H.-F.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Daño moral. Art. 1078 C. Civil. Improcedencia.

No surgiendo de las constancias de la causa, en su totalidad, que la A.N.Se.S. haya efectuado acto alguno que pueda ser tildado de ilegítimo en los términos del art. 1078 del Código Civil -ya que tras la producción de diversas pruebas, y en base a las conclusiones extraídas de las mismas, dictó la resolución que se impugna- y teniendo en cuenta que el art. 1071 del Código referido establece que “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto...”, debe concluirse que no se configura el presupuesto necesario para que recaiga responsabilidad civil en el accionar del organismo que torne precedente la indemnización por daños y perjuicios o daño moral peticionado por el reclamante (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 23.05.01, “Jerez de Alvarello, Ester Amanda”; íd. Sala II, sent. del 12.04.02, “Podestá, Juan José”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 159632

16.06.14

“STUTZ, JORGE ARNOLDO c/ A.N.Se.S. s/Cobro de pesos”

(D.-H.-F.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. PAP y PC. Cálculo. Remuneración promedio.

A efectos de determinar la remuneración promedio para el cálculo de la PAP y PC, corresponde aplicar el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado- (Res. 140/95 conf. Res. S.S.S. 413/94, concordante con Res. D.E.A. 63/94) en las remuneraciones percibidas por el titular hasta el 28 de febrero de 2009 (cfr. C.S.J.N., sent. del 11.08.09, “Elliff, Alberto”), debiéndose descontar los aumentos fijados en el Dec. 279/08 y en la Res. 298/08 sobre el cálculo efectuado en virtud del precedente citado. A partir de allí y hasta la fecha inicial de pago, se aplicará la pauta de actualización fijada por la ley 26.417.

C.F.S.S., Sala I

sent. 157039

11.11.13

“BAUTE CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(P.T.-Ch.-M.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Adquisición del beneficio. Movilidad posterior a la vigencia de la ley 24.463. Caso “Badaro”. Inaplicabilidad.

En relación con la movilidad del haber por el periodo posterior a la vigencia de la ley 24.463, no resulta de aplicación el precedente de la C.S.J.N. “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 26.11.07), cuando la fecha de adquisición del beneficio fue posterior al periodo que el mencionado fallo dispuso reajustar. En tal caso, el Tribunal considera que resulta de aplicación, desde la fecha de adquisición del derecho, la ley 26.417.

C.F.S.S., Sala I

sent. 157039

11.11.13

“BAUTE CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(P.T.-Ch.-M.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. PBU. Ley 26.417.

El art. 4 de la ley 26.417 sustituyó el art. 20 de la ley 24.241 y sus modificatorias, y estableció un nuevo sistema de cálculo móvil para la Prestación Básica Universal (art. 6). En consecuencia, habiendo el titular obtenido el beneficio previsional con posterioridad a la vigencia de la referida normativa, y no habiendo cuestionado su constitucionalidad ni probado el perjuicio que dicho cómputo le ocasiona, corresponde rechazar los agravios relacionados al reajuste de la PBU.

C.F.S.S., Sala I

sent. 157039

11.11.13

“BAUTE CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(P.T.-Ch.-M.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

En aras a alinear la decisión sobre revisión del haber inicial de la prestación y su movilidad posterior con el criterio pretorianamente establecido por el Superior, el Tribunal viene haciendo remisión a las pautas establecidas por la C.S.J.N. en los precedentes “Elliff, Alberto José” (sent. del 11.08.09) y “Badaro, Adolfo Valentín” (sentencias del 08.08.06 y 26.11.07). De acuerdo a ese temperamento, en casos análogos al presente la Sala ordenó ajustar las remuneraciones que sirven de base

de cálculo de las prestaciones por el I.S.B.I.C. hasta la fecha de adquisición del derecho (cfr. "Elliff"); y para la movilidad posterior mandó estar: a) del 01.01.02 al 31.12.06, a las variaciones anuales del Índice de Salarios, Nivel General elaborado por el I.N.D.E.C. (cfr. "Badaro"); b) del 01.01.07 al 28.02.09 a los aumentos de alcance general otorgados por la ley 26.198 y decretos del P.E.N.; y c) desde el 01.03.09 en adelante a los incrementos dispuestos por la ley de movilidad 26.417. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la decisión de la anterior instancia respecto a la aplicación de "Badaro" para períodos posteriores al 31.12.06. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161886

03.11.14

"SIGA, JORGE ERNESTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

Hasta tanto no se practique la liquidación correspondiente que permita determinar el haber mensual reajustado que debió ser abonado por la demandada por cada uno de los meses adeudados, no existe evidencia alguna que permita sostener que los arts. 9 de la ley 24.463 y 9, 25 y 26 de la ley 24.241 son aplicables al caso y, menos aún, el perjuicio que ello pueda significar para quien demanda. Por ello, corresponde dejar sin efecto -a esta altura del proceso- la inconstitucionalidad decretada en torno al referido art. 26 (cfr. C.S.J.N., in re "García Felipe", sent. del 07.03.06) y diferir su tratamiento conjuntamente con el de los demás artículos citados para la etapa de ejecución (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 05.05.10, "Martínez, Juan Carlos", entre otros). (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161886

03.11.14

"SIGA, JORGE ERNESTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

Por tratarse de meras reflexiones tardías que no fueron articuladas expresamente en el escrito de demanda, no han de prosperar los planteos introducidos en el memorial de la parte actora referidos a la revisión del haber inicial de la PBU, la tasa mínima de sustitución del haber y su oposición al impuesto a las ganancias, sin perjuicio que éste último sea propio de la etapa de ejecución. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161886

03.11.14

"SIGA, JORGE ERNESTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

No resulta aplicable al S.I.J.P. -ahora S.I.P.A.- la doctrina elaborada por la C.S.J.N. para limitar el haber inicial de la prestación en "Villanustre, Raúl Félix" (sent. del 17.12.91) a propósito de la ley 18.037, visto las diferencias sustanciales que pueden observarse entre las prestaciones previstas por ambos regímenes y sus disímiles reglas de cálculo para la determinación del haber inicial. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161886

03.11.14

"SIGA, JORGE ERNESTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

No asiste razón a la actora en cuanto a la argüida invalidez del art. 21 de la ley 24.463, disposición que compatibiliza la exención de que goza el organismo, que fuera establecida por los arts. 1 de la ley 18.477 y 11 de la ley 23.473, por un lado, con la gratuidad del procedimiento del reclamo de prestaciones previsionales para

los demandantes, por el otro. Sin perjuicio de ello ha de agregarse que, conforme reiterada jurisprudencia en la materia, la constitucionalidad de la exención apuntada ha sido invariablemente admitida (cfr. entre otros, C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 21.11.91, "Colotto, Victorio"; C.S.J.N., sent. del 28.08.08, "Flagello, Vicente"). (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161886

03.11.14

"SIGA, JORGE ERNESTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

La normativa del art. 9 de la ley 24.241 no ha sido prevista para el procedimiento de actualización de las remuneraciones a computar como base de cálculo de las prestaciones compensatoria y adicional por permanencia, sino que en la misma se establece una base imponible que fue pergeñada exclusivamente a los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al S.I.J.P. (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161886

03.11.14

"SIGA, JORGE ERNESTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

Conforme lo dispuesto por el art. 25 de la ley 24.241, no es procedente la inclusión en la determinación del haber inicial del titular el excedente de remuneración mensual por el que no hizo cotizaciones a su cargo. (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161886

03.11.14

"SIGA, JORGE ERNESTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

Corresponde desestimar el cuestionamiento relativo al art. 26 de la Ley 24.241. Ello así, porque el sistema previsional creado por el citado cuerpo normativo no establece una relación directa entre el haber previsional y la retribución percibida por el beneficiario durante su vida activa. (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161886

03.11.14

"SIGA, JORGE ERNESTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

Respecto a la aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el caso "Villanustre, Raúl Félix" (sent. del 17.12.91), un nuevo análisis de la cuestión planteada lleva a la convicción del suscripto que si bien la misma refiere a un beneficiario de la ley 18.037, el sentido común indica que no es razonable que una persona en actividad perciba una suma de dinero superior a la que recibía cuando se hallaba en actividad. Por ello, siendo un punto invocado por la demandada y sujeto a prueba por parte de ésta, no se puede evitar que el organismo administrativo efectúe el procedimiento que estime conducente para establecer la remuneración que percibía el jubilado en actividad; pero, ante un resultado negativo de esa gestión, es inadecuada la utilización de la tabla de salario mínimo vital y móvil incluida con Anexo I en la Circular 60/13, pues ello implicaría sostener que el beneficiario recibía una retribución mínima, sin que se encuentre probado dicho extremo. (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161886

03.11.14

"SIGA, JORGE ERNESTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

La actualización del haber del beneficio del accionante ha de efectuarse siguiendo las pautas implementadas por los arts. 24, inc. a) y 30, inc. b) de la ley 24.241. La primera de las mencionadas disposiciones faculta a la A.N.Se.S. a escoger el índice salarial oficial que ha de ser aplicado a tal efecto, habiendo el organismo escogido el índice correspondiente a los salarios básicos de la industria y la construcción (Res. 140/95, conf., Res. SSS 413/94, concordante con Res. DEA 63/94), motivo por el cual, el haber inicial del titular deberá ser actualizado en base al mencionado índice. Ahora bien, el reglamento pertinente dispuso que la referida actualización de los haberes percibidos por los beneficiarios del régimen de la ley 24.241 sólo ha de practicarse, por aplicación de la ley 23.928, hasta el mes de marzo de 1991, lo que constituye un exceso en la facultad reglamentaria que la ley 24.241 puso en manos del poder administrador. Al respecto, ha de advertirse que esta norma es de fecha posterior a la ley 23.928, con lo cual, si hubiese sido voluntad del legislador introducir la limitación temporal de marras, ello debiera haberse incluido expresamente en las prescripciones contenidas en el primero de los mencionados cuerpos legales. (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161856

21.10.14

“SÁNCHEZ, ANA MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(L.-F.-P.L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

Las disposiciones de las leyes 23.928 y 25.561 no resultan aplicables ni a la actualización prevista por el art. 24 de la ley 24.241 respecto a la prestación compensatoria, ni a la actualización del art. 30, inc. b), concerniente a la prestación adicional por permanencia. En suma, el haber inicial del actor deberá ser reajustado actualizando sus remuneraciones, hasta la fecha de adquisición del beneficio. Al respecto, cabe destacar que la citada doctrina fue avalada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar, el 11.08.09, en autos “Elliff, Alberto José”. (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161856

21.10.14

“SÁNCHEZ, ANA MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(L.-F.-P.L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar el 11.08.09 en autos “Elliff, Alberto José”, extendió la aplicación del caso “Badaro, Adolfo Valentín” a los beneficios obtenidos bajo el régimen de la ley 24.241, fundada en que lo dispuesto en el art. 5 de la ley 24.463 es de contenido análogo a lo prescripto en el art. 7, inc. 2), de ese cuerpo legal, y a la necesidad de preservar la proporcionalidad entre los haberes de pasividad y de actividad. Por ello, ha de entenderse que corresponde respecto al período posterior al 31.03.95, acordar un reajuste del haber del accionante por el período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con deducción de las sumas que pudieron haberse abonado en cumplimiento de lo dispuesto por el Dec. 764/06. Las retroactividades que surjan de dicha liquidación habrán de ser abonadas en el plazo fijado por el art. 2 de la Ley 26.153, con los intereses calculados en base a la tasa pasiva según el precedente de Fallos: 327:3721 (“Spitale”). (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161856

21.10.14

“SÁNCHEZ, ANA MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(L.-F.-P.L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Ley 24.241. Recálculo del haber inicial. Movilidad posterior.

En aras de alinear la decisión sobre la revisión del haber inicial de la prestación y su movilidad posterior con el criterio pretorianamente establecido por el Superior, el Tribunal reiteradamente ha remitido a las pautas establecidas por la C.S.J.N. en los

precedentes “Elliff, Alberto José” (sent. del 11.08.09) y “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 08.08.06 y 26.11.07). De acuerdo a ese temperamento, corresponde ajustar las remuneraciones que sirven de base de cálculo de las prestaciones por el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) hasta la fecha de adquisición del derecho (cfr. “Elliff”); y para la movilidad posterior estar: a) del 01.01.02 a 31.12.06, a las variaciones anuales del Índice de Salarios, Nivel General, elaborado por el INDEC (cfr. “Badaro”); b) del 01.01.07 al 28.02.09 a los aumentos de alcance general otorgados por la ley 26.198 y decretos del P.E.N.; y c) desde el 01.03.09 en adelante a los incrementos dispuestos por la ley de movilidad (26.417). En consecuencia, corresponde hacer lugar a lo solicitado, procediéndose a la revisión del haber inicial con arreglo al fallo “Elliff” y confirmar lo decidido sobre la movilidad. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 161856

21.10.14

“SÁNCHEZ, ANA MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(L.-F.-P.L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Topes. Ley 24.463, art. 9.

Hasta tanto no se practique la liquidación correspondiente que permita determinar el haber mensual reajustado que debió abonar el organismo por cada uno de los meses adeudados, no existe evidencia alguna que permita sostener que el art. 9 de la ley 24.463 sea aplicable al caso y, menos aún, el perjuicio que ello puede significar para quien demanda. En consecuencia, corresponde -a esta altura del proceso- diferir su tratamiento para la etapa de ejecución (cfr. C.S.J.N. in re “García, Felipe”, sent. del 07.03.06; C.F.S.S., Sala III, sent. del 05.05.10, “Martínez, Juan Carlos”). (Del voto del Dr. Fasciolo, al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 160548

28.08.14

“MARINATI, NILDA ANA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Topes. Ley 24.463, art. 9.

Del texto del art. 9, inc. 2) de la ley 24.463 se desprende que para que la escala de deducciones sea operativa, han de cumplirse dos requisitos: que la ley merced a la cual se obtuvo el beneficio sea anterior a la vigencia de la ley 24.241; y en segundo lugar, que dicha ley no prevea la existencia de un tope al haber. De ello se concluye que la reducción de marras es aplicable únicamente a los regímenes especiales derogados por el art. 11 de la ley 24.463. En consecuencia, atento que en el caso de autos la actora se jubiló bajo el régimen de la ley 24.241, la referida normativa resulta inaplicable. (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 160548

28.08.14

“MARINATI, NILDA ANA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Topes. Ley 24.463, art. 9.

En principio, el tope previsto por el art. 9, inc. 3) de la ley 24.463 se ajusta a derecho, toda vez que los beneficios más altos son reducidos con la finalidad de lograr una adecuada cobertura para los sectores de más bajos recursos; todo ello dentro de un sistema redistributivo de la renta que hállese implícito en las bases mismas de la moderna previsión social. Al respecto ha de advertirse que no nos hallamos frente a un contrato individual y voluntario de seguro, en el cual ha de darse una exacta correlación entre la prima abonada por el interesado y la suma que éste recibe como contraprestación y que se encuentra estipulado de antemano. Muy por el contrario, en el caso de la seguridad social el aporte es obligatorio y juegan otros principios diversos a los que presiden una relación contractual de derecho privado, fundamentalmente aquellos que derivan de una concepción solidaria de la realidad social. (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 160548

28.08.14

“MARINATI, NILDA ANA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-P.L.-L.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Trabajadores autónomos. Aportes con-

temporáneos. Moratoria. Determinación del haber inicial.

Surgiendo de la documentación acreditada en el expediente administrativo que el titular realizó aportes contemporáneos a la realización de tareas como autónomo y se acogió a un plan para regularizar su deuda (MORATORIA y/o SICAM) por los meses faltantes para poder adquirir el beneficio previsional, corresponde analizar de manera particular de cada una de las situaciones: a) En cuanto a los aportes ingresados oportunamente a la realización de su labor, teniendo en cuenta lo expuesto por el Tribunal en autos "Said, Moisés" (cfr. sent. del 27.04.10), corresponde ordenar la actualización de los aportes efectuados con anterioridad a la vigencia de la ley 24.241 siguiendo las pautas expuestas por el Alto Tribunal en autos "Makler, Simón" (sent. del 20.05.03) hasta la fecha de adquisición del beneficio; b) Diferente solución merecen los aportes efectuados mediante el sistema MORATORIA y/o SICAM, porque no cabe para ellos -en el caso- actualización alguna pues no fueron ingresados concomitantemente con la realización de sus tareas como autónomo, sino al tiempo de incluirse en un plan de regularización. En consecuencia, este aporte fue integrado a valores actualizados al momento de la determinación de la deuda como condición para acceder al beneficio jubilatorio.

C.F.S.S., Sala I

sent. 158152

16.12.13

"BOFFA, ANA MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(Ch.-P.T.-M.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Trabajadores autónomos. Ley 24.241. PBU, PC y PAP.

Teniendo en cuenta la fecha inicial de pago de la prestación previsional -obtenida al amparo de la ley 24.241, habiendo hecho aportes como autónomo- (en el caso, octubre de 1997) y el criterio sostenido por el Tribunal al fallar en autos "Rodríguez, Jorge Ernesto" (sent. del 19.08.09), no corresponde hacer lugar a lo solicitado por el titular en relación a la actualización de la PBU.

C.F.S.S., Sala I

sent. 161562

09.06.14

"BLANDER, SARA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(P.T.-M.-Ch.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Trabajadores autónomos. Ley 24.241. PBU, PC y PAP.

Para la actualización de los servicios prestados en forma autónoma, el Tribunal considera que resultan de aplicación los precedentes "Said, Moisés" (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 27.04.10), que ordena la actualización de los aportes efectuados con anterioridad a la vigencia de la ley 24.241 siguiendo las pautas expuestas por el Alto Tribunal en autos "Makler, Simón" hasta la fecha de adquisición del beneficio.

C.F.S.S., Sala I

sent. 161562

09.06.14

"BLANDER, SARA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(P.T.-M.-Ch.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Trabajadores autónomos. Ley 24.241. PBU, PC y PAP.

Habida cuenta la falta de acreditación y prueba del perjuicio ante la recategorización generada por el art. 8 de la ley 24.241 -reglamentado por el decreto 433/1994- corresponde rechazar el reclamo de actualización de los aportes efectuados en vigencia de la referida ley 24.241.

C.F.S.S., Sala I

sent. 161562

09.06.14

"BLANDER, SARA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(P.T.-M.-Ch.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Trabajadores autónomos. Ley 24.241. PBU, PC y PAP.

Para el período posterior a la obtención de la prestación (PBU, PC y PAP), corresponde ordenar la aplicación del fallo de la C.S.J.N. "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 26.11.07) como pauta de movilidad, en la medida que el incremento en el beneficio por los aumentos ya otorgados (Decretos 1275/02, 391/03, 1194/03, 683/04, 1199/04, 748/05, 1273/05 y 764/06) sea inferior a la variación anual del índice de

salarios nivel general elaborado por el INDEC. En caso que tal incremento arrojase una prestación superior, corresponderá estarse a su resultado, según lo decidido por el Alto Tribunal en autos “Padilla, María Teresa Méndez de” (sent. del 29.04.08). C.F.S.S., Sala I
sent. 161562
09.06.14
“BLANDER, SARA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(P.T.-M.-Ch.)

HABERES PREVISIONALES. Reajuste. Trabajadores autónomos. Ley 24.241. PBU, PC y PAP.

El planteo referido a los arts. 9 de la ley 24.463 y 26 de la ley 24.241 debe posponerse para el momento de practicarse liquidación en base a los parámetros ordenados en la sentencia, oportunidad en la que recién podrá ser objeto de análisis la posible confiscatoriedad derivada de su aplicación (cfr. C.S.J.N., “Del Azar Suaya, Abraham”, sent. del 25.09.97).

C.F.S.S., Sala I
sent. 161562
09.06.14
“BLANDER, SARA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”
(P.T.-M.-Ch.)

RETENCIONES

HABERES PREVISIONALES. Retenciones. Impuesto a las ganancias. Competencia.

Tratándose de una sentencia emanada de un Juzgado Federal del Interior (Necochea) -en virtud de la cual se hizo lugar a la medida cautelar deducida por el titular con el objeto que se ordene a la A.F.I.P. el cese de las retenciones que se practican sobre los haberes previsionales que percibe-, corresponde remitirse a lo resuelto por la Excm. Corte Suprema de Justicia de la Nación el 20.12.11, en autos “Mamone, Rosa F.”, y declarar la incompetencia de la C.F.S.S. para conocer en grado de apelación. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Laclau. El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III
sent. int. 128226
11.08.14
“FANUEL, CARLOS ALBERTO Y OTRO c/ A.F.I.P. s/Incidente”
(L.-P.L.-F.)

HABERES PREVISIONALES. Retenciones. Impuesto a las ganancias. Competencia.

Debe declararse la incompetencia del Tribunal para conocer en un recurso interpuesto contra la sentencia de un Juzgado Federal del interior (Necochea), que en el trámite de una acción de amparo hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la A.F.I.P. el cese del descuento del impuesto a las ganancias practicado a los haberes previsionales del titular. Ello así -y sin perjuicio de dejar a salvo la opinión del suscripto a favor de la competencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social en base al principio de especialidad en la materia-, porque razones de celeridad y economía procesal llevan a aplicar la doctrina invariablemente sostenida por la C.S.J.N. a partir del fallo dictado el 10.12.11 in re “Mamone, Rosa F.”, visto la analogía existente entre ambas causas, las que no tuvieron su origen en una demanda de impugnación dirigida contra una resolución de la A.N.Se.S. con arreglo al art. 15 de la ley 24.463, supuesto que sí habilitaría a la C.F.S.S. a conocer del caso como tribunal de alzada de un juzgado federal provincial. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III
sent. int. 128226
11.08.14
“FANUEL, CARLOS ALBERTO Y OTRO c/ A.F.I.P. s/Incidente”
(L.-P.L.-F.)

HABERES PREVISIONALES. Retenciones. Impuesto a las ganancias. Competencia.

Sin perjuicio de señalar que en casos como el presente -donde por sentencia dictada por un Juzgado Federal del Interior (Necochea) se hizo lugar a la medida caute-

lar deducida por el titular con el objeto que se ordene a la A.F.I.P. el cese de las retenciones que se practican sobre los haberes previsionales que percibe-, el Tribunal no tiene competencia territorial, es menester poner de resalto la finalidad que deben cumplir las medidas cautelares en orden al resguardo de los derechos ante la lógica demora en la tramitación de un juicio. Precisamente, ellas tienden a evitar que la decisión a dictarse sea de cumplimiento imposible, o bien, que la probabilidad de producción del daño se convierta en efectivo e irremediable. Por ello y, sin adelantar opinión respecto de la solución final que habrá de adoptarse, ha de primar el carácter alimentario que reviste el derecho que se pretende resguardar y el hecho que la decisión tomada por el organismo coloca al peticionante en un estado de total desprotección. En consecuencia, corresponde confirmar el fallo apelado. (Disidencia del Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128226

11.08.14

“FANUEL, CARLOS ALBERTO Y OTRO c/ A.F.I.P. s/Incidente”

(L.-P.L.-F.)

JUBILACIÓN ANTICIPADA

JUBILACIÓN ANTICIPADA. Ley 25.944, art. 6. Acceso al beneficio. Pago previo. Planteo de inconstitucionalidad.

A fin de analizar la validez constitucional de una ley es imprescindible tener en cuenta su carácter de legislación de emergencia y el objetivo tenido en mira al momento de su dictado. Ello así, el requisito del pago previo de la deuda establecido para el acceso al beneficio previsto por el art. 6 de la ley 25.994 a aquellos que gozan de otra prestación, no aparece -prima facie- como una violación constitucional al derecho de la seguridad social, pues no se impide su obtención, sino que condiciona la misma a la cancelación total de la deuda reconocida. Dicho supuesto resulta concordante con la legislación vigente, en cuanto el S.I.J.P. (art. 19) también pone como requisito para el acceso a la prestación -a semejanza de lo que disponía el art. 31 de la ley 18.038- no registrar obligaciones impagas en materia de aportes previsionales.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93309

06.05.14

“NAZER, SILVIA GRACIELA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias”

(M.-P.T.-Ch.)

JUBILACIÓN EXTRANJERA

JUBILACIÓN EXTRANJERA. Pago. Moneda. Comunicaciones “A” Nros. 5236, 5264, 5328 y 5330 del B.C.R.A. Planteo de inconstitucionalidad. Competencia.

Ante la cuestión negativa de competencia suscitada entre un Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social y un Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal para entender en una acción de amparo -con pedido de medida cautelar- promovida por el titular contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la República Argentina para que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad, por arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, de las Comunicaciones “A” Nros. 5236, 5264, 5328 y 5330 de la citada entidad y Res. A.F.I.P. 3356/12, en tanto restringen derechos amparados por los arts. 14, 17 y 28 de la C.N. garantizados por distintos tratados internacional que gozan de igual supremacía, debe concluirse -de conformidad con lo opinado por el Ministerio Público- que corresponde conocer de la cuestión a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 20 de la ley 26.854, según el cual compete a esa cámara resolver “todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero...”.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128123

30.06.14

“D’AGOSTINO, ÁNGELO c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/Amparos y sumarísi-

mos”
(F.-L.-P.L.)

JUBILACIÓN Y RETIRO POR INVALIDEZ

JUBILACIÓN Y RETIRO POR INVALIDEZ. Ley 24.241. Dec. 1290/94. Valoración.

El Dec. 1290/94 limitó la valoración de los denominados “factores complementarios” mediante la asignación de porcentajes variables, guarismos a los que no cabe atenderse estrictamente cuando de los mencionados elementos -evaluados conjuntamente con la disminución física que afecta al afiliado- se deriva razonablemente la imposibilidad de realizar tareas habituales u otras compatibles con sus aptitudes profesionales (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.08.00, “Melo, Miguel Ángel c/ Máxima A.F.J.P.”). Ello así, por cuanto la seguridad social tiene como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales, y el apego excesivo al texto de las normas sin apreciar las circunstancias particulares de cada caso, no se aviene con la cautela con que los jueces deben juzgar las peticiones vinculadas con la materia previsional (Fallos 308:567; 310:2159; 313:79 y 247, entre otros”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 159925

04.04.14

“ÁLVAREZ CAREAGA, ÉRICA ESTHER c/ A.N.Se.S s/Retiro por invalidez”

(Ch.-P.T.-M.)

JUBILACIÓN Y RETIRO POR INVALIDEZ. Ley 24.241. Dec. 1290/94. Valoración.

En materia de jubilación por invalidez no hay que atenderse exhaustivamente al aspecto psicofísico para determinar los elementos que conforman el concepto de incapacidad previsional, aseveración válida aún en el marco de la ley 24.241, máxime frente al deber de actuar con extrema prudencia que tienen los jueces cuando se trata de juzgar peticiones de esta índole (cfr. C.S.J.N., sent. del 11.07.06, “Bobadilla, Oscar c/ Máxima A.F.J.P.”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 159925

04.04.14

“ÁLVAREZ CAREAGA, ÉRICA ESTHER c/ A.N.Se.S s/Retiro por invalidez”

(Ch.-P.T.-M.)

LEGISLADORES

LEGISLADORES. Beneficio previsional. Ley 24.018. Derogación.

Resultan inatendibles los agravios referentes a la aplicación del régimen especial contemplado en el art. 20 de la ley 24.018, si a la fecha del cese el recurrente no contaba con la edad, y al cumplir la misma el régimen se encontraba expresamente derogado desde tiempo antes por la ley 25.668; circunstancia que excluye la existencia de derechos adquiridos a la jubilación que se pretende con sustento en la legislación vigente al tiempo del cese. No empece a ello que en virtud del cargo oportunamente desempeñado, el actor haya percibido la prestación prevista en el art. 21 de la referida ley 24.018, que establecía un haber de retiro a cargo del Congreso de la Nación para los legisladores que, cumpliendo con los demás requisitos exigidos por la norma, no contaren con la edad y/o los años de servicios requeridos, toda vez que el mismo era abonado por la Honorable Cámara de Diputados y no por la A.N.Se.S., y tampoco responde al caso de un pago anticipado de la prestación como es el supuesto del art. 11 de la ley 24.018. (Del voto de la Dra. Pérez Tognola).

C.F.S.S., Sala I

sent. 163113

05.09.14

“MONTEVERDE, CARLOS ROBERTO c/ A.N.Se.S s/Reajustes varios”

(P.T.-Ch.-M.)

LEGISLADORES. Beneficio previsional. Ley 24.018. Derogación.

En el precedente “Bravo Herrera, Félix Horacio” (Fallos 335: 813), la C.S.J.N. sostuvo que la normativa especial (ley 24.018) se mantuvo plenamente vigente hasta la sanción de la ley 25.668 y su promulgación parcial por el Dec. 2322/02, que eliminó de aquella el estatuto para los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación y de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre de 2002. Dicha derogación tuvo en mira que los legisladores en actividad obtuvieran los beneficios de la seguridad social por las previsiones del régimen general, y que los jubilados quedaran sujetos a la movilidad dispuesta en el art. 7, inc. 2 de la ley 24.463. (Del voto de la Dra. Pérez Tognola).

C.F.S.S., Sala I

sent. 163113

05.09.14

“MONTEVERDE, CARLOS ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(P.T.-Ch.-M.)

LEGISLADORES. Beneficio previsional. Ley 24.018. Derogación.

No le corresponde al titular seguir percibiendo el retiro previsto por el derogado art. 21 de la ley 24.018, pues dicha prestación -a cargo del Congreso- fue establecida hasta tanto los beneficiarios alcanzaran la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a la jubilación ordinaria. Por ello, toda vez que el actor no acreditó los requisitos para la jubilación especial durante la vigencia de ésta, y al tiempo de alcanzar la edad de 60 años la ley 24.018 había sido derogada, ha de concluirse que quedó incorporado al sistema general. (Del voto de la Dra. Pérez Tognola).

C.F.S.S., Sala I

sent. 163113

05.09.14

“MONTEVERDE, CARLOS ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(P.T.-Ch.-M.)

LEGISLADORES. Beneficio previsional. Ley 24.018. Derogación.

Toda vez que según doctrina del Máximo Tribunal de la República “para que exista un derecho adquirido, y por tanto se encuentre vedada la aplicación de la nueva ley, es necesario que su titular haya cumplido -bajo la vigencia de la norma derogada o modificada- todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular del derecho que se trata, aun cuando falte la declaración formal de una sentencia o acto administrativo” (cfr. dictamen de la Procuración General, al que remitió la C.S.J.N. en Fallos 328:1381), corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia que denegó el beneficio pretendido por el titular al amparo de la ley 24.018, toda vez que al momento de alcanzar la edad requerida en el art. 20 del régimen especial invocado, el mismo ya no se encontraba vigente por haber sido derogado por la ley 25.668. (Del voto de la Dra. Pérez Tognola).

C.F.S.S., Sala I

sent. 163113

05.09.14

“MONTEVERDE, CARLOS ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(P.T.-Ch.-M.)

LEGISLADORES. Beneficio previsional. Ley 24.018. Derogación.

La noción de derecho adquirido se contrapone al de mera expectativa. Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquél derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que forma parte de él, y que por ello mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente. Ello conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio cuya conservación e integridad está garantizada en favor del titular, por una acción o por una excepción. (Del voto del Dr. Chirinos).

C.F.S.S., Sala I

sent. 163113

05.09.14

“MONTEVERDE, CARLOS ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(P.T.-Ch.-M.)

LEGISLADORES. Beneficio previsional. Ley 24.018. Derogación.

El derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular, entendido este como el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona física o jurídica, y queda a cubierto de cualquier acto que pretenda desconocerlo o alterarlo, pues la propia Constitución lo garantiza y protege en su art. 17. No ocurre lo mismo con un derecho en expectativa que, en general, carece de relevancia jurí-

dica y, en consecuencia, es susceptible de ser modificado o extinguido por el legislador o por las condiciones del contrato. En ese sentido, el Alto Tribunal afirmó que “si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues estos solo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva para que se haga efectivo. De no ser así, resultaría inadmisibles consecuencias de que la titularidad de un derecho individual vendría a depender de la voluntad discrecional del obligado renuente en satisfacer ese derecho” (cfr. Fallos 296:723). (Del voto del Dr. Chirinos).

C.F.S.S., Sala I

sent. 163113

05.09.14

“MONTEVERDE, CARLOS ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(P.T.-Ch.-M.)

LEGISLADORES. Beneficio previsional. Ley 24.018. Derogación.

Los agravios referidos a la aplicación del régimen especial contemplado en el art. 20 de la ley 24.018 resultan inatendibles, si a la fecha del cese el peticionante no contaba la edad requerida y el régimen fue expresamente derogado tiempo antes de que cumpliera la misma, lo que excluye la existencia de derechos adquiridos a la jubilación que se pretende con sustento en la legislación vigente al tiempo de cese. (Del voto del Dr. Chirinos).

C.F.S.S., Sala I

sent. 163113

05.09.14

“MONTEVERDE, CARLOS ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(P.T.-Ch.-M.)

LEGISLADORES. Pensión graciable. Ley 13.337. Medida cautelar autónoma. Improcedencia.

Las cautelares autónomas constituyen una clase de medidas precautorias que buscan una solución urgente, despachable inaudita parte, para las que debe mediar una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles. Su dictado está sujeto a la concurrencia de una situación de urgencia y a la certeza de que el derecho material del postulante sea razonable. Dada sus especiales características debe analizárselas con carácter restrictivo y su implementación ser excepcional. Por ello, corresponde confirmar la decisión del a quo que rechazó la medida intentada (en el caso, los actores en su carácter de Senadores de la Nación, solicitaron se ordene al Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación abstenerse de aplicar la Resolución mediante la cual se decidió suspender la tramitación de pensiones contempladas en el art. 1 de la ley 13.337).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93508

09.06.14

“NAIDENOFF, LUIS CARLOS PETCOFF Y OTRO c/ Estado Nacional y otros s/Medidas cautelares”

(P.T.-M.-Ch.)

LEGISLADORES. Pensión graciable. Ley 13.337. Medida cautelar autónoma. Improcedencia.

El Alto Tribunal sostuvo que “el criterio restrictivo en materia de medidas cautelares, cobra mayor intensidad si la cautelar ha sido deducida de manera autónoma, de modo que no accede a una pretensión de fondo cuya procedencia sustancial pueda ser esclarecida en un proceso de conocimiento. En esas circunstancias, su concesión constituye una suerte de decisión de mérito sobre cuestiones que no hallarán, en principio, otro espacio para su debate” (cfr. dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema in re “Zubeldía, Luis y otros c/ Municipalidad de La Plata y otro”, sent. del 07.02.06, Fallos 329:28).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93508

09.06.14

“NAIDENOFF, LUIS CARLOS PETCOFF Y OTRO c/ Estado Nacional y otros s/Medidas cautelares”

(P.T.-M.-Ch.)

LEGISLADORES. Pensión graciable. Ley 13.337. Medida cautelar autónoma. Improcedencia.

El art. 12 de la LNPA -norma en la que el recurrente basa su petición-, expresamente consagra la presunción de legitimidad de los actos administrativos, naturaleza de la que se ve investida la resolución impugnada. En consecuencia, y siguiendo los lineamientos fijados por la mayoría de la jurisprudencia y doctrina, para que proceda una medida cautelar autónoma y se ordene la suspensión del acto administrativo regularmente dictado, deben concurrir los mismos presupuestos contemplados en el art. 230 del C.P.C.C., pero sujetos a un control de mayor estrictez; esto es, que la verosimilitud en el derecho sea de una entidad que resulte manifiesta la arbitrariedad de la decisión impugnada, y que el peligro en la demora se presente como un perjuicio irreparable.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93508

09.06.14

“NAIDENOFF, LUIS CARLOS PETCOFF Y OTRO c/ Estado Nacional y otros s/Medidas cautelares”

(P.T.-M.-Ch.)

LEGISLADORES. Pensión graciable. Ley 13.337. Medida cautelar autónoma. Improcedencia.

La cuestión acerca de que la suspensión provisoria del ingreso y trámite de pedidos de pensiones graciables pueda afectar o no las potestades legislativas de los peticionantes, no puede ser decidida mediante el dictado de una medida cautelar autónoma como la elegida por aquellos, toda vez que su naturaleza provisoria impide que el tribunal se adentre al estudio del fondo de la cuestión.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93508

09.06.14

“NAIDENOFF, LUIS CARLOS PETCOFF Y OTRO c/ Estado Nacional y otros s/Medidas cautelares”

(P.T.-M.-Ch.)

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. Jefe de Despacho de Primera. Ley 24.018. Acordada N° 20/12 C.S.J.N.

Corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia que hizo lugar a la acción de amparo, reconociendo que la peticionante se encuentra comprendida en el régimen jubilatorio de la ley 24.018. Ello así no sólo en virtud de que la categoría que reviste -Jefe de Despacho de Primera- se encuentra comprendida en el marco del Anexo I de la ley referida, sino por el hecho de que, efectivamente, se le efectuaron los descuentos correspondientes al aporte jubilatorio conforme dicha norma legal; debiendo destacarse que, pese a lo dispuesto en la Circular GP 58/06 A.N.Se.S., el organismo recibió sin cuestionamiento alguno dichos aportes. No obsta a la decisión propiciada la vigencia de la Acordada de la C.S.J.N. N° 20/12, pues la adquisición del derecho de la accionante se consolidó con anterioridad a su dictado.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93419

26.05.14

“VIVA, GRACIELA CRISTINA c/ A.N.Se.S. y otros s/Amparos y sumarísimos”

(P.T.-Ch.-M.)

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. Jefe de Despacho de Primera. Ley 24.018. Res. 196/06 del Consejo de la Magistratura. Acordada n° 20/12 C.S.J.N.

Sin perjuicio de ser la suscripta partidaria de aplicar a las causas en trámite lo dispuesto por Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 20/12, que declaró la invalidez de la Resolución del Consejo de la Magistratura N° 196/06 y decidió mantener los cargos que integran el escalafón del Poder Judicial de la Na-

ción aprobado por Acordada N° 9/05 con las denominaciones allí consignadas -que no contempla al Jefe de Despacho de Primera como funcionario-; la misma no resulta de aplicación en causas como la presente, donde la renuncia al cargo en los términos previstos por el Dec. 8820/62 equivale a una cesación de servicios a los fines previsionales, y la fecha de presentación determina, con carácter definitivo, la situación del agente en pasividad. Por ello, ha de concluirse que el actor consolidó su situación previsional al presentar su renuncia, situación ésta que motivo que el organismo previsional le acordara el beneficio en los términos previstos por la ley 24.018 en forma previa al dictado de la referida Acordada N° 20/12 de la C.S.J.N.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84542

18.09.14

“BERGONZELLI, OSCAR c/ Dirección de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura s/Amparos y sumarísimos”

(D.-F.-H.)

PENSIÓN

CONCUBINA

PENSIÓN. Concubina. Concubinato. Acreditación. Prueba.

El matiz distintivo que permite separar en el plano del análisis a la figura del concubinato de la que se configura ante de un cierto grado de convivencia, lo constituye objetivamente la noción de estabilidad de la relación que distingue al primero. Esa idea de perdurabilidad del vínculo trasciende al sólo hecho de cohabitar y, elevándose a una categoría superior de la escala axiológico social, evidencia al contorno la aspiración coincidente de los protagonistas de encaminar una misma voluntad hacia un objetivo común, cual es el de fundar y mantener entre ellos una comunidad de vida plena, lo que significa en su sentir subjetivo el asumir y compartir el diario vivir en todas sus facetas, generando con tal comportamiento, en ocasiones entre sí y otras respecto a terceros, hechos o actos que por su condición repercutirán en el plano social.

C.F.S.S., Sala I

sent. 161166

26.05.14

“PÉREZ, JULIA ELENA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(Ch.-M.-P.T.)

PENSIÓN. Concubina. Concubinato. Acreditación. Prueba.

Quien solicita el beneficio de pensión invocando la convivencia en común debe acreditar la notoriedad de la relación mantenida, su singularidad y la permanencia del vínculo, aspectos que caracterizan la unión intersexual monogámica no legitimada (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 24.10.90, "Vera, Berta Ofelia"). Dichos requisitos han de tenerse por acreditados cuando los testimonios obrantes en la causa, más la documental acompañada, dan sustento suficiente como para tener por avalada la convivencia requerida por el art. 53 de la ley 24.241; máxime si el organismo no ha podido demostrar razones contundentes que lleven a desconocer la relación concubinaria detentada por la peticionante con el causante y la familia que ellos formaron (en el caso, con el nacimiento de tres hijos), que únicamente fundó en la existencia de un domicilio distinto en el documento de la actora, circunstancia que pudo obedecer a múltiples razones, y que no cabe presumir ante las restantes probanzas.

C.F.S.S., Sala I

sent. 161166

26.05.14

“PÉREZ, JULIA ELENA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(Ch.-M.-P.T.)

PENSIÓN. Concubina. Concubinato. Prueba. Valoración.

Tiene dicho el Tribunal que “si bien la prueba testimonial no puede descalificarse en forma automática, ante la inexistencia de otros elementos de juicio que le den sustento, las declaraciones deben aparecer como categóricas, amplias, sinceras y quienes deponen deben dar debida razón de sus dichos, de modo tal que analizada dicha prueba en el marco de los dispuesto por los arts. 386 y 456 del Código de Ri-

to, aparezca como convincente y autosuficiente para crear certeza en el proveyente sobre los puntos que se quieren acreditar” (cfr. CFSS, Sala I, “Montes, María Angélica”).

C.F.S.S., Sala III

sent. 157273

19.02.14

“GOIRIZ, JULIA NOEMÍ s/Información sumaria”

(P.L.-F.-L.)

PENSIÓN. Concubina. Concubinato. Prueba. Valoración.

En la causa “Prunello, Federico Norberto” el Tribunal Supremo sostuvo que “las reglas que gobiernan el proceso no constituyen un mero ritual sino que tiene el sentido de conducir al esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, norte de la tarea heurística de los jueces ya que el derecho procesal debe ser un instrumento de la justicia y no un obstáculo gratuito para su logro” (Fallos 315:490, Disidencia del Dr. Carlos Fayt) y en tal sentido se ha sostenido que “la inexistencia de prueba documental no puede ser apreciada al extremo de desmerecer los dichos del propio conviviente, máxime cuando al resto de las pruebas rendidas -incluidas las declaraciones testimoniales-, no permite avizorar la falsedad de la convivencia invocada (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 19.04.05, “Arancibia, Valeria Soledad”).

C.F.S.S., Sala III

sent. 157273

19.02.14

“GOIRIZ, JULIA NOEMÍ s/Información sumaria”

(P.L.-F.-L.)

PENSIÓN. Concubina. Concubinato. Prueba. Valoración.

Que el domicilio informado por la Cámara Nacional Electoral no coincida con el denunciado por la actora se explica por motivos laborales, ya que la experiencia indica que quien dice vivir en una “villa” ve dificultada la obtención de un empleo; y si bien ello resulta curioso en una relación de estabilidad, perdurabilidad, afecto, fidelidad y de proyecto de vida juntos, por sí solo tampoco demuestra de manera alguna que la relación de concubinato no haya existido.

C.F.S.S., Sala III

sent. 157273

19.02.14

“GOIRIZ, JULIA NOEMÍ s/Información sumaria”

(P.L.-F.-L.)

PENSIÓN. Concubina. Concubinato. Prueba. Valoración.

La apertura de una sucesión, en donde legalmente sólo están legitimados los hijos del «de cuius» -la concubina no tiene legitimación hereditaria-, no es óbice alguno para la existencia de la relación, ni demuestra que hubieran bienes en común, pues la misma pudo iniciarse para reclamar únicamente derechos sobre «bienes propios» de quien fuera su padre.

C.F.S.S., Sala III

sent. 157273

19.02.14

“GOIRIZ, JULIA NOEMÍ s/Información sumaria”

(P.L.-F.-L.)

PENSIÓN. Concubina. Concubinato. Prueba. Valoración.

Resulta irrelevante que el óbito del causante haya acaecido en un Sanatorio ubicado en un barrio distinto del informado por la peticionante y, que no se aportaran las facturas de gastos médicos y de las exequias, pues ello no configura de manera concluyente la inexistencia de vínculo que se pretende acreditar, pues los mismos pueden haber sido soportados íntegramente por la Obra Social, una Prepaga o por otros familiares, situación que no se desprende objetivamente de los elementos adjuntos en el expediente.

C.F.S.S., Sala III

sent. 157273

19.02.14

“GOIRIZ, JULIA NOEMÍ s/Información sumaria”

(P.L.-F.-L.)

VIUDA/O

PENSIÓN. Viuda. Haberes indebidamente percibidos por el causante. Devolución. Caso “Salgueiro”.

El temperamento adoptado por el Alto Tribunal en autos “Salgueiro, Elida Josefa” (sent. del 03.12.02) y receptado tanto por el organismo previsional mediante la Res. S.S.S. 23/2004 como por la C.F.S.S., halla fundamento en que la pensión no la adquiere la viuda en calidad de heredera, sino a título personal, directo, por estar comprendida entre los beneficiarios enumerados en la ley previsional, así como en la naturaleza alimentaria de la prestación, característica que no difiere de la de los beneficios que los fondos que administra la A.N.Se.S. están destinados a solventar y que justifican asegurar el cobro de sus pasivos, evitando que queden a merced de que se promueva o no sucesión. Una lógica adecuación del criterio expuesto, lleva a admitir que el crédito a favor del organismo por haberes percibidos indebidamente por el causante pueda gravar el monto del beneficio que corresponde abonar a la viuda, con prescindencia de la apertura de un juicio sucesorio, sin perjuicio de los derechos que eventualmente pueda hacer valer la actora con sostén en las disposiciones legales referentes a la sucesión mortis causa.

C.F.S.S., Sala I

Sent. 165179

20.11.14

“SÁNCHEZ, LIDIA MARTA c/ A.N.Se.S. s/Restitución de sumas de dinero”
(P.T.-M.-Ch.)

PENSIÓN. Viuda. Regímenes especiales. Funcionarios del “Proceso de Reorganización Nacional”. Ley 26.475. Acción de amparo.

Para determinar la extinción de los beneficios obtenidos con base en los cargos y/o funciones desempeñadas durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional (ley 26.475), el propio organismo administrativo a través de la Circular G.P. 17/09, estableció las pautas operativas que debe cumplir el área correspondiente en forma previa a resolver la extinción de un beneficio, disponiéndose que tal proceder no resultaba de aplicación a las pensiones directas o derivadas emergentes de los regímenes especiales en ellas comprendidos, de conformidad con el criterio de interpretación efectuado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Dictamen nº 40.719 del 20.03.09, citado en los considerandos de circular 17/09 referida). Por ello, habiéndose acreditado en autos que la actora obtuvo el beneficio de pensión derivada del fallecimiento del causante, que le fuera otorgado al amparo del régimen de una ley especial (en el caso, ley 21.121 por haberse desempeñado como funcionario de la Secretaría de Estado de Energía entre marzo de 1976 y julio de 1977), ha de concluirse que la resolución de la anterior instancia que hizo lugar a la acción de amparo -intentada por considerar que el dictado de la ley 26.475 vulneraría derechos constitucionales- no se ajusta a derecho, en virtud de que no se ha objetivado en autos que concretamente se haya dispuesto la extinción del beneficio de pensión de la reclamante, ni tampoco que esa situación resulte de inminente configuración, en atención a la expresa invocación de la normativa antes indicada. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 157532

17.03.14

“SOLIMANO, MARÍA CRISTINA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”
(F.-L.-P.L.)

PENSIÓN. Viudo. Causante. Cese laboral. Incapacidad total anterior. Imposibilidad de continuar efectuando aportes.

Surgiendo de las constancias de autos que el cónyuge supérstite demostró que la «de cujus» hizo cotizaciones al régimen previsional por un extenso período de tiempo y, además, que al momento del «obitús» tenía sesenta y seis años de edad, resulta ciertamente atendible la petición del beneficio de pensión respecto de quien contribuyó más de un cincuenta por ciento de su vida activa. Ello así considerando que -en el caso- el actor demostró que su cónyuge realizó contribuciones al sistema previsional hasta el cese laboral y la Comisión Médica dictaminó que los síntomas de la enfermedad que sobrellevó le provocaron una incapacidad laboral de un 70%, sin determinar la fecha desde cuando padeció la dolencia referida, aunque sí quedó demostrado -por medio del examen físico y de la evaluación de la historia clínica aportada-, que tres años antes se apreciaron síntomas de la misma. (Del voto del Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 158240

29.04.14

“MARTÍNEZ, ROBERTO JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(P.L.-F.-L.)

PENSIÓN. Viudo. Causante. Cese laboral. Incapacidad total anterior. Imposibilidad de continuar efectuando aportes.

Conforme a la doctrina que postula que “la inhabilidad que surge de una enfermedad impide o merma la posibilidad de que el trabajador continúen prestando servicios de acuerdo a sus aptitudes laborales” (conf. Bianchi - Capón Filas, “Comentario de la ley 24.241 y normas complementaria”, pág. 162), ante la gravedad del padecimiento clínicamente diagnosticado, resulta correcto considerar que la enfermedad devenida de la causante imposibilitó su permanencia en la actividad laboral y que la misma no comenzó en el momento que dictaminó la Comisión Médica sino mucho antes -fecha estimada según antecedentes-, transformándose desde entonces en un impedimento que indiscutidamente dificultó que la causante pudiera continuar contribuyendo al régimen solidario previsional con posterioridad a la fecha de cese laboral. (Del voto del Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 158240

29.04.14

“MARTÍNEZ, ROBERTO JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(P.L.-F.-L.)

PENSIÓN. Viudo. Causante. Cese laboral. Incapacidad total anterior. Imposibilidad de continuar efectuando aportes.

La C.S.J.N. in re “Pinto, Ángela”(sent. del 06.04.10) sostuvo que “...el artículo 19 de la ley 24.241 establece como requisito para tener derecho a las prestaciones que prevé el sistema legal, acreditar treinta años de servicios y contar con sesenta y cinco años de edad -para los hombres-, lo que representa una vida útil laboral de cuarenta y siete años si se comienza a aportar a los dieciocho, por lo que el cumplimiento de la totalidad de dichos requisitos equivaldría al 100% de los aportes de la vida laboral masculina”. Esa conclusión resulta de particular importancia en el caso de autos habida cuenta que la ley 24.241 establece el inicio de los aportes a los 18 años de edad y, teniendo en cuenta que la «de cujus» padecía la enfermedad que generó una incapacidad del 70% cuando tenía sesenta años de edad, su historia laboral quedó reducida a cuarenta y dos años, de cuales se exigen treinta años de servicios con aportes. En tales condiciones, los quince años y seis meses que surgen del detalle de cómputo obrante en el expediente administrativo, representan más del 50% sobre el mínimo de servicios que se le podían exigir a la causante, por lo cabe reconocer la calidad de aportante irregular con derecho en los términos del art. 1, inc. 3, del Dec. 460/99. (Del voto del Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 158240

29.04.14

“MARTÍNEZ, ROBERTO JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(P.L.-F.-L.)

PENSIÓN. Viudo. Causante. Cese laboral. Incapacidad total anterior. Imposibilidad de continuar efectuando aportes.

Corresponde confirmar la decisión a que se arribó en la instancia de grado, en cuanto declaró a la causante con incapacidad total aún antes del cese laboral -producido varios meses después-, y computó su regularidad en la aportación al sistema a partir de esa última fecha y no desde la de su fallecimiento ocurrido más de cinco años más tarde luego de una larga enfermedad. Dicha postura concuerda con la discernida por el Tribunal en casos análogos, en los que la parte actora acreditó incapacidad al cese (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 12.03.08, “Dra., Graciela Yolanda”), y se ajusta a la doctrina sentada por la C.S.J.N. el 06.02.01 en autos “Villalobo, Mario José Mercedes”. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 158240

29.04.14

“MARTÍNEZ, ROBERTO JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(P.L.-F.-L.)

PRESCRIPCIÓN

PRESCRIPCIÓN. Beneficio previsional. Constitución Nacional. Ley 18.037, art. 82.
En materia previsional el derecho al beneficio es imprescriptible. Cualquiera fuera el tiempo que transcurra desde el nacimiento del mismo, el beneficiario puede presentarse ante el organismo administrativo y reclamarlo. Ello no significa que los haberes que le correspondían desde el nacimiento de su derecho hasta la presentación de la demanda sean también imprescriptibles, ya que los mismos deben sujetarse a los plazos y condiciones que fija el art. 82 de la ley 18.037.

C.F.S.S., Sala II

sent. 161457

20.08.14

“DEPETRIS, JULIO CÉSAR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(D.-F.-H.)

PRESCRIPCIÓN. Beneficio previsional. Constitución Nacional. Ley 18.037, art. 82.
El carácter irrenunciable que el art. 14 de la Constitución Nacional atribuye a los beneficios de la Seguridad Social no impide que se aplique el instituto de la prescripción liberatoria al reclamo de las sumas derivadas de la existencia de deuda previsional; no resultando arbitrarias ni violatorias de normas constitucionales las directivas del art. 82 de la ley 18.037.

C.F.S.S., Sala II

sent. 161457

20.08.14

“DEPETRIS, JULIO CÉSAR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(D.-F.-H.)

PRESCRIPCIÓN. Declaración de oficio. Improcedencia.

Si del análisis de la contestación de demanda se desprende que no fue opuesta la defensa de prescripción, sino que solamente se hizo una mera reserva de aquella, corresponde aplicar la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el fallo recaído en autos “Domínguez, Amparo Carmen” (cfr. sent. del 24.04.03, Fallos 326:1436), según la cual no corresponde declarar de oficio la prescripción no opuesta por la demandada.

C.F.S.S., Sala III

sent. 157854

28.03.14

“BIANCO, GLADI NOEMÍ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios con medida cautelar adjunta”

(F.-L.-P.L.)

REGÍMENES ESPECIALES

REGÍMENES ESPECIALES. Funcionarios del “Proceso de Reorganización Nacional”. Ley 26.475. Medida cautelar.

Conforme el art. 43 de la Constitución Nacional, la acción de amparo deviene admisible también ante la proximidad de un acto lesivo inminente, lo que supone la existencia de proximidad, cercanía o inmediatez del acto lesivo, algo más que una mera conjetura. En el caso de autos, de los propios términos de la ley 26.475 y de la Circular A.N.Se.S. GP 17/09 referida a su aplicación, se concluye que aquella “declaró extinguidos los beneficios obtenidos en reconocimiento del desempeño... durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” comprendido entre el 24.3.76 al 10.12.83, otorgados al amparo de regímenes o leyes especiales”, conclusión inexorable a la que se arriba soslayando toda posibilidad de defensa del particular, quien no tiene habilitada la acción de lesividad del art. 14 de la ley 19.549, ni la específica del art. 15 de la ley 24.241, dado que no se imputa la existencia de irregularidades del tenor de las allí previstas. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 159719

23.06.14

“DE LA TORRE, RICARDO MANUEL c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(F.-L.-P.L.)

REGÍMENES ESPECIALES. Funcionarios del “Proceso de Reorganización Nacional”. Ley 26.475. Medida cautelar.

Las pautas fijadas en la Circular A.N.Se.S. GP 17/09, tras excluir expresamente la aplicación de la ley a las pensiones directas o derivadas emergentes de los regímenes especiales en ella comprendidos, prevén las siguientes soluciones: a) mantener en curso de pago el beneficio en base a servicios cumplidos fuera del periodo aludido; b) dar de baja el beneficio y otorgar uno nuevo con arreglo a la ley general; y c) dar de baja el beneficio reconociendo los servicios prestados en el período cuestionado a los fines de ser computados para el eventual acceso a otro beneficio previsional del régimen público de reunir los requisitos para ello. Resulta manifiesto, entonces, el perjuicio inminente que se deriva de las dos últimas hipótesis a que queda expuesto quien demanda, ya sea por la reducción del haber del nuevo beneficio o por la extinción de la prestación sin posibilidad de acceder a otra por ausencia de los recaudos necesarios. La situación de incertidumbre y preocupación que de ello se deriva, tornan procedente disipar el temor de daño inminente, garantizando el mantenimiento del cobro de las prestación destinada a cubrir gastos de subsistencia y ancianidad. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 159719

23.06.14

“DE LA TORRE, RICARDO MANUEL c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(F.-L.-P.L.)

REGÍMENES ESPECIALES. Funcionarios del “Proceso de Reorganización Nacional”. Ley 26.475. Medida cautelar.

Aun cuando no existen derechos adquiridos al mantenimiento de leyes o reglamentaciones, ese principio encuentra valladar en el caso de la verificación de una lesión confiscatoria, supuesto en el cual, tal como lo sostuviera la C.S.J.N. (cfr. Fallos 319:3241, entre muchos otros): “Si bien ninguna ley podría hacer caducar beneficios jubilatorios concedidos, dicha protección no alcanza en igual grado a la cuantía de los haberes, pues estos pueden limitarse en lo sucesivo de acuerdo con exigencias superiores de una política salvadora de su propia subsistencia, de su desenvolvimiento regular o por razones de interés colectivo que hacen al bienestar general, siempre que no resulten sustancial y arbitrariamente alterados”. Ello basta para admitir la pretensión de la parte actora (en el caso, promovió acción de amparo tendiente a evitar que la A.N.Se.S. declare extinguido o modifique su beneficio jubilatorio acordado con arreglo a la ley 21.121 y concordantes, por aplicación de la ley 26.475 en cuanto dispone la extinción de las prestaciones reconocidas a los funcionarios que se desempeñaron como Presidente de la Nación, Ministros, Secretarios y Subsecretarios durante los años 1976 y 1983, período que abarcó el “Proceso de Reorganización Nacional), sin que ello importe abrir juicio de valor sobre razones de oportunidad y conveniencia de la norma impugnada, puesto que en el sub examine se hallan en juego derechos de índole alimentario en los que los jueces tienen el deber de actuar con extrema cautela, de modo de no afectar los fines tutelares de la legislación previsional (Fallos 310:1000; 319:2351; 323:1551 y 2235, entre otros). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 159719

23.06.14

“DE LA TORRE, RICARDO MANUEL c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(F.-L.-P.L.)

REGÍMENES ESPECIALES. Funcionarios del “Proceso de Reorganización Nacional”. Ley 26.475. Medida cautelar.

Corresponde confirmar el pronunciamiento de la anterior instancia que rechazó la cautelar intentada por el titular, mediante la cual persigue la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.475. Ello así teniendo en cuenta que el beneficio especial de que goza (en el caso, otorgado con arreglo a la ley 21.121) fue dejado sin efecto por imperio de la ley 25.668, la cual, según doctrina sentada por la C.S.J.N. al fallar en autos “Arrúes, Abraham David Segismundo” rige para los beneficios allí comprendidos -entre los cuales se halla el del accionante- aun cuando hubieran sido acordados con anterioridad a su sanción. En consecuencia, corresponde concluir que el planteo de autos deviene abstracto, máxime teniendo en cuenta que en autos no se ha acreditado que la norma impugnada haya sido operativa. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 159719

23.06.14

“DE LA TORRE, RICARDO MANUEL c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(F.-L.-P.L.)

REGÍMENES ESPECIALES. Investigadores científicos. Ley 22.929. Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica transferido. Dec. 1540/94. Acción meramente declarativa.

El régimen jubilatorio previsto en la ley 22.929 para investigadores científicos y tecnológicos asegura el derecho a percibir los haberes mensuales de acuerdo con una proporción del sueldo asignado al último cargo ejercido en actividad, y ese método debe ser aplicado por haber sido restablecida la vigencia de dicho estatuto mediante el art. 1 de la ley 24.019 (cfr. C.S.J.N., sent. del 15.11.05, "Massani de Sese, Zulema Micaela"). Asimismo, el Alto Tribunal señaló que la ley 24.241 "...creó el sistema integrado de jubilaciones y pensiones que abarca, entre otros, a los funcionarios, empleados y agentes que en forma transitoria o permanente desempeñen cargos en cualquiera de los poderes del Estado Nacional, a la vez que derogó las leyes 18.037 y 18.038, sus modificatorias y complementarias, más dicho sistema no contiene cláusula alguna que altere o extinga el régimen especial previsto en la ley 22.929 para investigadores científicos y tecnológicos".

C.F.S.S., Sala II

sent. 160982

08.07.14

"ZAPPACOSTA, LUCIO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa"
(D.-H.-F.)

REGÍMENES ESPECIALES. Investigadores científicos. Ley 22.929. Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica transferido. Dec. 1540/94. Acción meramente declarativa.

El régimen jubilatorio de la ley 22.929 -investigadores científicos- ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el régimen general reglamentado por las leyes 24.241 y 24.463, con el que coexiste, manteniéndose vigente con todas sus características, entre las que se encuentra su pauta de movilidad (cfr. Fallos 328:4044).

C.F.S.S., Sala II

sent. 160982

08.07.14

"ZAPPACOSTA, LUCIO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa"
(D.-H.-F.)

REGÍMENES ESPECIALES. Investigadores científicos. Ley 22.929. Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica transferido. Dec. 1540/94. Acción meramente declarativa.

De la lectura del Dec. 1540/94 se desprende que en virtud del "proceso de transformación del Estado Nacional y de las actividades empresarias que estaban a su cargo, así como el estado del proceso de privatización de la actividad de generación de energía eléctrica... el personal transferido se regirá por las mismas normas laborales que le son aplicables en la actualidad". En consecuencia, la certificación acompañada por el peticionante deviene relevante para confirmar que siguió gozando del statu quo que gozaba laboralmente en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en tanto sostiene que el personal identificado con el Escalafón "A", fue transferido (en el caso, a Nucleoeléctrica Argentina S.A.) en las mismas condiciones escalafonarias, lo que implica respetar la jerarquía laboral que desempeñaba en su lugar de origen. En consecuencia, ha de tenerse por acreditado que el titular de autos se desempeña como trabajador científico en los términos previstos por el art. 1 de la ley 22.929, por lo que corresponde encuadrarlo en el régimen previsional previsto por dicha normativa.

C.F.S.S., Sala II

sent. 160982

08.07.14

"ZAPPACOSTA, LUCIO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa"
(D.-H.-F.)

REGÍMENES ESPECIALES. Programa Jefes de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Acción de amparo. Procedencia.

El carácter alimentario de la pretensión impone adherir al criterio que sostiene la doctrina (conf. Rivas, Adolfo, "El amparo y la nueva constitución Argentina", LL 1994-E-1330; Palacio, Lino E., "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994", LL 1995-D-1237) con referencia a que la ley 16.986 y, en modo preciso, toda la jurisprudencia habida en su consecuencia, de que ha sido modificada por imperio de la reforma de la ley fundamental, tanto en función de lo normado por el art. 43, cuanto por las respectivas cláusulas de los tratados internacionales que,

por disposición del art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, revisten jerarquía constitucional. Por lo tanto, la acción de amparo resulta la vía idónea para el esclarecimiento de la cuestión en debate -el derecho de la actora a inscribirse con el objeto de ser incluida como beneficiaria del Plan Jefes de Hogar, implementado por el Dec. 565/02-, a la luz de los derechos presuntamente afectados, de naturaleza alimentaria y preferente tutela constitucional.

C.F.S.S., Sala II

sent. 159966

02.07.14

“NÚÑEZ, GRACIELA BEATRIZ c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo s/Amparos y sumarísimos”

(D.-F.-H.)

REGÍMENES ESPECIALES. Programa Jefes de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Acción de amparo. Procedencia.

El rechazo a la inscripción que efectúa la autoridad de aplicación constituye un acto arbitrario que lesiona el derecho que prevé el Dec. 565/02, no sólo porque no existe norma alguna que avale tal negativa, sino además, la ley 26.204 fue prorrogada hasta el 31.12.11 en virtud de las leyes 26.204, 26.339, 26.456 y 26.563. Ello así, no resulta aceptable tolerar discriminaciones entre quienes, cumpliendo los recaudos previstos por la norma para acceder al beneficio que instituye, no se hubieran inscripto hasta determinada fecha, so peligro de lesionar el principio de igualdad contenido en el art 16 de nuestra Constitución Nacional.

C.F.S.S., Sala II

sent. 159966

02.07.14

“NÚÑEZ, GRACIELA BEATRIZ c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo s/Amparos y sumarísimos”

(D.-F.-H.)

REGÍMENES ESPECIALES. Programa Jefes de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Acción de amparo. Procedencia.

El planteo referido a las limitaciones presupuestarias que establece la Ley de Presupuesto General de la Nación para el financiamiento del programa “Programa Jefes de Hogar”, no resulta suficiente para vedar la inscripción que solicita el amparista, debiendo el Estado Nacional arbitrar los medios suficientes para satisfacer los derechos prestacionales que consagra a través de las medidas que dicta, evitando efectuar discriminaciones a las solicitantes cuando se encuentran en iguales condiciones.

C.F.S.S., Sala II

sent. 159966

02.07.14

“NÚÑEZ, GRACIELA BEATRIZ c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo s/Amparos y sumarísimos”

(D.-F.-H.)

SERVICIOS

RECONOCIMIENTO

SERVICIOS. Reconocimiento. Reclamo judicial. Competencia.

La pretensión tendiente a obtener el reconocimiento de los servicios prestados por la titular durante un determinado período (en el caso, bajo la modalidad de contrato de pasantía), no encuadra en ninguno de los supuestos del art. 20 de la ley 18.345, puesto que no se trata del cumplimiento de lo dispuesto por el art. 80, 2do. párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, la demanda iniciada en los términos del art. 15 de la ley 24.463, impugnando la resolución administrativa por la cual se desestimó la pretensión, de manera indubitable se halla relacionada con la seguridad social y, en consecuencia, debe concluirse que es dicho fuero el que resulta competente para conocer en la causa (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 30.05.11, “Iribarren, María Lorena” -por remisión al dictamen Fiscal-; íd. Sala II, sent. del 28.09.11, “Ramón, Natalia”).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 92289

17.02.14

“PAEZ, ANDREA c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias”
(P.T.-M.-Ch.)

II- PROCEDIMIENTO

APODERADOS Y GESTORES

APODERADOS Y GESTORES. Abogados del Estado. Bono por derecho fijo.

En el precedente “Colegio Público de Abogados de Capital Federal c /E.N.- P.E.N.” (sent. del 11.04.08), el Alto Tribunal dijo que: “...quienes ejercen la abogacía en favor del Estado Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están obligados a cumplir con la ley 23.187 que ordena la instalación y funciones del referido Colegio...”, considerando que “...eran inválidos los artículos 3º y 5º del Dec. 1204/01 en la medida que pretenden relevar a los abogados del Estado de la obligación de inscribirse en la matrícula que la ley 23.187 pone a cargo del Colegio y de pagar el derecho fijo establecido por su art. 51...” pues “...ninguno de ellos dispone la derogación de una norma específica, sino la aprobación, para los abogados del Estado, de todo un régimen alternativo e incompatible con el establecido en la ley 23.187 que se encuentra vigente...”, y que “...en esta medida, el Dec. 1204/01 viene a modificar la ley 23.187 en un aspecto que no afecta directamente a la administración ni se refiere específicamente a ella”, siendo que “...no se ha demostrado en qué afecta la eficiencia de la administración que los profesionales pertenecientes al cuerpo de abogados del Estado cumplan con la obligación legal de matricularse en el distrito, como lo exige la ley 23.187...”. En consecuencia, el apoderado de la parte demandada no se encuentra alcanzado por ninguna de las excepciones previstas en la ley 23.187, por lo que debe confirmarse la resolución del a quo que lo intimó a presentar el bono de derecho fijo.

C.F.S.S., Sala I

sent. 160291

28.04.14

“SANTILLI, JORGE LUIS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(M.-Ch.-P.T.)

APODERADOS Y GESTORES. Multa. Temeridad y malicia. Art. 45 C.P.C.C.

No surgiendo de forma palmaria ninguna inconducta del letrado actuante, no debe la A.N.Se.S. ser pasible de una especie de “castigo” por el argumento procesal que su apoderado ejerció a fin de refutar los hechos de la demanda y defender la postura asumida. En consecuencia, corresponde desestimar la solicitud de que se aplique la multa prevista por el art. 45 del C.P.C.C. por considerarse maliciosa la conducta de la accionada al contestar la demanda, toda vez que tal malicia no puede ser presumida y que más allá que a la accionante le resulte impropio, contradictorio, o incluso fuera de las previsiones legales que le corresponden aplicar a su caso.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 92080

20.12.14

“CARLUCCI, MARÍA DE LOS ÁNGELES c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(Ch.-P.T.-M.)

APODERADOS Y GESTORES. Representación. Fallecimiento del poderdante. Cesación del mandato. Falta de personería.

Surgiendo de las constancias de autos que al momento de entablar la demanda el letrado carecía de poder que lo habilitara para ello, por cuanto dicho instrumento público había perdido vigencia a partir del día del fallecimiento de su poderdante (art. 53 C.P.C.C.), no cabe más que confirmar la desestimación de la personería por él invocada en nombre del causante. Corrobora esta postura lo dicho por el Alto Tribunal en Fallos 326:1754 (02.06.03), en el sentido que “...el mandato cesa, en principio, por la muerte del mandante (art. 1963, inc. 3º, Código Civil), ya que su voluntad es la única causa que lo sostiene y cuando ésta falta, aquél –ausente su base esencial– deja de existir...”. Y aun así, en el hipotético caso que pretendiera encuadrarse el supuesto en la figura del gestor de negocios previsto en el art. 48 del referido ordenamiento legal, la misma devendría inaplicable en atención no sólo a la falta de ratificación oportuna por quienes tuvieron el derecho para hacerlo -ello es, dentro de los 40 días hábiles de la primera presentación del gestor-, sino también de la mención expresa de las circunstancias excepcionales que impulsaron a éste a

hacer uso de aquél remedio procesal, pese a carecer de la debida representación.

C.F.S.S., Sala I

sent. 164155

20.10.14

“BJELICA, TOMÁS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-P.T.-M.)

APODERADOS Y GESTORES. Representación. Fallecimiento del poderdante. Cesación del mandato. Falta de personería.

La gestión procesal es un instituto de excepción, previsto para supuestos de inexistencia de poder frente a la necesidad imperiosa y justificada de realizar un trámite sujeto a un plazo de caducidad o de prescripción. Esta facilidad para la parte tiene como contrapartida la obligación de ratificar o de proveer al gestor la documentación necesaria para acreditar su representación dentro del plazo previsto que es perentorio (cfr. art. 158 C.P.C.C.), y la sanción aplicable de oficio sin necesidad de petición de parte, intimación previa, planteo incidental o contradicción. En consecuencia, la falta de presentación oportuna de la ratificación de la parte o de los instrumentos que acrediten la personería (art. 48 C.P.C.C.), acarrea la aplicación de la caducidad automática del derecho a convalidar las actuaciones cumplidas por el personero, de manera que, a estar a los términos estrictos de la ley, una ratificación tardía vendría a ser inoperante por aplicación del principio de preclusión procesal (cfr. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Fenochietto-Arazi, pág. 222).

C.F.S.S., Sala I

sent. 164155

20.10.14

“BJELICA, TOMÁS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-P.T.-M.)

APODERADOS Y GESTORES. Temeridad y malicia. Art. 45 C.P.C.C.

Corresponde confirmar la decisión del a quo que desestimó la pretensión de que se aplicara al organismo la multa por temeridad y malicia prevista en el art. 45 del C.P.C.C., por considerar agravante la denegatoria del beneficio de pensión -en atención a la naturaleza del mismo- y a que el perjuicio ocasionado no se soluciona pagando retroactivos con intereses magros. Ello así, toda vez que la malicia no puede ser presumida y, más allá que a la accionante le resulte impropio o contradictorio o incluso fuera de las previsiones legales que corresponden aplicar a su caso, si no surge palmariamente ninguna conducta del letrado actuante ni de la propia Administración en la etapa administrativa, no debe la A.N.Se.S. ser pasible de una especie de “castigo” por el ejercicio de sus facultades propias.

C.F.S.S., Sala I

sent. 160753

06.05.14

“ALFONSO, CIPIRANA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(Ch.-P.T.-M.)

CADUCIDAD DE INSTANCIA

CADUCIDAD DE INSTANCIA. Art. 310 C.P.C.C. Deber del juzgador. Acuerdo conciliatorio.

El instituto de la caducidad -modo anormal de terminación del proceso- se verifica objetivamente cuando se cumple el plazo previsto en el art. 310 del C.P.C.C. y sin que durante su transcurso se realice acto alguno de impulso procesal, con independencia de las razones o circunstancias extraprocesales o de fondo que motivaron la ausencia de éste por la parte actora a cuyo cargo se halla (cfr. C.N.A.Civ. Sala F, sent. del 27.04.83, L.L. 1983-C-396; C.N.A. Civ. y Com. Fed., Sala I, sent. del 16.09.86, L.L. 1987-A-461; C.S.J.N., sent. del 19.09.89, "Simón Francisco c/ Policía de la Pcia. de Buenos Aires"). Su fundamento radica en el abandono tácito de parte interesada y a la presunción de su desinterés exteriorizada en esa inactividad (cfr. C.N.A.Civ., Sala G, sent. del 11.09.81, L.L. 1982-A-15).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84610

24.09.14

“SERRANO, BEATRIZ DEL VALLE c/ Siembra Seguros de Retiro S.A. y otros/Inconstitucionalidades varias”

(F.-H.-D.)

CADUCIDAD DE INSTANCIA. Art. 310 C.P.C.C. Deber del juzgador. Acuerdo conciliatorio.

El juez, en materia tan delicada como la caducidad, no puede ni debe presumir de oficio el abandono voluntario o renuncia de la instancia, por lo que una decisión que implique desligarse del proceso debe subordinarse a que esa presunción adquiera veracidad y certeza, llevándolo al convencimiento de que la conducta omisiva del litigante implica un desistimiento tácito del mismo, obstaculizando la marcha regular de la causa e impidiendo al Tribunal abocarse a su definición normal. Ese desinterés sólo se hará palpable, con escaso o nulo margen de duda, ante el incumplimiento de la intimación que a dichos fines debe realizársele. En tales condiciones, y sólo entonces, la caducidad debería ser dictada.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84610

24.09.14

“SERRANO, BEATRIZ DEL VALLE c/ Siembra Seguros de Retiro S.A. y otros/Inconstitucionalidades varias”

(F.-H.-D.)

CADUCIDAD DE INSTANCIA. Art. 310 C.P.C.C. Deber del juzgador. Acuerdo conciliatorio.

Aun habiendo transcurrido en exceso el plazo previsto por el art. 310 del C.P.C.C., si de la lectura de las actuaciones surge que las partes suscribieron un acuerdo conciliatorio que pone fin a la pretensión que fuera deducida en autos conforme art. 308 del mismo ordenamiento, corresponde revocar la decisión del a quo que declaró la caducidad de la instancia, y devolver las actuaciones al juzgado de origen a fin de que proceda al archivo de las actuaciones.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84610

24.09.14

“SERRANO, BEATRIZ DEL VALLE c/ Siembra Seguros de Retiro S.A. y otros/Inconstitucionalidades varias”

(F.-H.-D.)

CADUCIDAD DE INSTANCIA. Demora. Diligencia. Responsabilidad del tribunal.

Habida cuenta de que el instituto de la perención de instancia constituye un modo anormal de finalización del proceso que conspira contra el principio de conservación de aquél, la doctrina y la jurisprudencia han asumido una postura restrictiva en su aplicación, por la cual sólo se ha admitido la presunción de renuncia a la continuidad del trámite en supuestos en que la inactividad prolongada neutraliza toda duda al respecto. En consecuencia, corresponde indagar en cada caso cual ha sido la diligencia puesta por la parte para urgir las actuaciones (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 05.07.00, “Peverelli, Dora”, voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 127737

30.04.14

“BOCHATAY, RUSBELLA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(P.L.-L.-F.)

CADUCIDAD DE INSTANCIA. Demora. Diligencia. Responsabilidad del tribunal.

Una vez declarada la cuestión de puro derecho y habiendo pasado las actuaciones para dictar sentencia, es el Tribunal quien deberá continuar con los actos procesales correspondientes. Al respecto se ha sostenido que si bien la carga de instar el proceso pesa sobre las partes, su responsabilidad cesa cuando el trámite se hallare pendiente de una actividad a cargo del tribunal, que excluyera la inoperancia de aquella -cfr. “Régimen del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Revisado y Comentado por Roland Arazi y Carlos Eduardo Fenochietto”, pág. 289- (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 26.02.02, “Alonso, Sara Amanda”).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 127737

30.04.14

“BOCHATAY, RUSBELLA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”

(P.L.-L.-F.)

COMPETENCIA

COMPETENCIA. Declaración de incompetencia. Art. 352 C.P.C.C. Principio de radicación.

Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 352 del C.P.C.C. es una facultad que ha sido conferida a los jueces federales con asiento en las provincias. En razón de ello, no resulta aplicable en autos en la medida que el juzgado de primera instancia interviniente se encuentra emplazado dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo el Tribunal se ha expedido respecto de la improcedencia de la declaración de incompetencia "...cuando el juez interviniente realizó actos procesales que implican una aceptación de la competencia, cobrando así plena vigencia el principio de radicación (cfr. C.F.S.S, Sala I, "Letanu, Nélide", sent. del 18.06.99).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 92426

06.03.14

"WALDHUTER, MARÍA EUGENIA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias"
(Ch.-M.-P.T.)

DEMANDA

DEMANDA. Haberes previsionales. Reajuste. Interposición. Plazo. Medida preliminar. Procedencia.

La sola notificación de la resolución administrativa denegatoria de la petición de reajuste, no constituye elemento autónomo suficiente como para fundar una demanda de reajuste. Por ello, si la UDAI correspondiente negó la vista solicitada al profesional interviniente, ha de concluirse que, a fin de evitar el vencimiento del plazo previsto por el art. 15 de la ley 24.463, no resulta improcedente la tramitación de la medida preliminar a través de la cual se peticiona la remisión del expediente administrativo del titular para interrumpir el plazo de prescripción allí normado; y una vez sustanciada la misma, que el actor complete su demanda a partir del acceso al referido expediente administrativo.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 83346

08.04.14

"VALENZUELA, SUSANA ISABEL c/ A.N.Se.S. s/Pensiones"
(D.-F.-H.)

DEMANDA. Haberes previsionales. Reajuste. Interposición. Plazo. Medida preliminar. Procedencia.

La enumeración de las diligencias preliminares contenidas en el art. 323 del C.P.C.C. no tienen carácter restrictivo aunque se trate de medidas de carácter excepcional; pero para su procedencia ha de demostrarse la necesidad de que ellas se decreten sin que su acogimiento desnaturalice su sentido, ni imponga a la autoridad judicial tareas impropias de su función (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 08.08.02, "Liberjen, Perla Elsa Gloria").

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 83346

08.04.14

"VALENZUELA, SUSANA ISABEL c/ A.N.Se.S. s/Pensiones"
(D.-F.-H.)

DEMANDA. Traslado. Notificación. Domicilio. Nulidad.

Por su especial trascendencia, la notificación de la demanda debe concretarse en la persona del emplazado y en su domicilio real, porque de la regularidad de la citación depende el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio. Por ello, incluso ante la existencia de duda, debe buscarse siempre la solución que evite conculcar esa garantía de origen constitucional. Desde esta perspectiva, si se notificó la citación como tercero al domicilio suministrado por la Cámara Electoral y la diligencia se practicó bajo responsabilidad de la parte actora, pero de la prueba documental acompañada por la recurrente surge que no era el domicilio de la requerida,

cabe decretar la nulidad de la citación. Ello así, máxime cuando el vicio se origina en el traslado de la acción, circunstancia ante la que corresponde ser restrictivo en cuanto al principio de validez y amplio en cuanto a las posibles irregularidades que pudiera contener (cfr. C.N.A.Civ., Sala G, sent. del 16.11.09, “P. de G., D. S. c/ G., P.”).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 91901

06.12.13

“SOSA, MARTHA LUCÍA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(P.T.-Ch.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Bonos. Consolidación de deuda. Pago en efectivo. Intereses. Tasa aplicable.

Carece de fundamentación la resolución del a quo que omitió dar explicaciones de los motivos que lo llevaron a la aplicación de la tasa activa empleada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuentos de documentos comerciales, apartándose de lo dispuesto en las leyes de consolidación de la deuda pública respecto del interés aplicable, e incumpliendo de esa forma con lo dispuesto en el art. 161, inc. 2 del C.P.C.C. que exige la expresión de los fundamentos del pronunciamiento judicial. Ello así, porque aun dejando de lado el referido óbice procesal, la falta de tratamiento de los cuestionamientos que realizara la parte importa un injustificado apartamiento de normas de inexcusable aplicación en virtud del carácter de orden público que reviste el régimen de consolidación (cfr. dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal ante la C.S.J.N., en autos “Ladefa S.A.C.I.F.E.P.A. c/ Río de La Plata TV S.A. de Teledifusión Comercial, Industrial y Financiera Canal 13” que el Tribunal hiciera suyo en Fallos 330:1772). (Del dictamen Fiscal al que adhieren los Drs. Laclau y Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128676

29.09.14

“FRANK, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(L.-P.L.-F.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Bonos. Consolidación de deuda. Pago en efectivo. Intereses. Tasa aplicable.

Los créditos a liquidarse judicialmente se deben expresar a la fecha de corte, devengándose a partir de allí los intereses dispuestos en las respectivas leyes de consolidación (Fallos 330:1772). Dicho criterio fue reiterado por la C.S.J.N. en la causa “Nicklin, Nelly Edith” (sent. del 30.06.09), y reafirmada posteriormente al compartir el Alto Tribunal el dictamen emitido por la Sra. Procuradora Fiscal, en autos “Echevarría, Olga Beatriz” (sent. del 21.02.13) donde se estableció: “... que las obligaciones alcanzadas por las leyes 23.982 y 25.344 se consolidan después de su reconocimiento firme, en sede judicial o administrativa. Como consecuencia de ello, se produce la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, por lo que sólo subsisten para el acreedor los derechos derivados de la consolidación que la misma ley establece: exigir el pago en efectivo, en los plazos fijados por aquélla, o la entrega de los bonos que corresponda (art. 17 de la ley 23.982 y Fallos 329:2055, 4309; 332:2231, entre otros). (Del dictamen Fiscal al que adhieren los Drs. Laclau y Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128676

29.09.14

“FRANK, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(L.-P.L.-F.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Bonos. Consolidación de deuda. Pago en efectivo. Intereses. Tasa aplicable.

El art. 39 de la ley 26.337 y la Res. S.S.S. 12/04 dispusieron la cancelación de los créditos en efectivo en razón de la edad avanzada o de la gravedad del estado de salud de los acreedores. Dicha modalidad de pago -contemplada también por las leyes 25.967, 26.078 y 26.198, y extendida a todas las obligaciones previsionales por

las leyes 26.422 y 26.546- constituye una de las alternativas previstas por el régimen de consolidación, e importa la obligación de adicionar intereses al monto de la condena en los términos de los arts. 6 de la ley 23.982 y 12, Anexo IV, del Dec. 1116/00, reglamentario de la ley 25.344. A igual conclusión arribó la C.S.J.N. en autos “Herren, Carlos Humberto”, sent. del 22.10.13. (Del dictamen Fiscal al que adhieren los Drs. Laclau y Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128676

29.09.14

“FRANK, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(L.-P.L.-F.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Bonos. Consolidación de deuda. Pago en efectivo. Intereses. Tasa aplicable.

El art. 6 de la ley 23.982 establece que, a partir de la consolidación, las obligaciones comprendidas devengarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el B.C.R.A., capitalizable mensualmente. Esta norma ha sido reproducida por el art. 12, inc. a), Anexo IV, del Dec. 1116/00, relativo a las deudas consolidadas y pagaderas en moneda nacional y/o bonos emitidos en moneda nacional, aplicable a los créditos que se liquidan judicialmente en virtud de la remisión que efectúa el art. 13 del mismo decreto (cfr. dictamen de la Sra. Procurado Fiscal de fecha 14.05.12, en la causa “Delfino, María c/ A.N.Se.S.”). (Del dictamen Fiscal al que adhieren los Drs. Laclau y Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128676

29.09.14

“FRANK, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(L.-P.L.-F.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Bonos. Consolidación de deuda. Pago en efectivo. Intereses. Tasa aplicable.

Sin perjuicio de la opinión personal del suscripto sobre la tasa de interés a aplicar a deudas consolidadas pagaderas en efectivo (ver, entre otras, causas “Di Iacovo, Josefina”, sent. del 12.10.05 y “Villafranca Gutiérrez, Manuel”, sent. del 13.3.06), un nuevo análisis de la cuestión planteada conduce a aplicar al sub examine la reiterada doctrina sentada por el Superior Tribunal el 21.02.13 en “Echevarria, Olga Beatriz”, sostenida el 15.05.14 in re “Robert, Daniel” y el 03.06.14 en la causa “García Fernando Claudio” y sus citas -entre muchos otros-, por lo que corresponde -en lo pertinente- el empleo de la tasa promedio de caja de ahorro común (art. 6 de la ley 23.982). El temperamento expuesto ha sido ratificado por la C.S.J.N. el 02.09.14 en las causas “Delfino, María” en concordancia con lo dictaminado por la P.G.N. y “Medone, Alberto Víctor”. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128676

29.09.14

“FRANK, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(L.-P.L.-F.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Bonos. Consolidación de deuda. Pago en efectivo. Intereses. Tasa aplicable.

Al revisar lo decido por la Sala III de la C.F.S.S. en el caso “Delfino, María” (la aplicación de la tasa de interés de sentencia desde que cada suma fue debida hasta su efectivo pago, por haberse producido la amortización de los bonos), el Alto Tribunal precisó que en relación a los créditos -pagaderos en efectivo- consolidados por las leyes 23.982 y 24.130, “corresponde ordenar que desde la fecha de corte establecida en la primera norma citada hasta la amortización de los títulos públicos previstos por el Dec. 1873/02 -que dispuso la emisión de nuevos bonos para la cancelación de las deudas comprendidas en esos estatutos-, se apliquen los accesorios previstos en el art. 6 de la ley 23.982 (conf. arg. causa “Marchetti, Osmar Edmundo c/Yacimientos Mineros de Aguas Dionisio”, sent. del 26.03.13); y que “desde la fecha de vencimiento de los bonos contemplados en el decreto citado para hacer frente a las deudas previsionales pendientes de cancelación de las leyes 23.982 y 24.130, hasta el efectivo pago de las acreencias, corresponde ordenar la aplicación de la tasa pasiva de interés, de conformidad con lo resuelto en el precedente “Dominguez, Norah Giselda”, fallada el 11 de noviembre de 2008, cuyos fundamentos se dan por reproducidos”. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128676

29.09.14

“FRANK, ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(L.-P.L.-F.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Bonos. Consolidación de deuda. Pago en efectivo. Intereses. Tasa aplicable.

Sin perjuicio de la opinión personal del suscripto sobre la tasa de interés a aplicar a deudas consolidadas pagaderas en efectivo (ver, entre otras, causas “Di Iacovo, Josefina”, sent. del 12.10.05 y “Villafranca Gutiérrez, Manuel”, sent. del 13.3.06), un nuevo análisis de la cuestión planteada conduce a aplicar al sub examine la reiterada doctrina sentada por el Superior Tribunal el 21.02.13 en “Echevarría, Olga Beatriz”, sostenida el 15.05.14 in re “Robert, Daniel” y el 03.06.14 en la causa “García Fernando Claudio” y sus citas -entre muchos otros-, por lo que corresponde -en lo pertinente- el empleo de la tasa promedio de caja de ahorro común (art. 6 de la ley 23.982). El temperamento expuesto ha sido ratificado por la C.S.J.N. el 02.09.14 en las causas “Delfino, María” en concordancia con lo dictaminado por la P.G.N. y “Medone, Alberto Victorio”.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128756

16.10.14

“DIEHL, HÉCTOR ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Bonos. Consolidación de deuda. Pago en efectivo. Intereses. Tasa aplicable.

Al revisar lo decidido por la Sala III de la C.F.S.S. en el caso “Delfino, María” (la aplicación de la tasa de interés de sentencia desde que cada suma fue debida hasta su efectivo pago, por haberse producido la amortización de los bonos), el Alto Tribunal precisó que en relación a los créditos -pagaderos en efectivo- consolidados por las leyes 23.982 y 24130, “corresponde ordenar que desde la fecha de corte establecida en la primera norma citada hasta la amortización de los títulos públicos previstos por el Dec. 1873/02 -que dispuso la emisión de nuevos bonos para la cancelación de las deudas comprendidas en esos estatutos-, se apliquen los accesorios previstos en el art. 6 de la ley 23.982 (conf. arg. causa “Marchetti, Osmar Edmundo c/Yacimientos Mineros de Aguas Dionisio”, sent. del 26.03.13); y que “desde la fecha de vencimiento de los bonos contemplados en el decreto citado para hacer frente a las deudas previsionales pendientes de cancelación de las leyes 23.982 y 24.130, hasta el efectivo pago de las acreencias, corresponde ordenar la aplicación de la tasa pasiva de interés, de conformidad con lo resuelto en el precedente “Domínguez, Norah Giselda”, fallada el 11 de noviembre de 2008, cuyos fundamentos se dan por reproducidos”. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al planteo en tratamiento teniendo en cuenta que no es oponible a ello la eventual aprobación de liquidación en cuanto ha lugar por derecho ni la preclusión del derecho a impugnar la liquidación, frente a la obligación de los jueces de ajustar su decisión –precisamente- a derecho, lo que implica adecuar sus pronunciamientos a los lineamientos sentados por el Superior, visto la autoridad moral que cabe reconocer a sus fallos y evidentes razones de celeridad y economía procesal (cfr. C.S.J.N. in re “Stieben, Luis Manuel y otros c/ E.N.- Mº de Seguridad”).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128756

16.10.14

“DIEHL, HÉCTOR ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-L.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Bonos de consolidación Serie III. Intereses. Tasa aplicable.

En relación a la conversión en efectivo de la deuda consolidada respecto a los Bonos I, II y III, el Tribunal se ha expedido en el mismo sentido en los autos “Corroza, Gregorio” (sent. del 30.09.08), “Rulli, Domingo” (sent. del 30.12.08) entre otros. Sin embargo, a tenor de la reiterada doctrina emanada del Alto Tribunal en los precedentes “Ladefa S.A.C.I.F.E.P.A. c/ Río de la Plata TV S.A. de Teledifusión Comercial Industrial Financiera Canal 13” (sent. del 17.04.07), “Nicklin, Nelly Edith c/ A.N.Se.S.” (sent. del 30.06.09), “Echevarría, Olga Beatriz c/ A.N.Se.S.” (sent. del 21.02.13; “Delfino, María c/ A.N.Se.S.” (sent. del 02.09.14); y teniendo en cuenta lo sostenido por la C.S.J.N. en la causa “Pulcini, Luis” (sent. del 26.10.89) respecto de la obligatoriedad de sus sentencias, cabe aplicar los criterios allí sustentados y, en consecuencia, fijar la tasa promedio de la caja de ahorro común (art. 6 de la ley 23.982) para las sumas consolidadas hasta el vencimiento del plazo fijado en cada

una de ellas; y a partir de allí deberá estarse a la tasa establecida en la sentencia hasta su efectivo pago. En consecuencia, deberá mantenerse el criterio sustentado en torno a los Bonos I y II, y modificarse el criterio que se sostuvo respecto a los Bonos III conforme lo expuesto precedentemente.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 94137

19.09.14

“PANELO, PEDRO c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional”

(P.T.-Ch.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Convenios de transferencia. Obligado al pago. Persona ajena a la litis. Sentencia aclaratoria.

Sin perjuicio que la sentencia haya analizado la incidencia del Convenio de Transferencia del Instituto Municipal de Previsional Social de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a la Administración Nacional de la Seguridad Social, a efecto de determinar el obligado al pago de las diferencias de haberes previsionales según la fecha de su devengamiento (anteriores o posteriores al 01.01.94), si de las constancias de autos se desprende que la ejecutada ha sido la A.N.Se.S., y que las liquidaciones aprobadas -ya firmes- fueron dilucidadas entre dicha administración y el actor sin que el organismo municipal -actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- haya sido traído a los actuados como parte o tercero para ejercer los derechos pertinentes, no corresponde se lo condene al pago de las referidas diferencias devengadas con anterioridad al 01.01.94. Ello así, porque definir un obligado al pago frente al ejecutante, y por consiguiente una condena contra quien ha permanecido ajeno a la litis y cuya intervención se ha limitado a presentar diversos informes que le fueron requeridos, es improcedente y afecta su derecho de defensa. En consecuencia, es preciso subsanar el error material incurrido ya que si bien el fundamento de las obligaciones entre A.N.Se.S. y el Gobierno de la C.A.B.A. derivan del referido convenio de transferencia, frente al actor la obligación de pago debe ser asumida por organismo y por tanto, los efectos procesales de los actos firmes habidos en autos deben ser asumidas por esta.

C.F.S.S., Sala II

aclaratoria sent. int. 84511

28.10.14

”DESPLATS DE PAZ, MARÍA INÉS JOSEFINA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución Previsional”

(F.-D.-H.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Haberes previsionales. Reajuste. Retroactivo. Impuesto a las ganancias. Retención. Devolución.

Toda la normativa referida a la recaudación del impuesto a las ganancias establece que en caso de retención en exceso, el agente de retención podrá devolver ese excedente y compensarlo por el sistema con otras obligaciones del mismo impuesto. Ello así, en virtud de lo dispuesto por el art. 10 de la R.G. 738C/99 -modificada por el art. 6 de la R.G. 2233 de la A.F.I.P.- que dispone “los agentes de retención y/o percepción se acreditarán los importes correspondientes a los pagos que hubieran efectuado en concepto de devoluciones por retenciones y/o percepciones en exceso, los que les serán compensados por el sistema con otras obligaciones del mismo impuesto”. En consecuencia, surgiendo de las constancias de autos que la A.N.Se.S. efectuó la retención del impuesto referido y depositó las sumas a la orden de A.F.I.P., conforme lo establecido en las normas precedentemente señaladas, corresponde que sea el organismo previsional quien reintegre las sumas indebidamente retenidas al titular.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 94210

09.10.14

“ROACH, STANLEY CUTHBERT c/ A.N.Se.S. s/Ejecución provisional”

(P.T.-Ch.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Haberes previsionales. Reajuste. Pago. Fondos. Ley 24.624. Embargo.

El propósito del art. 19 de la ley 24.624 consiste en evitar que la administración pueda verse situada, por imperio de un mandato judicial perentorio, en el trance de no poder satisfacer el requerimiento por no tener los fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar su marcha normal; pero no significa que el Estado se encuentre fuera del orden jurídico que está obligado a tutelar ni que esté exento de acatar los fallos judiciales. Por ello, el citado artículo debe ser interpretado de modo tal que armonice con los principios y garantías consagrados por la

Constitución Nacional y con el resto del ordenamiento jurídico (cfr. C.S.J.N. in re “Giovagnoli, César Augusto c/Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/Cobro de Seguro”, sent. del 16.09.99; Fallos: 322:2132). En definitiva, en razón del carácter alimentario de la acreencia y resultando el embargo un trámite insoslayable del procedimiento de ejecución de sentencia (arts. 502 y 561 C.P.C.C.; Fallos: 318:2660, considerando 8° y su cita; 321:3508 y 323:2954), corresponde confirmar el embargo adoptado en origen (cf. arg. C.S.J.N. en la causa “Chávez, Fabián Mario c/ Tucumán, Provincia de”, consid. 12° y sus citas, sent. del 04.03.14).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84728

08.10.14

“POTENZA, LUCRECIA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Impuesto a las ganancias. Retención. Restitución. Recursos. Deserción.

Expresar agravios significa ejercitar un control de juridicidad mediante la crítica razonada de los eventuales errores del juzgador, para lograr de ese modo, la modificación total o parcial de la resolución atacada. En consecuencia, corresponde declarar desierto el recurso de apelación cuando el planteo aborda cuestiones que no fueron materia de tratamiento en el pronunciamiento que se recurre (en el caso, el a quo no aprobó la liquidación confeccionada por la parte actora -como sostiene el organismo- sino que intimó a la A.N.Se.S. a que procediera a restituir las sumas retenidas en concepto de impuesto a las ganancias).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 83972

04.06.14

“FIORDELLI, HERMES ORLANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”

(F.-H.-D.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Incumplimiento del organismo. Medidas cautelares. Embargo. Bienes de la A.N.Se.S.

El valor absoluto que el organismo asigna al art. 19 de la ley 24.624 -según el cual “los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público Nacional, ... son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte ... su libre disponibilidad...”- no se compadece con la correcta hermenéutica que cabe atribuir al mismo, conforme lo sostenido por la C.S.J.N. en la causa “Giovagnoli, César Augusto c/ Caja Nac. de Ahorro y Seg.”, sent. del 16.09.99 (Fallos 322:2132), pues fue sancionado “para imponer pautas racionales en el cumplimiento de las obligaciones del Estado evitando el desvío de los recursos presupuestarios y los trastornos consiguientes que en la economía del sector público pueda producir tal desvío”; siendo su propósito “... evitar que la administración pueda verse situada por imperio de un mandato judicial perentorio en el trance de no poder satisfacer el requerimiento por no tener los fondos previstos en el presupuesto para tal fin, o en la de perturbar la marcha normal de la administración. Sin embargo, de ello no se sigue que el Estado se encuentre fuera del orden jurídico que está obligado a tutelar, ni que esté exento de acatar los fallos judiciales”, debiéndose interpretar el art. 19 de la ley 24.624 “... de modo tal armonice con los principios y garantías consagrados por nuestra Ley Fundamental y con el resto del ordenamiento jurídico”. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128798

27.10.14

“MACCARONE, NICOLÁS PASCUAL c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(F.-P.L.-L.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Incumplimiento del organismo. Medidas cautelares. Embargo. Bienes de la A.N.Se.S.

El art. 22 de la ley 23.982 impuso al P.E.N. el deber de comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes, de obligaciones de causa o título posterior al 01.04.91 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento, al tiempo que autoriza al acreedor a ejecutar su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo. También se señaló que el art. 20 de la ley 24.624 dispone que los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional y a cualquiera de sus orga-

nismos y dependencias de los tres poderes serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el presupuesto de la administración nacional ... lo cual también conduce a admitir que el acreedor cuyo crédito se encuentre incluido en la ley de presupuesto respectiva tiene el derecho, en caso de incumplimiento, de ejecutar la sentencia por el monto previsto en la partida presupuestaria correspondiente (cfr. C.S.J.N., sent. del 16.09.99, "Giovagnoli, César Augusto c/ Caja Nac. de Ahorro y Seg." -Fallos 322:2132-). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128798

27.10.14

"MACCARONE, NICOLÁS PASCUAL c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional"

(F.-P.L.-L.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Incumplimiento del organismo. Medidas cautelares. Embargo. Bienes de la A.N.Se.S.

La aplicación mecánica y generalizada del art. 19 de la ley 24.624 sin consideración alguna a lo que prevén el art. 22 de la ley 23.982 y el art. 20 de la ley 24.624, conduciría a la frustración de los derechos de los particulares que se encuentran en condiciones de ejecutar las sentencias con arreglo a estas dos últimas normas, lo que, por cierto, no condice con la intención del legislador; por lo demás, semejante criterio hermenéutico debe ser desechado ... porque implica que el órgano competente para fijar el presupuesto general de gastos y el cálculo de recursos de la administración ha legislado contradictoriamente sobre un mismo tema, autorizando, por una parte, a ciertos acreedores a cobrarse sobre el producto de la venta de los bienes embargados y disponiendo, por la otra, el levantamiento de los embargos que tornan posibles tales ejecuciones (cfr. C.S.J.N., sent. del 16.09.99, "Giovagnoli, César Augusto c/ Caja Nac. de Ahorro y Seg." -Fallos 322:2132-). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128798

27.10.14

"MACCARONE, NICOLÁS PASCUAL c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional"

(F.-P.L.-L.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Incumplimiento del organismo. Medidas cautelares. Embargo. Bienes de la A.N.Se.S.

En atención a que el organismo no invocó, ni menos aún acreditó, haber instando los procedimientos establecidos para dar cumplimiento a la condena de autos, a la luz de lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24.624 -modificado por el art. 39 de la ley 25.565, actual art. 132 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto nº 11.672 t.o. 2005-, y los arts. 22 de la ley 23.982 y 19 de la ya nombrada ley 24.624, complementados por los arts. 94, 95 y 96 de la ley 25.401, resulta inaplicable la regla de inembargabilidad del art. 19 de la ley 24.624 (no absoluta sino relativa y condicionada), delimitada por el art. 22 de la ley 23.982 y los arts. 132 a 136 y 145 de la referida ley 11.672. Dicha solución se impone para poner fin al estado de indefensión de la parte actora ante la irrazonable dilación de la demandada en el cumplimiento de sus obligaciones y concuerda con la adoptada por el Tribunal en casos análogos (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 23.02.07, "Rebecchi, Oscar Armando" y sent. del 01.04.09, "Capola, Bruno"). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128798

27.10.14

"MACCARONE, NICOLÁS PASCUAL c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional"

(F.-P.L.-L.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Incumplimiento del organismo. Medidas cautelares. Embargo. Bienes de la A.N.Se.S.

En atención a la falta de cumplimiento de la condena de autos por parte del organismo, resulta de aplicación lo establecido por el art. 22 de la ley 24.463, modificado por el art. 2 de la ley 26.153, según el cual, el Jefe de Gabinete de Ministros fue facultado para "disponer ampliaciones o reestructuraciones presupuestarias con el objeto de asegurar el pago ..." de sentencias condenatorias, habiéndose dispuesto -además- por el art. 41 de la ley 26.422 (de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2009) el pago en efectivo por parte de la A.N.Se.S. " -también- "de las deudas previsionales consolidadas en el marco de la ley 25.344, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de

deuda". (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128798

27.10.14

"MACCARONE, NICOLÁS PASCUAL c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional"

(F.-P.L.-L.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Incumplimiento del organismo. Medidas cautelares. Embargo. Bienes de la A.N.Se.S.

En consonancia con lo dispuesto por el art. 15 de la ley 26.222, el art. 1 del Dec. 897/07 creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (F.G.S.) del Régimen Previsional Público de Reparto administrado por la A.N.Se.S., que fuertemente incrementado con la transferencia en especie de los recursos que integraban las Cuentas de Capitalización Individual de afiliados y beneficiarios del desaparecido Régimen de Capitalización, operada en virtud del art. 7 de la ley 26.425, cuyo art. 8 previó que "la totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del SIPA ", expresión que por el espíritu que motivó esa norma, y más allá de la literalidad de su texto, habrá de comprender a la totalidad de las prestaciones previsionales a cargo del organismo nacional. En igual sentido, el art. 11 del Dec. 897/07, modificado por el Dec. 2103/03, prevé que el F.G.S. "podrá financiar a la A.N.Se.S. para el pago de los beneficios del SIPA , siempre que durante la ejecución de sus presupuesto se presenten situaciones de contingencias que así lo requieran", quedando a su cargo determinar las situaciones en las que se aplicará este mecanismo. Por ello, ha de concluirse que el oportuno empleo de los instrumentos habilitados por las disposiciones citadas para la cancelación del crédito del accionante, bien pudo haber evitado llegar al embargo del que ahora se agrava el organismo. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128798

27.10.14

"MACCARONE, NICOLÁS PASCUAL c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional"

(F.-P.L.-L.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Incumplimiento del organismo. Medidas cautelares. Embargo. Bienes de la A.N.Se.S.

En múltiples casos, siguiendo la opinión de la mayoría del Tribunal ante el fallo dictado por la C.S.J.N. el 11.08.09 en autos "Reguera, Sara" y atento la doctrina emergente de ese pronunciamiento, el suscripto sostuvo -dejando a salvo su opinión en contrario- que la inembargabilidad de bienes y cuentas de la A.N.Se.S. había quedado derogada por ley 26.153. Ahora bien, una nueva lectura del caso "Reguera" llevan a la convicción de que el mismo se trata de un caso aislado, determinado -como el mismo Alto Tribunal expresa- por "las especiales circunstancias" de tratarse de una persona de más de 84 años que hacía 15 años habría iniciado el trámite para que le entregasen los correspondientes bonos de deuda previsional, y 12 años que el juez de grado había mandado llevar adelante la ejecución. Ante ello, no resulta claro que la Corte Suprema haya querido dar un alcance generalizado a ese pronunciamiento, razón por la cual considero que lo allí resuelto no resulta aplicable al caso de autos. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128798

27.10.14

"MACCARONE, NICOLÁS PASCUAL c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional"

(F.-P.L.-L.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Liquidación. Notificación. Art. 135 incs. 13 y 18 C.P.C.C.

La notificación es el acto mediante el cual se pone en conocimiento de las partes o de los terceros, las providencias judiciales (cfr. Alberto L. Maurino, "Nulidades Procesales", pág. 105 y sig.). De allí que, procesalmente, muy cuidadoso ha sido el legislador al regular aquellos supuestos en que la notificación se debe realizar por cédula o algún otro medio fehaciente de comunicación, quedando la notificación por nota o ministerio legis para supuestos de menor trascendencia procesal. Ello, sin perjuicio de la prudencia del juzgador en ordenar la notificación por cédula incluso de autos o providencias no previstos legalmente, pero donde la situación involucrada y el debido proceso aconsejan una modalidad efectiva de conocimiento, que no albergue duda o cuestionamiento posterior.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 92894

07.04.14

“MÉNDEZ, STELLA MARIS c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro S.A. y otros/Recurso de queja”
(Ch.-P.T.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Liquidación. Notificación. Art. 135 incs. 13 y 18 C.P.C.C.

El inciso 13 del artículo 135 del C.P.C.C. establece que serán notificadas personalmente o por cédula “las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales...”, y el inciso 18 habla de “las demás resoluciones...que determine el Tribunal excepcionalmente, por resolución fundada”. Ello así, surgiendo de las constancias de autos que la resolución que da por aprobada una liquidación -que luego es motivo de las demás instancias procesales que corresponden a la efectiva percepción de las sumas allí aprobadas- no fue notificada a la demandada, corresponde declarar mal denegado el recurso de apelación interpuesto y, devolver las actuaciones a la instancia de grado para que éste sea sustanciado.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 92894

07.04.14

“MÉNDEZ, STELLA MARIS c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro S.A. y otros/Recurso de queja”
(Ch.-P.T.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Liquidación. Intereses. Petición. Momento oportuno.

No habiéndose petitionados los intereses en el momento procesal oportuno, esto es en el escrito de interposición de demanda, el tratamiento de los mismos se encuentra vedado al Tribunal de Alzada (art. 277 C.P.C.C.).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 83938

03.06.14

“DEDEU, WILFREDO PEDRO MÁRTIR JOSÉ MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”
(F.-D.-H.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Liquidación. Retroactivo. Impuesto a las ganancias. Improcedencia.

Surgiendo de las constancias de autos que la suma de la liquidación aprobada se abona en concepto de diferencias por prestaciones previsionales mal abonadas, es decir, que el dinero que cobró el actor pertenece a un derecho de naturaleza previsional reconocido por el sistema de seguridad social, resulta adecuada la solución a que arribó el a quo aplicando analógicamente el art. 20, inc. i) de la Ley de Impuesto a las Ganancias -texto ordenado por Decreto 649/97 Anexo I-; norma que debe relacionarse con el inc. v) del mencionado artículo en cuanto prescribe que “se hallan exentos los montos provenientes de actualizaciones de créditos de cualquier origen o naturaleza...”.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 83938

03.06.14

“DEDEU, WILFREDO PEDRO MÁRTIR JOSÉ MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”
(F.-D.-H.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Liquidación. Retroactivo. Impuesto a las ganancias. Improcedencia.

No corresponde afectar impositivamente el saldo retroactivo, pues ninguna duda cabe que la percepción de las acreencias de esta naturaleza no puede constituir nunca un hecho imponible, y menos todavía, ser pasible de gravamen alguno sin colocar en serio riesgo el principio de integralidad del que gozan las prestaciones previsionales.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 83938

03.06.14

“DEDEU, WILFREDO PEDRO MÁRTIR JOSÉ MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos”
(F.-D.-H.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Liquidación. Intereses. Reserva. Art. 624 Código Civil.

La lectura del art 624 del Código Civil pone en claro que para negarse al pago de los intereses el deudor debe tener una constancia fehaciente de que el acreedor ha recibido el pago del capital "sin reserva alguna sobre los intereses". Si dicha reserva existe el acreedor puede pretender el pago de los intereses. Es el presunto deudor demandado el que debe probar el pago cancelatorio siendo el modo idóneo para hacerlo la presentación del recibo suscripto por el acreedor en el que no conste la reserva sobre los intereses (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala II, sent. 02.11.93, "Siderca S.A.I.C.A. c /E.F.A.").

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93966

11.11.14

"OSUNA, RAMÓN c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad"

(P.T.-Ch.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Liquidación. Intereses. Reserva. Art. 624 Código Civil.

Es inconducente el argumento ensayado en orden a la falta de "reserva", por cuanto más allá de su innecesariedad, habida cuenta el fundamento legal de los intereses en cuestión y el carácter provisional de las liquidaciones, tal afirmación no se compadece con las constancias de autos, que dan cuenta de que se hizo reserva de practicar liquidación por los intereses devengados entre la fecha de la liquidación oportunamente presentada y la del día en que se hiciera efectivo el cobro del cheque respectivo (cfr. C.N.A. Civ. y Com. Fed., Sala I, sent. del 06.08.98, "La Buenos Aires Cía. Arg. de Seguros S.A. c/ Cap y/o Arm. y/o Prop Bq Chubut").

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93966

11.11.14

"OSUNA, RAMÓN c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad"

(P.T.-Ch.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Liquidación. Intereses. Reserva. Art. 624 Código Civil.

Es doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación que "... el art. 624 del Código Civil sienta una presunción de extinción de los intereses, en base al silencio del acreedor que recibe el capital sin reserva. Dicha presunción es jure et de jure -es decir de aquellas que no admiten prueba en contrario- con fundamento en que si el pago debe imputarse primero a los intereses y luego al capital, si éste se recibió sin reservas, es porque aquellos fueron abonados previamente o se ha renunciado tácitamente a ellos..." (cfr. Dictamen 266/2004 del 23 de junio de 2003).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93966

11.11.14

"OSUNA, RAMÓN c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad"

(P.T.-Ch.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Liquidación. Intereses. Reserva. Art. 624 Código Civil.

Conforme a los extremos establecidos por la legislación y doctrina sobre el tema reserva de intereses, y observándose que en la causa traída a consideración de la alzada, luego de la toma de conocimiento de la parte actora de la transferencia bancaria realizada por la demandada en su cuenta sueldo en concepto de deuda de haberes, la apelante lejos de consentir el recibo del capital sin reserva alguna efectuó de manera expresa el planteo de la reserva de los intereses adeudados hasta el efectivo pago, corresponde concluir que la cuestión ha sido planteada en tiempo oportuno, y hacer lugar al planteo efectuado.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93966

11.11.14

"OSUNA, RAMÓN c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad"

(P.T.-Ch.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Liquidación. Intereses. Reserva. Art. 624 Código Civil.

El hecho de que al momento de la aprobación de la liquidación de capital e intere-

ses no haya sido efectuada por la actora la reserva de intereses -tal como lo exige el a quo en la sentencia-, no es óbice a que ésta pueda ser efectuada por la beneficiaria hasta el momento mismo de recibir el capital. Ello así, por cuanto aquélla instancia liquidatoria no implica técnicamente “recibo” alguno, y tampoco configura un requisito legalmente exigido.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93966

11.11.14

“OSUNA, RAMÓN c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(P.T.-Ch.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Recursos. Apelación.

Si de los agravios vertidos se infiere que la resolución apelada causa al quejoso un gravamen irreparable, corresponde declarar mal denegado el recurso de apelación interpuesto, y ordenar al juzgado de origen que sustancie el mismo para, posteriormente, elevarlo a la Alzada. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 82987

27.02.14

“PENDOLA, HÉCTOR JORGE c/ A.N.Se.S. s/Recurso de queja”

(H.-D.-F.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Recursos. Apelación.

Conforme se desprende del juego armónico de los arts. 508 y 509 del C.P.C.C., es insusceptible de apelación la sentencia recaída en el proceso de ejecución cuando el ejecutado no hubiera opuesto excepciones. En consecuencia, debe considerarse correctamente denegado el recurso deducido contra el acto impugnado. (Disidencia del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 82987

27.02.14

“PENDOLA, HÉCTOR JORGE c/ A.N.Se.S. s/Recurso de queja”

(H.-D.-F.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Renta vitalicia previsional. Aportes voluntarios. Re-integro. Caución.

Surgiendo de las constancias de autos que el titular obtuvo sentencia favorable, tanto de primera como de segunda instancia, que le reconocieron su derecho al reintegro de los fondos en concepto de aportes voluntarios, aparece evidente el derecho de aquel a la ejecución que pretende. Sin perjuicio de ello, corresponde hacer saber al peticionante que el Tribunal ha resuelto -en expedientes análogos al de autos- que la caución juratoria no resulta suficiente a los fines pretendidos, dadas las excepcionales características de la cuestión y la naturaleza alimentaria de la misma. Por ello, se considera prudente caucionar las diferencias retroactivas, resultando la misma suficiente en función de lo dispuesto por el art. 1989 del Código Civil para garantizar la cuestión litigiosa. Por ello, en atención a la naturaleza alimentaria de las prestaciones debatidas, la ejecución versará sobre el cumplimiento -de ahora en más- de la renta pactada, materializando de tal manera lo decidido en los decisorios cuya ejecución se pretende.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 83984

04.06.14

“BELLIDO, FERNANDO JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Incidente”

(H.-D.-F.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Retroactivos. Liquidación. Impuesto a las ganancias.

Corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia que dispuso que las retroactividades generadas por reajuste de haberes no tributen impuesto a las ganancias. Al respecto el Tribunal tiene dicho que desde el punto de vista legal, si bien el art. 20 inc. i) de la ley 20.628 en su tercer párrafo establece que no estarán exentas de dicho impuesto -entre otras- las jubilaciones, las pensiones y los retiros, una atenta lectura de la norma aplicable conduce a valerse del inc. v) del artículo mencionado, que excluye del pago del impuesto a las ganancias a los montos provenientes de actualizaciones de créditos de cualquier origen o naturaleza. En tal sen-

tido, Luis Omar Fernández en “Impuesto a las Ganancias” (La Ley, junio de 2005) al analizar ese inciso, señala que la razón subyacente de esta disposición es que para el acreedor no existe ningún tipo de ganancia, sino solamente el recupero en valores constantes de su acreencia. Señala también que la ley se refiere fundamentalmente a la repotenciación de créditos o deudas, de modo de expresarlos en poder adquisitivo de un determinado momento posterior a su disposición; planteo este último que remite al examen de cuestiones sustancialmente análogas a las resueltas por mayoría por la Sala (cfr. “Castañeira, Darma Emilia”, sent. del 11.10.07; “Ramirez, Luisa Noemí”, sent. del 31.10.07). (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93834

11.08.14

“SALVADOR LAURO, EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Incidente”

(Ch.-P.T.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Retroactivos. Liquidación. Impuesto a las ganancias.

La ley 20.628 establece que deberá retenerse el impuesto a las ganancias a las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal (arts. 18, 20, 73 y cc). Sin embargo, siendo la cuestión a dilucidar si le corresponde aportar al titular -teniendo en cuenta los mínimos no imponibles- respecto de las retroactividades que percibe, es de señalar que la Res. 213/00 estableció la imputación de las sumas resultantes de la liquidación de sentencias judiciales en concepto de capital, según las fechas en que hubieren sido devengadas, a los fines del cálculo del Impuesto a las Ganancias regulado por la ley antes referida (t.o. por ley 25.057), correspondiendo respecto de los intereses reconocidos en sede judicial, la afectación según el ejercicio fiscal de su percepción (art. 1), y aclarando que ello no obsta al ejercicio de la opción del titular del beneficio de jubilación o pensión por la elección de la imputación del capital según el ejercicio fiscal de su percepción. Es decir que, al momento de poner al pago las sumas retroactivas, el organismo previsional deberá analizar sobre el monto total de las mismas, lo que hubiera correspondido deducir por cada período devengado, y si cada una de esas sumas agregadas al haber mensual alcanzarían la cifra establecida por la norma para ser sujeto de retención. Ello en virtud que la imputación de las sumas resultantes de dichas liquidaciones deberá efectuarse según las fechas devengadas y no en concepto de lo percibido (cfr. art. 7 y cc. de la Res. Gral. 2437/08). (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93834

11.08.14

“SALVADOR LAURO, EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Incidente”

(Ch.-P.T.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Retroactivos. Liquidación. Impuesto a las ganancias.

El organismo, en su condición de agente pagador y de retención en los términos del art. 9 de la Res. Gral. 2437/08, debe realizar la liquidación respectiva y, de no ejercer el titular la opción prevista en el art. 18, inc. b) de la ley 20.628, imputar las sumas resultantes de la liquidación de la sentencia judicial en concepto de capital, conforme la Res. 213/00. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93834

11.08.14

“SALVADOR LAURO, EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Incidente”

(Ch.-P.T.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Retroactivos. Liquidación. Impuesto a las ganancias.

El art. 20, inc. i) de la ley 20.628, establece que “están exentos del gravamen... los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales...”. En consecuencia, y toda vez que los beneficios previsionales tienen como principal característica la de ser sustitutos de los haberes de actividad, correspondería que dicha exención se haga extensiva a los créditos previsionales, ya que si la norma beneficia al sector activo de la sociedad, con más razón debe aplicarse al sector pasivo de la misma, atento que estos beneficios se encuentran destinados a cubrir los gastos de subsistencia y ancianidad. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).

C.F.S.S., Sala I
sent. int. 93834
11.08.14
"SALVADOR LAURO, EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Incidente"
(Ch.-P.T.-M.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Retroactivos. Liquidación. Impuesto a las ganancias.

El organismo previsional sólo podrá efectuar retenciones sobre el capital -en caso de corresponder- si las sumas devengadas de cada período superan el monto mínimo imponible, en su debida proporción, una vez efectuada la pertinente liquidación, y siempre y cuando el titular no hubiese hecho uso de la opción prevista en el art. 18, inc. b) de la ley de impuesto a las ganancias. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).

C.F.S.S., Sala I
sent. int. 93834
11.08.14
"SALVADOR LAURO, EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Incidente"
(Ch.-P.T.-M.)

EXCEPCIONES

EXCEPCIONES. Defecto legal. Arts. 347, inc. 5 y 330 del C.P.C.C.

La excepción de defecto legal procede ante evidentes errores en el modo de redactar la demanda, al omitirse sus aspectos sustanciales (falta de individualización del accionado, imprecisión en la "causa petendi" o en el objeto reclamado), es decir, de los requisitos que dan contenido a la presentación (conf. Fenochietto, Carlos Eduardo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº 2). Ello así, encontrándose absolutamente determinado cuál es el objeto de la acción, no cabe sino confirmar el rechazo de la excepción, toda vez que la misma -establecida en el art. 347, inc. 5, del C.P.C.C.- solo resulta procedente cuando la demanda no se ajusta a los requisitos legales enunciados en el art. 330 del código de rito, afectando el derecho de defensa del demandando.

C.F.S.S., Sala I
sent. int. 92563
17.03.14
"ARCOS ZALAZAR, ELENA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"
(P.T.-Ch.-M.)

EXCEPCIONES. Defecto legal. Demanda. Ley aplicable. Error.

Cuando de la lectura de la causa se desprende que no se encuentra en discusión que la pretensión de autos consiste en la impugnación judicial de una resolución administrativa que denegó un reclamo de reajuste del haber previsional efectuado ante la A.N.Se.S., en el marco del art. 15 de la ley 24.463, por estimarse que el monto actual de la jubilación no representa una cuantía justa en los términos de las normas legales y constitucionales aplicables al caso, el eventual equívoco en la invocación del régimen legal aplicable no resulta un elemento suficiente para acoger favorablemente la excepción de defecto legal.

C.F.S.S., Sala III
sent. int. 127436
26.03.14
"RUBIOLO, CARLOS JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Incidente"
(P.L.-L.-F.)

EXCEPCIONES. Defecto legal. Demanda. Monto. Cuantificación.

No procede la excepción de defecto legal cuando la cuantificación del monto reclamado en la demanda dependa de elementos obrantes en poder de la demandada y requiera una actividad probatoria aún no realizada, dependiendo la estimación de elementos no debidamente fijados (cfr. C.N.A.Civ., Sala E, 18.06.91, Revista Doctrina Judicial 1992-1-880; J.A., 1997-II-47, secc. Índice, sum. 2). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III
sent. int. 127436
26.03.14

“RUBIOLO, CARLOS JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Incidente”
(P.L.-L.-F.)

EXCEPCIONES. Defecto legal. Demanda. Monto reclamado. Omisión. Expediente administrativo.

La excepción que contempla el art. 330 del C.P.C.C. se configura, sin dudas, cuando la estimación del monto del reclamo depende en gran medida de elementos que se hallan en poder de la propia demandada (expediente administrativo ofrecido como prueba en el escrito de inicio) y de operaciones de dificultosa realización en la etapa introductoria del proceso. En tal sentido, la jurisprudencia ha sostenido que si la omisión cuantitativa no implica para el excepcionante una desventaja, no procede la defensa de defecto legal, habida cuenta que el quantum definitivo es determinable en la etapa procesal correspondiente (cfr. C.N.Electoral, sent. del 14.10.97, publicada en L.L., 1998-C-103).

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 83722
26.05.14

“DI PIETRO, DELIO JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Incidente”
(H.-F.-D.)

EXCEPCIONES. Defecto legal. Demanda. Monto reclamado. Omisión. Expediente administrativo.

Más allá del juicio de valor que pueda hacerse sobre el objetivo perseguido con la sanción de la ley 24.463 de establecer un proceso con bilateralidad de partes para posibilitar que la A.N.Se.S. asumiera plenamente su defensa en juicio, tal como está normado en su art. 15, no cabe duda que ello no autoriza al organismo citado a asumir una postura reñida con la buena fe procesal como acontece en el sub examine, donde procura obtener un tratamiento de privilegio que vulnera el principio de igualdad.

C.F.S.S., Sala III
sent. 157635
20.03.14

“GÓMEZ, ANTONIO WALTERIO c/ A.N.Se.S. s/Incidente”
(F.-L.-P.L.)

EXCEPCIONES. Defecto legal. Demanda. Monto reclamado. Omisión. Expediente administrativo.

Resulta absurdo pretender que quien demanda se vea constreñido a precisar el importe reclamado sin tener a su alcance las constancias del trámite administrativo, en el que obran los datos y cálculos practicados por el organismo para la determinación de su importe. Así las cosas -contrariamente a lo insinuado por la recurrente-, es la parte demandada -que tiene en su poder el expediente- la que se encuentra en mejor situación para ejercer su defensa, ya que nada le impide consultar esas actuaciones sin que se vea afectada a su respecto la garantía del debido proceso por la omisión que ataca, ni sea necesario que el juzgado requiera la remisión de aquellas como medida previa al traslado de la demanda. Claro está que para ello, la organización administrativa debe contar con el orden y los elementos necesarios que le permitan localizar con prontitud el trámite respectivo, circunstancias que -en el caso de autos- tanto de la lectura del responde como de la expresión de agravios, aparecen como un ideal inalcanzable en el estado actual de su desenvolvimiento. Por ello, cabe concluir que la propia torpeza de la parte recurrente es la que le impide ejercer plenamente su defensa dentro de los plazos perentorios e improrrogables previstos por la normativa procesal, que la ley 24.463 declara aplicable.

C.F.S.S., Sala III
sent. 157635
20.03.14

“GÓMEZ, ANTONIO WALTERIO c/ A.N.Se.S. s/Incidente”
(F.-L.-P.L.)

HECHO NUEVO

HECHO NUEVO. Interpretación. Art. 365 C.P.C.C.

Es criterio de la C.N.A.Civ. y Com. Fed., Sala I, que "...la ubicación del hecho nuevo en el art. 365 del Código Procesal y el tratamiento que le dispensa no puede generar otro tipo de interpretación, en la cual no cabe concluir como "hecho" la sanción del nuevo texto constitucional, pues no constituye una situación fáctica susceptible de prueba..." (cfr. "Heinze, Juan Carlos y otros", sent. del 12.05.95; y de la C.N.A.Civ., Sala A, que "...entre los requisitos exigidos para la admisibilidad de los hechos nuevos, se encuentra el de que éstos versen precisamente sobre "hechos" (conf. Fassi, "Código Procesal", Tº .I, pág. 663)... no constituye, entonces, un hecho nuevo, la mención de nuevas normas legales que no necesitan ser invocadas por las partes (conf. Fassi, op. cit.; Colombo, "Código Procesal", Tº I, pág. 603"... sin perjuicio de que éste en su condición de norma legal, pueda ser considerado al dictarse la sentencia definitiva..." cfr. ("Feito de Vanrell Mortonelli, H. y otro c/ Municipalidad de la Capital", sent. del 29.03.79).

C.F.S.S., Sala I

sent. 164155

20.10.14

"BJELICA, TOMÁS Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad"
(Ch.-P.T.-M.)

HONORARIOS

HONORARIOS. Base de cálculo. Intereses. Exclusión.

Si perjuicio de dejar a salvo la opinión del suscripto sobre el punto, corresponde considerar que el Alto Tribunal, en los autos caratulados "Autolatina Argentina S.A. c/ D.G.I.", sostuvo que a los efectos de la estimación de los honorarios no deben acumularse los intereses al capital, sino que debe practicarse la regulación exclusivamente sobre el quantum de este último. (Del voto del Dr. Poclava Lafuente al que adhieren los Drs. Fasciolo y Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128520

19.09.14

"OJEDA, CÉSAR c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional"
(P.L.-F.-L.)

HONORARIOS. Cesión.

En el acto jurídico por el cual el cedente conviene con el cesionario transmitirle el crédito, sólo ellos son parte, resultando terceros ajenos a ese acto inclusive el deudor cedido. O sea que, entre las partes, basta su solo consentimiento para que la cesión opere de pleno derecho, aunque desde luego, será necesario que el acto jurídico respectivo esté revestido de la forma legal adecuada; pero llenada esa exigencia, es solo el consentimiento de los contratantes lo que constituye el factor operativo del desplazamiento de crédito entre ellos. En consecuencia, ha de concluirse que si bien el cesionario no se convierte en parte en las presente actuaciones, es acreedor de la totalidad de los derechos y acciones sobre honorarios regulados y/o a regularse en el futuro a favor del cedente (en el caso, en la totalidad de los juicios tramitados ante la Caja Policial que se enumeran en la escritura pública), motivo por el cual debe hacerse lugar a la solicitud del cesionario de que libre cheque a su favor (cfr. dictamen Fiscal al que adhirió la Sala III en autos "Caniglia, Hugo Abel y otros", sent. del 15.02.12).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 91941

06.12.13

"SCHIAVI, JUAN ENRIQUE Y OTROS c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad"
(M.-P.T.-Ch.)

HONORARIOS. Consolidación de deuda. Medio de pago.

Si bien la novación generada por el régimen de consolidación comprende no solamente a la prestación principal, sino a todas aquellas que guarden una relación de accesoriedad, el Alto Tribunal sostuvo que no cabe predicar la existencia de tal relación entre la obligación de pagar los honorarios con la de cumplir con el capital de

la condena, pues la causa de la obligación de pagar dichas retribuciones está dada por el servicio prestado por el profesional en el marco del proceso judicial. Ello así y toda vez que tal novación alcanza a los efectos no cumplidos de las sentencias respecto a las obligaciones consolidadas (cfr. Dec. 2140/91. art. 6º, inc. a), en tal situación se encuentra esta retribución (honorario) ya que constituye un efecto no extinguido de la condena en costas establecida en la sentencia dictada en el proceso, motivos por los cuales también dicho régimen, en materia de honorarios, rige esta causa (Fallos 317:779 -caso “Moschini José María c/ Fisco Nac. (A.N.A.) s/ cobro de pesos”, sent. del 28/7/94, Consid. 11º a 14º).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93492

03.06.14

“PONCE, CELIA PALMIRA Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-M.-P.T.)

HONORARIOS. Consolidación de deuda. Medio de pago.

Conforme lo sostenido por el Tribunal, a partir de la novación de la obligación original -y de cualquiera de sus accesorios a consecuencia de aquélla- “la serie con la cual se cancelará el pago es una cuestión eminentemente fáctica que se encuentra reservada para el Ministerio de Economía o al órgano que éste designe, por ser quienes cuentan con la información referida a los importes necesarios y arbitran los medios tendientes a la cancelación de las deudas según los valores nominales emitidos” (cfr. C.F.S.S., Sala I, “Campelo, José B.”, sent. del 30.11.06 -con cita del caso “Viplan S.A...” y su dictamen previo de la Procuración Gral., C.S.J.N., sent. del 10.10.06-; íd. “Losada, Pedro P.”, sent. del 05.08.09; íd. “Pazos Diego Antonio y Otros”, sent. del 31.03.11).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93492

03.06.14

“PONCE, CELIA PALMIRA Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(Ch.-M.-P.T.)

HONORARIOS. Derecho al cobro. Prescripción.

En materia de prescripción de honorarios debe distinguirse entre el derecho a cobrarlos cuando ya han sido regulados y el derecho a que se regulen, dado que mientras en el primer supuesto se aplica la prescripción decenal, en el segundo rige la bienal -arts. 4023 y 4032, inc. 1º respectivamente, del Código Civil- (cfr. C.S.J.N., sent. del 05.11.96, “Formosa, Pcia. de c/ Estado Nacional”; sent. del 05.10.95, “Patricio, Juan Carlos c/ Bs. Aires, Pcia. de”; C.F.S.S., Sala II, sent. del 20.07.06, “Ramón, Jorge”, entre otros). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128130

03.07.14

“BARBIER, ROBERTO ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajsutes varios”

(P.L.-L.-F.)

HONORARIOS. Letrados. Desvinculación de la causa.

El hecho de que los letrados se desvinculen de la causa no obsta al derecho de percibir sus honorarios, máxime si no se han opuesto excepciones ni alegado circunstancias que hagan presumir su improcedencia. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128130

03.07.14

“BARBIER, ROBERTO ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajsutes varios”

(P.L.-L.-F.)

HONORARIOS. Impuesto al valor agregado. Pago. Condena en costas.

Es uniforme la jurisprudencia respecto de la obligación de quien afronta las costas del juicio, de hacerse cargo del pago del I.V.A. sobre los honorarios regulados. Así, tiene dicho el Alto Tribunal que “corresponde obligar a la parte condenada en costas a que adicione al pago de los honorarios regulados al profesional que actuó en juicio por su contraria, el importe correspondiente al impuesto al valor agregado que recae sobre tales emolumentos” (Fallos 316:1533). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 127589

30.04.14

“CEJAS SAVIO, GUILLERMO ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(F.-L.-P.L.)

HONORARIOS. Impuesto al valor agregado. Pago. Condena en costas.

Teniendo en cuenta que los honorarios integran las costas del juicio, y que estas han sido impuestas a la demandada, debe ser ésta quien se haga cargo del impuesto al valor agregado (cfr. C.N.A.Civ. y Com. Fed., Sala III, sent. del 28.05.93, “Aspres, José M. c/ C.N.A.S.”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 127589

30.04.14

“CEJAS SAVIO, GUILLERMO ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(F.-L.-P.L.)

HONORARIOS. Impuesto al valor agregado. Pago. Condena en costas.

El impuesto al valor agregado, al no ser integrativo del precio, debe sumarse a los rubros de condena. Vale decir, que la base imponible es el precio neto del servicio (honorarios profesionales), y sobre dicha base debe calcularse el porcentaje correspondiente al I.V.A., que no ha de estar a cargo del profesional, sino de quien tiene que retribuir su labor (cfr. C.N.A.T., Sala VI, sent. del 09.12.92, “Ríos, Braulio S. y otros c/ E.N.Tel.”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 127589

30.04.14

“CEJAS SAVIO, GUILLERMO ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(F.-L.-P.L.)

HONORARIOS. Impuesto al valor agregado. Pago. Condena en costas.

Si bien es cierto que el apelante no se encontraba inscripto al momento de regularse la suma correspondiente a sus emolumentos, también lo es que lo hizo posteriormente en cumplimiento de una regla impuesta por la norma específica, y en virtud de que su estado ante la ley impositiva cambió a raíz de la regulación de honorarios en varios juicios dentro de un mismo período fiscal, circunstancia entendiblemente imprevisible a partir de la no uniformidad de los tiempos procesales para la conclusión de los juicios (ver en tal sentido Fallos 322:523, en especial, considerando 7mo. in fine). En ese escenario fáctico legal, resulta razonable hacer lugar a la petición del letrado que solicitó se intime a la demandada a depositar el importe correspondiente al I.V.A. que debe tributar sobre los honorarios regulados, pues de lo contrario se estarían disminuyendo los mismos -que ostentan carácter de alimentarios- por el cumplimiento de una obligación que la misma norma del tributo impone para su cobro; circunstancia que contraría la doctrina sentada en Fallos 316:1533). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 127589

30.04.14

“CEJAS SAVIO, GUILLERMO ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”
(F.-L.-P.L.)

HONORARIOS. Incorporación del IVA. Responsable inscripto.

El responsable inscripto liquida el impuesto cotejando su débito y crédito fiscal, en tanto que la situación del no inscripto es distinta porque el legislador presume de derecho el valor por el añadido en la etapa que le es propia, y considera satisfecha la carga tributaria que le correspondería mediante la sobretasa que incide sobre los insumos que adquiere para el desarrollo de su actividad gravada. Ello importa que el responsable no inscripto por su propia opción queda al margen del régimen de ingreso y liquidación del tributo que le corresponde abonar, desinteresándose la legislación de su situación económica real al no otorgar trascendencia jurídica a los efectos del tributo que le obliga a ingresar en la forma descripta.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84535

18.09.14

“ROMERO, JUAN IGNACIO c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad”

(D.-F.-H.)

HONORARIOS. Incorporación del IVA. Responsable inscripto.

No tendría justificativo legal obligar al vencido en costas, cuando debe satisfacer el honorario de un responsable no inscripto, a incorporar el importe representativo del IVA, pero si lo tiene cuando el responsable es inscripto, quien liquida cotejando su débito y crédito fiscal (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala II, sent. del 16.07.96, "Beccar Varela"; íd. Sala III, sent. del 15.08.96, "Rojas, Oscar Ricardo"). En consecuencia, corresponde establecer que el obligado al pago de los honorarios regulados deberá hacerse cargo de los montos correspondiente al tributo por el IVA de conformidad con la condición de responsable inscripto acreditada por el profesional.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84535

18.09.14

"ROMERO, JUAN IGNACIO c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad"

(D.-F.-H.)

HONORARIOS. Regulación. Apelación. Ley 10.996, art. 11. Incumplimiento. Derecho de defensa.

Atento al incumplimiento del letrado de la parte actora a la obligación que le impone el art. 11 de la ley 10.996, en cuanto sólo apeló por bajos los honorarios regulados, circunstancia que podría eventualmente suscitar intereses contrapuestos con los de su cliente, corresponde devolver los autos al juzgado de origen para que se notifique a la actora, en el domicilio real, la regulación y la interposición del recurso contra dicha regulación, a los fines de garantizar su derecho de defensa.

C.F.S.S., Sala I

sent. 160619

06.05.14

"MONZÓN, DELIA INÉS c/ A.N.Se.S. s/Inconstitucionalidades varias"

(Ch.-M.-P.T.)

HONORARIOS. Regulación. Monto del juicio. Discrecionalidad del juzgador.

La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo (cfr. (Fallos 315:1620, voto del Dr. Carlos S. Fayt).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84511

17.09.14

"DESPLATS DE PAZ, MARÍA INÉS JOSEFINA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución Previsional"

(F.-D.-H.)

HONORARIOS. Regulación. Sentencia. Monto de condena. Rubros que integran el capital. Descuentos.

Los descuentos de ley (en el caso, retenidos por el organismo liquidador en concepto de deducciones o aportes previsionales) representan una obligación para el beneficiario y, su efecto no puede ser trasladado a su representante. La C.S.J.N., en Fallos 317:1378, resolvió al respecto que el monto del proceso a los fines regulatorios está constituido, cuando progresa la demanda, por el monto de condena (conf. Nilda B. Fernández y Ángel L. Capo, "Honorarios de Abogados y Peritos", pág. 86). De ello se sigue que deben tomarse todos los rubros que integran el capital, sin descuentos, por ser el "... monto del asunto o proceso..." (art. 6 inc. a) L.A.) En consecuencia, corresponde que el porcentaje regulatorio se aplique también a los rubros que fueron objeto de descuentos de ley.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 83821

27.05.14

"CAMPI DE SIMONOVICH, LIDIA PIERINA Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad"

(F.-D.-H.)

HONORARIOS. Regulación. Sentencia. Diligencias posteriores. Procedencia.

Corresponde se regulen honorarios por la diligencias cumplidas con posterioridad a la sentencia de conocimiento y hasta tanto se haga efectivo su cumplimiento, pues no cabe admitir que la regulación realizada en aquél pronunciamiento comprenda la

labor profesional futura, cuya existencia, complejidad y extensión y resultado eran por entonces desconocida.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 83617

09.05.14

“GONZÁLEZ, OSVALDO JUAN c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad”

(F.-H.-D.)

HONORARIOS. Res. SIGEN 200/02. Proceso administrativo. Formación del legajo de pago.

Dada la existencia de la Res. SIGEN 200/02 y las disposiciones atinentes al Circuito de Pago de Obligaciones Judiciales de la A.N.Se.S., y advirtiéndose que la recurrente no objetó precisa y razonadamente (art. 256 C.P.C.C.) la validez constitucional de dicha normativa, corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que, ante el pedido de la parte accionante de embargo en concepto de honorarios adeudados, decidió considerar no realizado el correspondiente procedimiento administrativo para su cobro (formación del legajo de pago, conforme la citada resolución).

C.F.S.S., Sala I

sent. Int. 94065

12.09.14

“FERNÁNDEZ, MARTA HAYDEE c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional”

(M.-Ch.-P.T.)

INHABILIDAD DE INSTANCIA

INHABILIDAD DE INSTANCIA. Reclamo administrativo previo. Ley 19.549. Ley 25.344. Pensión. Hija soltera.

A partir de la sanción de la ley 25.344, que reviste el carácter de orden público, y la consiguiente sustitución de los arts. 30, 31 y 32 de la ley 19.549 de procedimiento administrativo, se ha consagrado como condición insoslayable para la viabilidad de la acción judicial el reclamo administrativo previo (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 19.09.02, “Scolari, Pedro c/ A.N.Se.S.”; íd. Sala II, sent. del 30.12.02, “Raffo, Miguel Ángel”; íd. Sala III, sent. del 23.11.01, “Banchio, Néstor Francisco” -en el caso, adhesión del Tribunal al dictamen producido por la Fiscalía nº 1-).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 91925

06.12.13

“PARODI, SUSANA THELMA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(M.-Ch.-P.T.)

INHABILIDAD DE INSTANCIA. Reclamo administrativo previo. Ley 19.549. Ley 25.344. Pensión. Hija soltera.

Sin perjuicio de las constancias arrimadas a la causa, ha de declararse inhabilitada la instancia judicial cuando no se acredite la existencia de solicitud del beneficio (en el caso, pensión pretendida por una hija soltera del causante) que haya dado origen al expediente administrativo correspondiente a efectos de probar los extremos requeridos para la obtención de la prestación.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 91925

06.12.13

“PARODI, SUSANA THELMA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”

(M.-Ch.-P.T.)

NULIDADES

NULIDADES. Planteo. Acción de lesividad. Domicilio. Notificación. Art. 172, inc. 2) C.P.C.C.

La nulidad planteada no debe tener favorable acogida en tanto quien la esboza, si bien explica los motivos que la fundamentan, no da cumplimiento con lo señalado por el art. 172 inc. 2) del C.P.C.C. en cuanto establece que quien promoviere el incidente deberá expresar el perjuicio del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93589

09.06.14

"A.N.Se.S. c/ Blasco Baell, Rosa s/Nulidad de beneficio"

(Ch.-M.-P.T.)

NULIDADES. Planteo. Acción de lesividad. Domicilio. Notificación. Art. 172, inc. 2) C.P.C.C.

No ha de tenerse por cumplida la prescripción del art. 172 inc. 2) del C.P.C.C. cuando la titular del beneficio (en el caso de autos, contra quien la A.N.Se.S. inició acción de lesividad con el fin de que se declare la nulidad del beneficio de pensión que detenta, por considerar que su percepción es ilegítima) se limitó a manifestar que el domicilio al que se le corrió traslado de la demanda, si bien es el denunciado ante el organismo previsional, no es en el que actualmente reside, y que el domicilio real lo pone de su puño y letra cuando va a cobrar y firma los recibos de haberes, por lo que solicita que se oficie al Banco como prueba de lo manifestado. Ello así, porque la posible invalidez de los actos del proceso deben juzgarse atendiendo a la finalidad que, en cada caso concreto, están destinados a satisfacer, de manera tal que la declaración de nulidad no procede cuando, aun siendo defectuoso, el acto ha logrado cumplir su objetivo.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93589

09.06.14

"A.N.Se.S. c/ Blasco Baell, Rosa s/Nulidad de beneficio"

(Ch.-M.-P.T.)

RECURSOS

ACLARATORIA

RECURSOS. Aclaratoria. Art. 166, inc. 2) C.P.C.C. Apelación. Plazo. Interrupción.

La aclaratoria contemplada en el art. 166, inc. 2 del C.P.C.C. no interrumpe el plazo de interposición de los recursos contra la sentencia -o en su caso de providencias simples o interlocutorias-, debiendo el interesado, a todo evento, deducir la apelación. En tal sentido se ha sostenido que "El pedido de aclaratoria no suspende el plazo para interponer el recurso de apelación. De allí que la parte disconforme con la sentencia que le ocasiona agravio debe tener la precaución de apelarla, ya que de otro modo, de no producirse la situación referida precedentemente, el decisorio queda firme" (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 04.03.10, "Instituto de Servicios Sociales Bancarios c/ Banco de la Provincia de Córdoba S.A.").

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84131

08.07.14

"MATTEAZZI, HORACIO ISMAEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(F.-H.-D.)

APELACIÓN

RECURSOS. Apelación. Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada.

Las formas procesales, tienen por finalidad regular la marcha del proceso y el más adecuado ejercicio del derecho por los litigantes y el juez actuante. De allí que los actos procesales deben cumplir los requisitos legales de fondo y forma para que tengan eficacia jurídica. No menores son pues los recaudos de naturaleza objetiva, que al cuando y donde debe ejecutarse el acto procesal. Aspectos que están regulados por la ley en cuanto a su forma y ni las partes ni el juez pueden escoger libremente el modo ni la oportunidad de lugar y tiempo para realizarlos. (Del voto de

la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).
C.F.S.S., Sala II
sent. int. 84052
02.07.14
"NERVO, EUGENIO HÉCTOR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"
(H.-F.-D.)

RECURSOS. Apelación. Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada.

Respecto a las formas procesales, Devis Echandía, sostiene "No se crea que estas formalidades legales de los actos procesales obedecen a simples caprichos, o que conducen a entorpecer el procedimiento en perjuicio de las partes. En realidad se trata de una preciosa garantía de los derechos y de las garantías individuales, pues sin ellas no se podría ejercitar eficazmente el derecho de defensa" (conf. "Teoría General del Proceso", pág. 377). Continúa dicho autor -citando a Couture- que una de las garantías constitucionales más importantes es la del debido proceso con sus secuelas de la garantía de defensa, de petición, de prueba y de igualdad ante los actos procesales (conf. "Estudios", Buenos Aires, 1948, t. I, págs. 18/24), que nuestra Constitución Nacional lo consagra en el artículo 26. Nada de esto se conseguiría sin la previa regulación de las formalidades de los actos procesales, que son la única manera de hacer efectivas esas garantías. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 84052
02.07.14
"NERVO, EUGENIO HÉCTOR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"
(H.-F.-D.)

RECURSOS. Apelación. Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada.

Si bien es cierto que el principio de la obligatoriedad de las formas procesales se ha visto morigerado cuando su aplicación irrestricta evidencia un excesivo rigor formal en detrimento de los justiciables y de la efectiva prestación de justicia, ello no implica prescindir de las formas y dejar al arbitrio de las partes el cumplimiento de las mismas, o suplir sus omisiones, máxime si el incumplimiento de las reglas no se justifica por supuesto error excusable o situaciones ajenas al obligado. En el caso de autos, el reconocimiento de la letrada de que existió un error (la expresión de agravios fue incorrectamente presentada en una Sala distinta a la que se encuentra radicada la causa), resulta insuficiente para prescindir de los efectos preclusivos de su omisión. Ello así, máxime si entre la presentación del memorial (19.06.12) y la declaración de deserción (01.11.13) transcurrió un plazo prudencial en el que no se observa su diligencia en seguir la suerte del mismo, favorecida por la amplia difusión que surge del sistema informático a disposición de los profesionales y público en general. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 84052
02.07.14
"NERVO, EUGENIO HÉCTOR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"
(H.-F.-D.)

RECURSOS. Apelación. Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada.

"Si por inadvertencia se dejó el memorial en una Secretaria de otro Tribunal corresponde declarar desierto el recurso de apelación oportunamente interpuesto (cfr. C.N.Com., Sala B, sent. del 26.08.88, "Exportadora Marly S.A."). (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 84052
02.07.14
"NERVO, EUGENIO HÉCTOR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"
(H.-F.-D.)

RECURSOS. Apelación. Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada.

"La presentación en la Secretaria de primera instancia de la expresión de agravios, respecto de la sentencia definitiva, constituye error inexcusable (art. 259, C.P.C.C.), careciendo de valor la fecha del cargo respectivo puesto en aquella dependencia si, al tiempo de llegar a la alzada, el plazo para presentarlo ya había transcurrido. En

consecuencia, y de conformidad con lo preceptuado por el art. 266, citado Código, declárase desierto el recurso de apelación (cfr. C.N.A.Civ. y Com. Fed., Sala II, sent. del 08.08.00, "Mylpetrol S.A. c/ Servicio Penitenciario Federal"). (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 84052

sent. int. 84052

"NERVO, EUGENIO HÉCTOR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(H.-F.-D.)

RECURSOS. Apelación. Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada.

La Corte Suprema de Justicia tiene dicho en un precedente memorable que "... el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte." (cfr. "Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Colalillo, Domingo c/ Cía. de Seguros España y Río de la Plata", sent. del 18.09.57). De allí que, si en causa de índole "civil y comercial" el Tribunal Címero admitió el ofrecimiento y producción extemporáneos de una prueba decisiva para la suerte del juicio, no sería justo ni razonable impedir y/o frustrar el acceso a dicha verdad jurídica objetiva en un juicio de naturaleza "previsional" porque el pasante del estudio jurídico se confundió de mesa de entradas al presentar en término el memorial de expresión de agravios contra la sentencia de primera instancia. (Disidencia del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84052

02.07.14

"NERVO, EUGENIO HÉCTOR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(H.-F.-D.)

RECURSOS. Apelación. Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada.

El error de "mesa de entradas" en el cual incurrió el actor, nada tiene que ver con la "... finalidad de las formalidades legales de los actos procesales...", ni con la garantía de los derechos individuales, ni, tanto menos, con el derecho de defensa en juicio de la contraria, pues si se admitiera que dichas garantías constitucionales se verían vulneradas si se subsanara o dispensara un simple error material involuntario de cualquiera de las partes que podría llegar a lesionar un derecho sustancial, el proceso dejaría de cumplir su rol más señalado por el constituyente, esto es, el de ser un instrumento de tutela del derecho y no su tumba (conf. Eduardo J. Couture, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", pág. 148). Es que como bien destacaba Manuel M. Ibáñez Frochan, a la luz de una perspectiva axiológica del proceso: "... en el proceso no caben emboscadas ni sorpresas..." (ver "Tratado de los recursos en el proceso civil", LL 1969, pág. 168). (Disidencia del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84052

02.07.14

"NERVO, EUGENIO HÉCTOR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(H.-F.-D.)

RECURSOS. Apelación. Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada.

Numerosos precedentes –ajenos a la jurisdicción proteccional o de acompañamiento en la cual se desenvuelve la presente causa- han enderezado la decisión por este andarivel, y con prudencia y realismo jurídico han evitado conceder prioridad a una norma ritual cuando se halla en juego un derecho o una garantía constitucional. Así, se ha puntualizado lo siguiente: "No corresponde argumentar la invalidez de la presentación de un escrito ante un juzgado que no era el correspondiente a la causa por el solo hecho del error material incurrido y privar a una de las partes de la posibilidad de interponer un recurso útil frente a la sentencia que cree que la perjudica, pues ello tornaría la interpretación del art. 124 del C.P.C.C. en estricta y literal, trayendo aparejado un resultado que diverge del contenido tuitivo de los derechos que toda normativa debe tender a proteger. Los recaudos procesales tienen por fin cuidar ciertas exigencias de orden externo pero no para que los derechos sean vulnerados, sino por el contrario, para que su realización resulte en todos los casos favorecida, de otro modo el juzgador corre el riesgo de que ese orden devenga en ritualismo, tornándose en una forma vacía de contenido ético" (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, "Migliore, Jorge y otros c/ E.N.", sent. del 29.05.96;

ídem Sala IV, "García, E. Arturo c/ E.N.", sent. del 24.04.97; Sala II, "Fisco Nacional – D.G.I. c/ Lipara, Pedro O.", sent. del 11.09.97; Sala II, "Lobos de Venstra, Josefina Francisca c/ E.N. – Consejo Nacional Niñez Adolescencia", sent. del 07.07.05, entre otros). (Disidencia del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84052

02.07.14

"NERVO, EUGENIO HÉCTOR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"
(H.-F.-D.)

RECURSOS. Apelación. Expresión de agravios. Error. Presentación en una Sala equivocada.

Como excepción fundada en la situación de colapso en la cual se halla el fuero de la seguridad social, corresponde excusar el error material en que incurrió de la actora (en el caso, consistente en presentar el escrito de expresión de agravios en una Sala distinta -aunque dentro del plazo de ley- a la que se encuentra radicada la causa-, y tener por presentado en tiempo y en forma el memorial. (Disidencia del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84052

02.07.14

"NERVO, EUGENIO HÉCTOR c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"
(H.-F.-D.)

RECURSOS. Apelación. Inapelabilidad por el monto. Art. 242 C.P.C.C. Ley 26.536.

Corresponde declarar mal elevadas las actuaciones si la resolución de la anterior instancia fue dictada en un proceso cuyo monto es inferior al previsto por el art. 242 del C.P.C.C., modificado por ley 26.536 (\$ 20.000).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84024

16.06.14

"COLLI, ALBERTO JUAN c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional"
(D.-F.-H.)

RECURSOS. Apelación. Monto. Art. 242 C.P.C.C. Ejecución de sentencia. Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto si el monto cuestionado no excede la suma establecida por el art. 242 del C.P.C.C. (\$ 50.000 conforme Acordada C.S.J.N. n° 16/14 del 15.05.14). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128843

31.10.14

"GARCÍA ACOSTA, HÉCTOR ADOLFO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad"
(P.L.-F.-L.)

RECURSOS. Apelación. Monto. Art. 242 C.P.C.C. Ejecución de sentencia. La limitación de la procedencia de las apelaciones a aquellos casos en los que el valor cuestionado supera el monto establecido por el art. 242 del C.P.C.C. rige para los procesos de conocimiento y no para los de ejecución de sentencia, donde se discute el alcance de un pronunciamiento que hace cosa juzgada. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 128843

31.10.14

"GARCÍA ACOSTA, HÉCTOR ADOLFO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad"
(P.L.-F.-L.)

RECURSOS. Apelación. Resolución anterior firme. Principio de preclusión. Art. 560 C.P.C.C.

Cuando la resolución impugnada constituye una consecuencia de otra que se encuentra firme, no es susceptible de ser recurrida (C.N.A.Civ., Sala B, sent. del 27.02.95; C.F.S.S., Sala I, sent. del 23.02.98, "Obra Social para Empleados de Comercio y Act. Civiles c/ Yamana S.R.L"). Éste criterio, admitido por la doctrina y por

la jurisprudencia, resulta correcto, pues de lo contrario se habilitaría una nueva vía de impugnación de las resoluciones con desmedro del principio de preclusión, lo que generaría una situación de inseguridad acerca de la firmeza de los actos procesales cumplidos (cfr. C.N.A.Civ. y Com. Fed., sent. del 18.12.97, "Fisco Nacional D.G.I. c/ Cerámica Argital S.A.I.C."). En consecuencia, conforme lo dispuesto por el art. 560 del C.P.C.C., corresponde declarar la inapelabilidad de la resolución atacada.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84418

03.09.14

"SEMKOW, OLGA MIRTA c/ A.N.Se.S. s/Recurso de queja"

(F.-H.-D.)

SANCIONES CONMINATORIAS

SANCIONES CONMINATORIAS. Aplicación. Facultad del juez.

Si bien es cierto que el juez cuenta con la facultad procesal de aplicar sanciones conminatorias (arts. 35 y 37 del C.P.C.C.), la misma debe ser utilizada con mesura y ante un incumplimiento real, concreto y actual, que entorpezca y obstruya la tramitación de las actuaciones o el cumplimiento de lo decidido, no pudiendo aplicarlas de manera hipotética o conjetural.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 91969

09.12.13

"DUARTE, ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(P.T.-M.-Ch.)

SANCIONES CONMINATORIAS. Aplicación. Facultad del juez.

Recién ante la omisión del organismo de acompañar dentro del plazo fijado, los expedientes administrativos que se le hubieren requerido, el Juez debe meritarse la procedencia de la sanción conminatoria que corresponda según el tenor del incumplimiento.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 91969

09.12.13

"DUARTE, ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios"

(P.T.-M.-Ch.)

SANCIONES CONMINATORIAS. Astreintes. Plazo. Cómputo. Días hábiles administrativos.

Los plazos administrativos han de contarse por días hábiles, conforme la ley 19.549. De esta manera, se modifica lo dispuesto en el art. 28 del Código Civil, y sólo mediante otra ley formal podría establecerse en las cuestiones particulares reguladas en ella, un modo diferente de computar los plazos (cfr. C.N.A.Cont. Adm. Fed., Sala IV, sent. del 25.06.93, "Nacarado, María de las Mercedes c/ D.G.I."; C.F.S.S., Sala I, sent. del 10.02.10, "Maldonado, Pedro Martín"). En consecuencia, corresponde confirmar la decisión del a quo que dispuso la liquidación de astreintes computando los días en la forma referida.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 93096

21.04.14

"MORADAS, SERGIO NORBERTO c/ A.N.Se.S. s/Incidente"

(Ch.-M.-P.T.)

SANCIONES CONMINATORIAS. Astreintes. Plazo. Cómputo.

Conforme lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del Código Civil cabe concluir que -como principio- los plazos se computan teniendo en cuenta tanto los días hábiles como los feriados, pudiendo inclusive terminar en uno de ellos. Esto a diferencia de los plazos procesales que -conforme el art. 156 del C.P.C.C.- no son continuos pues sólo se computan los días hábiles.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84511

17.09.14

"DESPLATS DE PAZ, MARÍA INÉS JOSEFINA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución Previsio-

nal”
(F.-D.-H.)

SANCIÓNES CONMINATORIAS. Astreintes. Plazo. Cómputo.

Bien distingue el art. 28 del Código Civil que no deben confundirse los plazos procesales con los judiciales -aquellos que fijan los tribunales-, pues mientras los primeras están dispuestos por leyes de forma, los segundos son los plazos fijados -como en el caso de las astreintes- por resolución de los jueces, que se consideran plazos civiles y a los que se aplica, en consecuencia, la regla del art. 27 del referido ordenamiento, con la salvedad -que en la resolución obrante en autos no se efectuó- de que el plazo se computaría teniendo en cuenta solamente los días útiles si así se expresara (cfr. “Guiral Vda. de Gómez, Elma c/ E.N. (EMGE), C.N.A. Cont. Adm. Fed., Sala IV).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84511

17.09.14

”DESPLATS DE PAZ, MARÍA INÉS JOSEFINA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución Previsional”

(F.-D.-H.)

SANCIÓNES CONMINATORIAS. Astreintes. Plazo. Cómputo.

Para determinar el monto de las astreintes deben computarse los días corridos transcurridos de incumplimiento de la manda judicial.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84511

17.09.14

”DESPLATS DE PAZ, MARÍA INÉS JOSEFINA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución Previsional”

(F.-D.-H.)

SANCIÓNES CONMINATORIAS. Astreintes. Plazo. Cómputo.

La aplicación de astreintes constituye el ejercicio de una facultad procesal discrecional que el Código le irroga al juez -arts. 25 y 36 C.P.C.C.- (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 06.08.02, "Risso, Marcos Aurelio"). Las mismas actúan como medio de coacción tendiente a vencer la voluntad del deudor contumaz, y su finalidad no es la de reparar el perjuicio causado por el retraso en el cumplimiento, sino forzar al deudor a saldar la deuda o cumplir con la obligación resultante de la sentencia (cfr. C.N.A.Civ., Sala M, "Caputto c/ Consorcio Jufre 460"; ídem Sala K, "Vilar Baamil, Gustavo y otra").

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84511

17.09.14

”DESPLATS DE PAZ, MARÍA INÉS JOSEFINA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución Previsional”

(F.-D.-H.)

SANCIÓNES CONMINATORIAS. Astreintes. Plazo. Cómputo.

Las astreintes se diferencian de la indemnización de daños y perjuicios en que aquellas tienen por finalidad el cumplimiento de la prestación, son provisionales y su monto no se fija en la medida del daño, evitando que lleguen a constituirse en una fuente de enriquecimiento para la contraparte.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 84511

17.09.14

”DESPLATS DE PAZ, MARÍA INÉS JOSEFINA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución Previsional”

(F.-D.-H.)S